

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCION
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Vigésima Tercera Reunión del Comité de Expertos
Del 18 al 21 de marzo de 2014
Washington, DC

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.407/13 rev. 4
21 Marzo 2014
Original: español

REPÚBLICA DOMINICANA

(INFORME FINAL)

(Aprobado en la sesión plenaria del 21 de marzo de 2014)

SUMARIO DEL INFORME

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en la República Dominicana del artículo III, Párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a la República Dominicana en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de la República Dominicana al cuestionario; la información suministrada por organizaciones de la sociedad civil; la información recabada por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 8 y el 10 de octubre de 2013 por los miembros del subgrupo de análisis de Colombia, integrado por Honduras y Uruguay, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por la República Dominicana y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si esté es adecuado para los propósitos de la Convención, y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de la República Dominicana analizados en este informe son: la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA); el Poder Judicial; la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y la Contraloría General de la República (CGR).

Algunas de las recomendaciones formuladas a la República Dominicana, para su consideración, en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

Con respecto a la DIGEIG, considerar darle rango de ley aprobada por el Congreso Nacional a su creación; adoptar su reglamento operativo, los manuales de procedimiento de sus áreas sustantivas, y los mecanismos de coordinación institucional con determinadas entidades; dotarla con el personal suficiente para el desarrollo de sus funciones y con los recursos financieros necesarios para impartir capacitación especializada al mismo; garantizar que las instituciones públicas le suministren oportunamente la información y documentación necesaria para adelantar las investigaciones de su competencia; adoptar mecanismos de seguimiento que le permitan conocer el resultado de las recomendaciones de sanción que formule y de las denuncias de actos de corrupción que envíe a las instancias correspondientes; elaborar información estadística

relativa a lo anterior, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas; y desarrollar la función relativa a realizar estudios sobre el funcionamiento individual y coordinado de los órganos de control del uso de los recursos públicos previstos en la Constitución y las leyes, que tiene como propósito mejorar las debilidades que puedan ser detectadas

En relación con la PEPCA, formalizar la adopción de su Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos; actualizar su “Manual de Organización y Funciones”; definir los “Criterios de Significación”, de acuerdo a los cuales se estipularán las pautas para la selección de los casos que serán directamente atendidos por su Dirección; adoptar las medidas pertinentes para garantizar la independencia técnica, administrativa y funcional de la PEPCA y de sus fiscales; adoptar un procedimiento más ágil para la recuperación de activos vinculados con hechos de corrupción; seleccionar a través del sistema de mérito su personal técnico y administrativo; dotarla con suficientes fiscales e investigadores; fortalecer los mecanismos de capacitación de su personal especializado; efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en las declaratorias de prescripción relacionadas con hechos de corrupción, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas; y adoptar un sistema de seguimiento que le permita conocer los montos de lo recuperado y efectivamente ingresado al erario público, como resultado de las acciones de recuperación de activos vinculados con hechos objeto de investigación de la PEPCA.

En lo atinente al Poder Judicial (PJ), adoptar las medidas pertinentes para asignarle la partida presupuestal que le corresponde de acuerdo con la ley; poner en funcionamiento los tribunales y juzgados de la jurisdicción penal creados por ley que aún no se encuentran operando; garantizar la implementación del proyecto de modernización denominado “Captura de Audio de las Audiencias” y de la línea de acción del “Plan Estratégico 2009 - 2013, relativo a la “sistematización, creación y difusión de jurisprudencia y documentación judicial”, en la jurisdicción penal, particularmente en lo concerniente a casos de corrupción; garantizar la expansión territorial del “Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal (MGDP)”; impartir a los jueces de la jurisdicción penal capacitación específicamente relacionada con el juzgamiento de los actos de corrupción tipificados como delitos en el Código Penal; y elaborar información estadística relativa a casos de corrupción de conocimiento de las diferentes instancias del PJ, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas.

En lo relativo a la CCRD, adoptar un procedimiento más ágil para la recuperación por la vía civil de activos vinculados con la declaratoria de la responsabilidad civil; adoptar las medidas pertinentes para que la CCRD pueda hacer una fiscalización efectiva a las municipalidades; asegurar que la “Liga Municipal Dominicana” le preste la debida colaboración a la CCRD; garantizar la ejecución de los objetivos del “Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional 2010 - 2016” - PEDSI, que se encuentran con un bajo nivel de ejecución; adoptar las medidas pertinentes para que la CCRD pueda ejercitar efectivamente su autonomía presupuestaria y para solicitar a los organismos internacionales que le brinden la asistencia económica y técnica necesaria para que pueda impartir capacitación especializada a su personal y pueda contar con el apoyo logístico y los equipos de tecnología de la información que requiera; actualizar su Reglamento de Recursos Humanos; adoptar un sistema de seguimiento que le permita conocer el trámite dado por las instancias competentes a las responsabilidades administrativas y civiles que declare, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas; efectuar un estudio de las causas que podrían estar incidiendo en el escaso número de sentencias condenatorias proferidas por los tribunales judiciales con base en los indicios de responsabilidad penal establecidos por la CCRD, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas; y elaborar información estadística compilada sobre sus actividades en materia de prevención de la corrupción, los resultados de sus auditorías y las investigaciones de las denuncias o sospechas fundamentadas

de hechos ilícitos contra el patrimonio público, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas.

En lo concerniente a la CGR, considerar modificar la ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y la CGR, para adecuarla a las nuevas disposiciones constitucionales en la materia; expedir el Reglamento de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, previsto en dicha ley; elaborar el plan de acción relativo a la “Implementación de un Sistema de Contraloría Social”; dotarla con los recursos necesarios para adecuar su plataforma tecnológica a los requerimientos de su estructura operacional y para la ejecución de su Plan Estratégico de Tecnología de la Información; asignarle las partidas presupuestales necesarias para desarrollar las actividades relacionadas con las metas del “Plan Estratégico Institucional 2010 - 2012”, correspondientes a los objetivos estratégicos de “Fortalecimiento Institucional” y de “Desarrollo de Operaciones”, que se encuentran pendientes de ser ejecutadas o han sido pospuestas para el próximo Plan; dotarla con los recursos necesarios para cumplimiento de sus responsabilidades, en particular, para el control del sector descentralizado y de los municipios, al igual que para capacitación de su personal y para que pueda contar con personal especializado y con una mejor infraestructura física; y elaborar información estadística compilada sobre las acciones realizadas para apoyar los planes y programas de prevención de la corrupción, las investigaciones administrativas adelantadas, las resoluciones estableciendo responsabilidad administrativa, las inspecciones o evaluaciones realizadas y las recomendaciones formuladas a las entidades para mejorar el control interno, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas.

Las buenas prácticas sobre las que la República Dominicana suministró información se refieren, sintéticamente, a la “Estandarización Portales Web” de los organismos públicos, con base en las directrices de la DIGEIG; la creación de la “Unidad de Auditoría Forense”, adscrita a la PEPCA, que brinda auxilio en la investigación, para los análisis financieros y el peritaje; el Sistema de Carrera Judicial, “que regula el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro del juez, con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad”; y la “implementación y seguimiento del Sistema Nacional de Control Interno”, a través de la emisión de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), por parte de la CGR, que “tiene el objetivo fundamental de estandarizar los procesos y controles en las entidades estatales.”

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a la República Dominicana en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por la República Dominicana en su respuesta al cuestionario y en la visita *in situ*, se definieron cuales de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente; cuáles requerían atención adicional; cuáles se replanteaban; y cuáles ya no tenían vigencia, y se hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como anexo I del informe.

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destacan, la medida de la Ley sobre Función Pública que prohíbe expresamente que laboren en una misma institución conyugues y familiares hasta el tercer grado; la designación de un órgano rector en materia de conflictos de intereses; la asignación al mismo de competencias de recepción e investigación de denuncias sobre supuestas violaciones al régimen ético y disciplinario, el cual, cuenta además con medios electrónicos para facilitar la presentación de dichas denuncias; la elaboración de un formulario virtual, a través del cual los funcionarios públicos obligados por la ley realizan su Declaración Jurada de Bienes; la presentación de un informe financiero anual por parte de dichos funcionarios, como complemento a tal Declaración; la disponibilidad para el público, de las copias de dicha Declaración, a través de la página “Web” de la PEPCA; la designación del Defensor del

Pueblo; la designación de un órgano rector en materia de libre acceso a la información pública; y los avances en la estandarización de los “Portales Web” de los organismos públicos, con base en las directrices de dicho órgano, al igual que en la apertura de Oficinas de Acceso a la Información Pública.

Algunas de las recomendaciones formuladas a la República Dominicana en la Primera Ronda que quedan vigentes apuntan a propósitos, tales como: fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública; fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General de Bienes Nacionales a fin de que pueda desarrollar cabalmente sus responsabilidades en la creación y mantenimiento de un inventario de los bienes del Estado; continuar y perfeccionar la labor que realiza la Dirección General de Contabilidad en la organización de la contabilidad de Estado, asegurando que ésta cuente con los recursos necesarios para desempeñar sus labores; mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos; avanzar en la implementación de la Ley General de Libre Acceso a Información Pública; complementar los mecanismos de consulta vigentes; fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública y en su seguimiento; continuar determinando áreas específicas en las cuales considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte en la Convención para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción; y desarrollar procedimientos e indicadores que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones que le fueron formuladas en la Primera Ronda.

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN**

**INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA
SER ANALIZADAS EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES FORMULADAS A DICHO PAÍS EN LA PRIMERA RONDA ¹**

INTRODUCCIÓN

1. Contenido del Informe

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis integral de la implementación en la República Dominicana de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda de Análisis. Dicha disposición es la prevista en el Artículo III, Párrafo 9, de la Convención, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, aludirá a las buenas prácticas que en relación con los órganos de control superior objeto de análisis en el presente informe, el Estado analizado ha deseado voluntariamente compartir.

[3] En tercer lugar, de conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos del MESICIC en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República Dominicana por el Comité de Expertos del MESICIC en el informe que adoptó para este país en la Primera Ronda, y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes que adoptó para el mismo en la Segunda y la Tercera Ronda, los cuales se encuentran publicados en la siguiente página en “Internet”:
<http://www.oas.org/juridico/spanish/reptom.htm>

2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República Dominicana depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 29 de marzo de 1996.

[5] Asimismo, la República Dominicana suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001.

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

1. Respuesta de la República Dominicana

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República Dominicana en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Dirección General de Ética e Integridad

¹ El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 21 de marzo de 2014, en el marco de su Vigésima Tercera Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 18 al 21 de marzo de 2014.

Gubernamental (DIGEIG), la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. La República Dominicana envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_repdom.htm

[7] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*,² la cual se realizó durante los días del 8 al 10 de octubre de 2013, por parte de los representantes de Honduras y Uruguay, en su calidad de integrantes del subgrupo de análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República Dominicana hasta el día 10 de octubre de 2013, fecha de culminación de la visita antes aludida y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento*; la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*. Esta información puede consultarse en la siguiente página en “Internet”: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_repdom.htm

2. Información recibida de organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, de asociaciones profesionales; académicos e investigadores.

[9] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.

[10] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada al Estado analizado, se recabó información de organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones profesionales que fueron invitadas a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita *in situ* que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)

[11] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cinco órganos seleccionados por la República Dominicana que serán analizados en el presente informe:

². Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf

[12]- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que de conformidad con el artículo 1 del Decreto 486-12, es el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental.

[13]- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Resolución No. 0003 del 4 de febrero del año 2013, se encuentra adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y es la encargada de establecer la política de persecución de los casos de crímenes y delitos de Corrupción Administrativa a nivel nacional, sirviendo, además, como asesora de las fiscalías en el ámbito de su especialidad.

[14]- El Poder Judicial (PJ), que de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política, administra la justicia en nombre de la República. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Constitución y por las leyes.

[15]- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), que de conformidad con el artículo 248 de la Constitución Política, es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

[16]- La Contraloría General de la República (CGR), que de conformidad con el artículo 247 de la Constitución Política, es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.

1. DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (DIGEIG)

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[17]La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[18]En relación con su objetivo cabe anotar que de conformidad con el artículo 1 del Decreto 486-12,³ que la crea en agosto de 2012, la DIGEIG es el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental.

[19]De conformidad con los artículos 3 y 4 del Decreto 486-12, la DIGEIG esta adscrita al Ministerio de la Presidencia y debe someter sus planes y propuestas al Poder Ejecutivo para su conocimiento y aprobación. Esta a cargo de un Director General, designado por el Presidente de la República y cuenta con un Director Ejecutivo, responsable de los aspectos técnicos y operativos de la institución. Ambos directores son funcionarios de libre nombramiento y remoción.

[20]En cuanto a sus funciones,⁴ en el artículo 6 del Decreto 486-12 se prevén entre ellas las siguientes, que se relacionan con la prevención de la corrupción: contribuir a desarrollar y fortalecer una cultura ética, de transparencia e integridad, promover los valores éticos y morales en la

³ Este Decreto puede consultarse en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_repdom_decDIGEIG.pdf

⁴ La totalidad de las funciones a cargo de la DIGEIG pueden consultarse en el artículo 6 del Decreto 486-12, disponible en el enlace electrónico antes anotado.

administración pública (numeral 3); dar seguimiento y asesorar a las Comisiones de Ética para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y su participación activa en la dinámica institucional (numeral 4); asesorar a los servidores públicos ante cualquier duda que puedan tener en el ejercicio de sus funciones, sobre comportamientos éticos y morales (numeral 5); promover y realizar investigaciones en la administración pública sobre temas de ética e identificar oportunidades para robustecer el régimen ético (numeral 6); diseñar y ejecutar programas de capacitación para los miembros de las Comisiones de Ética de las instituciones públicas (numeral 7); dar seguimiento a los compromisos pendientes de cumplimiento, de la “Iniciativa Participativa Anticorrupción” (IPAC), vinculados con los temas de ética y transparencia gubernamental (numeral 9); y contribuir a fortalecer los modelos de prevención y control en el ámbito administrativo (numeral 18).

[21]El artículo 6 del Decreto 486-12, contempla también, entre las funciones de la DIGEIG, las siguientes que se relacionan con la investigación y sanción de casos de corrupción: investigar las actuaciones de los servidores públicos que transgredan el régimen ético y disciplinario establecido en la Ley de Función Pública, cuando las autoridades a cargo no adopten las acciones correctivas oportunamente (numeral 2); recibir denuncias sobre supuestas violaciones en perjuicio del Estado, la Sociedad Dominicana o los servidores públicos, al régimen ético y disciplinario y al régimen de prohibiciones establecido en la Ley 41-08 y cualquier otro régimen de incompatibilidad y prohibiciones aplicable a los servidores públicos y recomendar las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Administración Pública previstas en dicha ley (numeral 20); aplicar las sanciones que correspondan, si la institución donde labora el (la) servidor (a) público (a), obvia la misma (numeral 21); canalizar a las instancias correspondientes, aquellas denuncias de actos de corrupción pública que por intermedio de las CEP, de la propia DIGEIG, el rumor público u otra vía, formulen personas o instituciones sobre actuaciones dolosas de funcionarios o empleados públicos, para que dichos organismos evalúen los méritos de las mismas y, en caso de que proceda, inicien las tramitaciones legales correspondientes (numeral 23); someter los hechos investigados al Ministerio Público, si procede y dar seguimiento a los expedientes sometidos hasta su solución final y ofrecer respuesta a la sociedad o a las víctimas (numeral 24).

[22]El mencionado artículo 6 del Decreto 486-12, contempla además otras funciones de la DIGEIG que se relacionan con su condición de órgano rector en materia de acceso a la información pública que le atribuye el artículo 5 del citado Decreto, al igual que otras relativas al sistema de Declaración Jurada Patrimonial, en lo que corresponde al cumplimiento de la obligación legal de su presentación.

[23]Por último, cabe destacar entre las funciones de la DIGEIG, la contemplada en el numeral 26 del artículo 6 del Decreto 486-12, relativa a realizar estudios sobre el funcionamiento individual y coordinado de los órganos de control del uso de los recursos públicos previstos en la Constitución de la República Dominicana y las leyes, o sobre cualquier otro tema relacionado con las funciones de la DIGEIG; presentar al Poder Ejecutivo las recomendaciones pertinentes, y diseñar y ejecutar un plan de acción conjunto, al cual le dará seguimiento a su aplicación, a fin de mejorar las debilidades que puedan ser detectadas.

[24] En cuanto a la coordinación de sus funciones con otros órganos y para obtener apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía, el numeral 28 del artículo 6 del Decreto 486-12, prevé entre las funciones de la DIGEIG, la de coordinar con las instituciones de control, fiscalización y auditoría: Cámara de Cuentas (CCRD), Contraloría General de la República (CGR), Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), así como con las instituciones de la sociedad civil, el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana (ICPARD), el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, entre otros, solicitando su experticio para cumplir con el mandato de dar seguimiento a denuncias provenientes de cualquier miembro de alguna institución gubernamental. El artículo 2 del citado Decreto, ordena por su parte a todas las instituciones del

Poder Ejecutivo ofrecer colaboración plena a la DIGEIG, entregarle la información que solicite, permitirle el acceso a los archivos institucionales y responderle oportunamente.

[25]En desarrollo de lo anterior, la DIGEIG ha firmado convenios de cooperación con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana (ICPARD) y el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IARD).⁵

[26]Las decisiones que se adoptan en la DIGEIG son de carácter unipersonal, ya que emanan del Director General, el Director Ejecutivo y los encargados departamentales. Al ser una dependencia adscrita al Ministerio de la Presidencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 486-12, las decisiones de la DIGEIG están sujetas a revisión por dicho Ministerio.⁶

[27]La DIGEIG cuenta con tres áreas sustantivas: el Departamento de Promoción a la Ética e Integridad, que tiene a su cargo la ejecución de planes y acciones con el objeto de fomentar y elevar la conciencia social sobre la ética en la administración pública; el Departamento de Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información, que es el responsable de la elaboración de políticas estatales de transparencia y lucha contra la corrupción en el sector público; y el Departamento de Investigación y Seguimiento, que tiene como función principal investigar las actuaciones de los servidores públicos que transgredan el régimen ético y disciplinario establecido en la Ley de Función Pública, así como identificar las posibles transgresiones a la ley penal que deriven de estas faltas disciplinarias.⁷

[28]Respecto a sus recursos humanos, a su capacitación y al régimen de los mismos, la DIGEIG se rige por la Ley 41-08 de la Función Pública que regula, entre otros, la carrera administrativa y la vinculación por concurso (artículo 37) al igual que el régimen ético y disciplinario del servidor público (artículos 77 a 89), y por su Reglamento de Aplicación 523-09, de Relaciones Laborales, en el cual se prevé como derecho de los funcionarios públicos el de recibir la inducción, formación y capacitación adecuada (artículos 48 a 54) y se regulan sus deberes (artículos 97 a 100), la gradación de las faltas y sanciones disciplinarias (artículos 101 a 109) y el procedimiento disciplinario (artículos 110 a 125).

[29]En cuanto a sus recursos presupuestales, el artículo 1 del Decreto 486-12 prevé en su párrafo II que los recursos necesarios para el funcionamiento de la DIGEIG serán aportados directamente por el Poder Ejecutivo del presupuesto nacional y de asignaciones especiales.

[30]En relación con la descripción de funciones y existencia de manuales o procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, la DIGEIG cuenta con un Manual de Cargos en el que se describen las funciones de los diferentes empleos de la entidad y los requisitos para su desempeño, al igual que con un Manual de Políticas de Tecnologías de la Información y un Manual de Políticas Internas de Control.⁸ Además, el artículo 11 del Decreto 486-12 prevé que para regular sus operaciones, la DIGEIG deberá presentar a la consideración del Poder Ejecutivo, en un plazo de

⁵ Estos convenios pueden consultarse en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_repdom.htm (apartados correspondientes a la DIGEIG)

⁶ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la DIGEIG, página 2

⁷ Ver presentación de la DIGEIG en la visita *in situ*, accesible a través del siguiente enlace: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_repdom_plan.ppt

⁸ Estos convenios pueden consultarse en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_repdom.htm (apartados correspondientes a la DIGEIG)

sesenta (60) días a partir de la promulgación del presente Decreto, el Reglamento Operativo que regulará su funcionamiento.⁹

[31] En cuanto a la manera en que se le suministra información a los ciudadanos y a la rendición de cuentas, a través del enlace “Transparencia” de la página “Web” de la DIGEIG <http://digeig.gob.do/trans/s/> los ciudadanos pueden tener acceso a la información de la institución, marco legal, sus planes de trabajo, estadísticas, nomina de empleados, ejecución presupuestal y atención en línea y pueden descargar los formularios para realizar solicitudes de acceso a la información. Además, el Departamento de Planeación prepara anualmente informes de gestión de la entidad para el Ministerio de la Presidencia,¹⁰ y los ciudadanos pueden presentar denuncias, quejas y reclamaciones de conformidad con lo previsto en el Decreto 694-09.

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[32] La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[33] En primer lugar, en el numeral 21 del artículo 6 del Decreto Ejecutivo 486-12, que la creó, se le atribuye la función de “aplicar las sanciones que correspondan, si la institución donde labora el (la) servidor (a) público (a), obvia la misma”, lo cual resulta difícil de armonizar con las atribuciones que para adoptar la decisión de sancionar o no sancionar, como resultado de las investigaciones adelantadas por casos de eventuales faltas administrativas, le están atribuidas por la Ley 41-08 de la Función Pública, en sus artículos 85 y 86, a los supervisores de los servidores públicos, a los titulares de las instituciones donde laboran, y al Presidente de la República, de acuerdo con la gravedad de la sanción a imponer, las cuales prevalecerían por su rango legal superior al del citado Decreto Ejecutivo. Por tal razón, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado a fin de que considere adoptar las medidas pertinentes para excluir de las atribuciones de la DIGEIG la aludida función (ver recomendación 1.4.1 del capítulo II de este informe).

[34] Por otra parte, la organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana”, que fue invitada a participar en la visita *in situ*, estimó recomendable que se revisen las atribuciones asignadas a la DIGEIG, a fin de que no contravengan con instituciones con carácter constitucional y legal, de las cuales la DIGEIG no tiene competencia jerárquica legal.

[35] En segundo lugar, la creación de la DIGEIG por Decreto Ejecutivo no permite que importantes funciones a su cargo, tales como las orientadas a prevenir la corrupción, tengan un alcance que pueda ir más allá del Poder Ejecutivo, y que cubran a los demás poderes del Estado que no cuentan con órganos como éste, además de que hace vulnerable su permanencia. Por tal razón, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado a fin de que considere adoptar las medidas pertinentes para darle rango legal a la creación de la DIGEIG y extender el alcance de sus funciones más allá del Poder Ejecutivo, en armonía con las atribuciones que su Constitución Política le reconoce a otros órganos y Poderes del Estado (ver recomendación 1.4.2 del capítulo II de este informe).

⁹ La DIGEIG informó que ya se presentó ante el Poder Ejecutivo un proyecto de Reglamento Operativo, pero que aún no se ha expedido el correspondiente Decreto de adopción.

¹⁰ Debido a que la DIGEIG se creó el 21 de agosto de 2012, hasta la fecha de la visita *in situ* (8 a 10 de octubre de 2012) sólo se había elaborado la Memoria de Septiembre a Diciembre /2012, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_repdom.htm (apartados correspondientes a la DIGEIG)

[36] En tercer lugar, en relación con la función que le asigna el numeral 2 del artículo 6 del Decreto 486-12, relativa a “investigar las actuaciones de los servidores públicos que transgredan el régimen ético y disciplinario establecido en la Ley de Función Pública, cuando las autoridades a cargo no adopten las acciones correctivas oportunamente”, se estableció en la visita *in situ* que no se han definido criterios por escrito para determinar cuando se considera que las autoridades a cargo no han adoptado las acciones correctivas oportunamente. El Comité, teniendo en cuenta que la adopción de tales criterios sería beneficiosa para la DIGEIG, por cuanto la ayudaría a conocer con claridad cuando debe hacer uso de la aludida función, le formulará una recomendación al Estado analizado en tal sentido (ver recomendación 1.4.3 del capítulo II de este informe).

[37] En cuarto lugar, no obstante que el artículo 11 del Decreto 486-12 prevé que para regular sus operaciones, la DIGEIG deberá presentar a la consideración del Poder Ejecutivo, en un plazo de sesenta (60) días a partir de la promulgación de dicho Decreto (agosto 21 de 2012), el Reglamento Operativo que regulará su funcionamiento, éste aún no ha sido adoptado por el Poder Ejecutivo, a pesar de que la DIGEIG ya presentó a su consideración el proyecto correspondiente. El Comité, teniendo en cuenta la importancia que tiene para la DIGEIG el que pueda contar con dicho Reglamento, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 1.4.4 del capítulo II de este informe).

[38] En quinto lugar, en la visita *in situ* se informó por parte de la DIGEIG que aún no se han adoptado los manuales para los procedimientos a cargo de las áreas sustantivas de la entidad, y que el Manual de Cargos está en revisión. Por tal razón, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado a fin de que considere adoptar dichos manuales y culminar la revisión del Manual de Cargos de la DIGEIG (ver recomendación 1.4.5 del capítulo II de este informe).

[39] En sexto lugar, teniendo en cuenta que el numeral 28 del artículo 6 del Decreto 486-12, dispone expresamente la coordinación de la DIGEIG con la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, la Contraloría General de la República, la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (actualmente Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa), así como con instituciones de la sociedad civil, el Comité estima útil que por parte del Estado Analizado se considere establecer los mecanismos pertinentes para hacer efectiva dicha coordinación y por tal razón le formulará una recomendación en tal sentido (ver recomendación 1.4.6 del capítulo II de este informe).

[40] Cabe anotar en relación con lo anterior, que la DIGEIG ya ha celebrado convenios de coordinación y cooperación con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana (ICPARD) y el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IARD), instituciones estas que también se mencionan de manera expresa en el numeral 28 del artículo 6 del Decreto 486-12, y que de acuerdo con lo informado en la visita *in situ* ya se cuenta con un borrador de convenio con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

[41] En séptimo lugar, teniendo en cuenta que la DIGEIG es una entidad de reciente creación, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere adoptar las medidas pertinentes para que la misma pueda contar con el personal que necesite tanto en las áreas sustantivas como en las de apoyo, y para impartir capacitación especializada al mismo (ver recomendación 1.4.7 del capítulo II de este informe).

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[42] Se recabó información relativa a los resultados de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), entre la que se destaca la siguiente:

[43] En primer lugar, en lo que se relaciona con las funciones de prevención de la corrupción a cargo de la DIGEIG, se informó en la visita *in situ*, sobre lo siguiente:

[44]- La expedición de la Resolución 01/2012 en la que se instruye a los directivos titulares de las instituciones públicas del gobierno central a crear, mantener vigentes y en funcionamiento una Comisión de Ética (CEP), como resultado de lo cual, se han conformado 239 de esas Comisiones en 172 instituciones públicas a nivel nacional, 120 de las cuales han participado en diplomados de capacitación en ética pública; han sido suscritos 329 Códigos de Pautas Éticas y se han recibido 40 reportes de evaluación al cumplimiento de dichos Códigos por parte de las CEP.

[45]- La expedición de la Resolución 02/2012 en la que se instruye a las máximas autoridades de las instituciones públicas del gobierno central y descentralizado a constituir las Oficinas de Acceso a la Información Pública, como resultado de lo cual, se han constituido 195 de dichas oficinas, debiéndose llegar a un total de 209.

[46]- La expedición de la Resolución 01/2013 en la que se dispone que en todo “Portal/Página gubernamental” debe existir una sección de “Transparencia” fácilmente accesible desde la “Página de Inicio”, como resultado de lo cual, de 183 instituciones, 85 han estandarizado la información de sus portales “Web” de acuerdo con lo previsto en dicha Resolución.

[47] En relación con la información anterior, el Comité estima que sirve para determinar que por parte de la DIGEIG, se han desarrollado sus funciones de prevención con respecto a las materias a las que se refiere dicha información, con los resultados indicados, los cuales corresponden al período comprendido entre su creación, el 21 de agosto de 2012, y la fecha de la visita *in situ*.

[48] En segundo lugar, en lo que se relaciona con las funciones de investigación de casos de corrupción a cargo de la DIGEIG, se informó en la respuesta del Estado analizado al cuestionario lo siguiente:¹¹ “En el periodo agosto 2012 - julio 2013 el Departamento de Investigación y Seguimiento (DIS) ha sido apoderado de 84 casos, de los cuales, a la fecha, han sido concluidos 71. • 13 de estos casos se encuentran en curso de investigación. • 6 casos se encuentran suspendidos o paralizados por falta de respuesta de las instituciones públicas a las cuales se les ha solicitado documentación, para poder continuar con la investigación. • Ninguna de las investigaciones ha perimido por haberse vencido algún plazo. • Solo una investigación ha sido archivada porque se remitió al Ministerio Público.”

[49] En relación con la anterior información, el Comité, teniendo en cuenta que en ella se señala que 6 casos se encuentran suspendidos o paralizados por falta de respuesta de las instituciones públicas a las cuales se les ha solicitado documentación para poder continuar con la investigación, le formulará una recomendación al Estado analizado a fin de que considere adoptar las medidas pertinentes para garantizar que las instituciones públicas le suministren oportunamente a la DIGEIG la información y documentación necesaria para adelantar las investigaciones de su competencia (ver recomendación 1.4.8 del capítulo II de este informe).

[50] En tercer lugar, el Comité, teniendo en cuenta que en la visita *in situ* se estableció que la DIGEIG no cuenta con un sistema de seguimiento que le permita conocer el resultado de las recomendaciones de sanción que emita en cumplimiento de sus funciones previstas en el artículo 6 del Decreto 486-12, le formulará una recomendación al Estado analizado a fin de que considere adoptar dicho sistema (ver recomendación 1.4.9 del capítulo II de este informe).

¹¹ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la DIGEIG, página 6

[51] En cuarto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que en la información suministrada por el Estado analizado en relación con investigación de casos de corrupción a cargo de la DIGEIG no se suministran datos sobre el número de recomendaciones de sanción que ha emitido como resultado de dichas investigaciones, ni sobre el número de investigaciones que han concluido sin que se haya efectuado recomendación de sanción, le formulará una recomendación para que considere elaborar información estadística sobre tales aspectos (ver recomendación 1.4.10 del capítulo II de este informe).

[52] En quinto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que en la visita *in situ* se estableció que la DIGEIG no cuenta con un sistema de seguimiento que le permita conocer el resultado de las denuncias de actos de corrupción pública que, en virtud de lo previsto en el numeral 23 del artículo 6 del Decreto 486-12, canalice a través de las instancias correspondientes para que los organismos competentes evalúen los méritos de las mismas y, en caso de que proceda, inicien las tramitaciones legales correspondientes, ni en relación con los hechos investigados que someta al Ministerio Público en virtud de lo previsto en el numeral 24 de dicho artículo, le formulará una recomendación al Estado analizado a fin de que considere adoptar dicho sistema (ver recomendación 1.4.11 del capítulo II de este informe).

[53] En séptimo lugar, el Comité, teniendo en cuenta que en la visita *in situ* se estableció que por parte de la DIGEIG no se ha desarrollado la función que le atribuye el numeral 26 del artículo 6 del Decreto 486-12, relativa a realizar estudios sobre el funcionamiento individual y coordinado de los órganos de control del uso de los recursos públicos previstos en la Constitución y las leyes y presentar al Poder Ejecutivo las recomendaciones pertinentes, y diseñar y ejecutar un plan de acción conjunto, al cual le dará seguimiento a su aplicación, a fin de mejorar las debilidades que puedan ser detectadas, le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere adoptar las medidas que se requieran para el desarrollo de dicha función (ver recomendación 1.4.12 del capítulo II de este informe).

[54] Cabe anotar que en relación con la coordinación de los órganos de control superior, la organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana”, que fue invitada a participar en la visita *in situ*, señaló que en la actualidad cada órgano trabaja de manera individualizada sin tomar en cuenta que integran el sistema superior de control, y que la coordinación entre los mismos es esencial, y por lo tanto, es necesario la formulación de mecanismos que permitan una efectiva coordinación de sus acciones y un continuo seguimiento de sus planes y políticas.

1.4. Conclusiones y recomendaciones

[55] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[56] La República Dominicana ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.

[57] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 1.4.1 Adoptar las medidas pertinentes para excluir de las atribuciones de la DIGEIG la función prevista para la misma en el numeral 21 del artículo 6 del Decreto Ejecutivo 486-12, relativa a “aplicar las sanciones que correspondan, si la institución donde

labora el (la) servidor (a) público (a), obvia la misma” (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).

- 1.4.2 Considerar adoptar, con sujeción a su Constitución Política y a los principios fundamentales de su sistema jurídico, las medidas pertinentes para darle rango de ley aprobada por el Congreso Nacional a la creación de la DIGEIG, garantizando su autonomía técnica y su permanencia, y extendiendo el alcance de sus funciones más allá del Poder Ejecutivo, en armonía con las atribuciones que la Constitución Política le reconoce a otros órganos y Poderes del Estado (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.3 Adoptar criterios para el ejercicio de la función que le asigna a la DIGEIG el numeral 2 del artículo 6 del Decreto 486-12, relativa a “investigar las actuaciones de los servidores públicos que transgredan el régimen ético y disciplinario establecido en la Ley de Función Pública, cuando las autoridades a cargo no adopten las acciones correctivas oportunamente” (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.4 Solicitar al Poder Ejecutivo, por los medios que el ordenamiento jurídico dominicano lo permita, la aprobación del Reglamento Operativo de la DIGEI previsto en el artículo 11 del Decreto 486-12 (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.5 Adoptar los manuales de procedimientos de las áreas sustantivas de la DIGEIG y culminar la revisión del Manual de Cargos de la misma (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.6 Adoptar los mecanismos pertinentes para hacer efectiva la coordinación prevista en el numeral 28 del artículo 6 del Decreto 486-12, con las instituciones señaladas en esta norma con las que la DIGEIG aún no ha establecido dichos mecanismos (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.7 Adoptar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, para que la DIGEIG cuente con el personal necesario para el desarrollo de sus funciones, al igual que con suficientes recursos financieros para impartir capacitación especializada al mismo (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.8 Adoptar las medidas pertinentes para garantizar que las instituciones públicas le suministren oportunamente a la DIGEIG la información y documentación necesaria para adelantar las investigaciones de su competencia (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe).
- 1.4.9 Adoptar un sistema de seguimiento que le permita a la DIGEIG conocer el resultado de las recomendaciones de sanción que formule en cumplimiento de sus funciones previstas en el artículo 6 del Decreto 486-12. Lo anterior, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe).
- 1.4.10 Adoptar un sistema de seguimiento que le permita a la DIGEIG conocer el resultado de la tramitación de las denuncias de actos de corrupción pública canalizadas a través de las instancias correspondientes, y de los hechos investigados sometidos al Ministerio Público, en virtud de lo previsto en los numerales 23 y 24 del artículo 6 del Decreto 486-12. Lo anterior, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe).

- 1.4.11 Elaborar información estadística sobre el número de recomendaciones de sanción formuladas como resultado de las investigaciones de su competencia, y sobre el número de tales investigaciones que han concluido sin que se haya formulado recomendación de sanción. Lo anterior, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe).
- 1.4.12 Adoptar las medidas pertinentes para el desarrollo de la función signada a la DIGEIG en el numeral 26 del artículo 6 del Decreto 486-12, relativa a realizar estudios sobre el funcionamiento individual y coordinado de los órganos de control del uso de los recursos públicos previstos en la Constitución y las leyes y presentar al Poder Ejecutivo las recomendaciones pertinentes, y diseñar y ejecutar un plan de acción conjunto, al cual le dará seguimiento a su aplicación, a fin de mejorar las debilidades que puedan ser detectadas (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe).

2. PROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE PERSECUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA (PEPCA)

2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[58]La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[59]En relación con su objetivo cabe anotar que de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Resolución 0003 de 2013¹² del Consejo Superior del Ministerio Público,¹³ se encuentra adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público,¹⁴ y es la encargada de establecer la política de persecución de los casos de crímenes y delitos de Corrupción Administrativa a nivel nacional, sirviendo, además, como asesora de las fiscalías en el ámbito de su especialidad.

[60]De conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, las procuradurías especializadas, como lo es la PEPCA, son órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y están sujetas a la dirección, coordinación y supervisión directa del Director General de Persecución (DGP). Son creadas por el Consejo

¹² Con anterioridad a esta resolución expedida por el Consejo Superior del Ministerio Público el 4 de febrero de 2013, existía la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DEPCA), creada mediante Decreto No. 324 -07. En virtud de dicha resolución, esta entidad se transformó en Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La resolución 0003 de 2013 se encuentra disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_reptom_res003.pdf

¹³ El Consejo Superior del Ministerio Público es, de acuerdo con el artículo 174 de la Constitución Política, el órgano de gobierno interno del Ministerio Público y esta presidido por el Procurador General de la República, quien es designado por el Presidente de la República y quien de conformidad con el artículo 172 de la Constitución Política dirige el Ministerio Público, el cual, según lo establece el artículo 169 de la Constitución Política, “es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.”

¹⁴ La Dirección General de Persecución del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, estará a cargo de un Director General que será seleccionado por el Procurador General de la República entre los procuradores generales adjuntos. Su mandato durará 4 años y podrá serle renovado por un segundo y único período consecutivo.

Superior del Ministerio Público,¹⁵ con alcance nacional o regional, en atención a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales, y están a cargo de Procuradores Generales de Corte de Apelación.

[61]En cuanto a las funciones de la PEPCA, en el artículo 2 de la Resolución 0003 de 2013, se prevén las siguientes: 1. Establecer la política de persecución de los casos de crímenes y delitos de corrupción administrativa a nivel nacional, sirviendo de asesores a los fiscales en el ámbito de su especialidad; 2. Coordinar con todas la fiscalías el procesamiento de los casos impartiendo instrucciones particulares que correspondan en el ámbito especializado por intermedio del DGP o del Procurador General de la República; 3. En los casos que el interés público lo haga necesario podrá asumir propiamente o por sí misma la investigación dentro del ámbito de su especialidad, previa autorización del DGP o del Procurador General de la República, a través de un dictamen motivado asumiendo la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originalmente apoderado ; 4. Coordinar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, del sistema de justicia y del cualquier otro ámbito, mecanismos de supervisión relacionada con la corrupción administrativa; 5. Implementar mecanismos de control que permitan llevar un registro eficiente de casos procesados en el ámbito de su especialidad; 6. Coadyuvar o asumir el procesamiento de casos o de intervención en hechos penales y casos en los que se haya verificado un acto de corrupción administrativa; 7. Dar asistencia técnica especializada y acompañamiento a los representantes del Ministerio Público de la jurisdicción donde se registró el caso.

[62]El Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos de Investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)¹⁶ (RI), prevé, por su parte, en su artículo 11, entre las funciones de su Director(a), las siguientes: velar porque se mantenga la unidad de criterios y de procedimientos (numeral 1); elaborar y poner en conocimiento del DGP un Plan de Acción Anual de Trabajo (numeral 3); definir los Criterios de Significación de la PEPCA, de acuerdo a los cuales se estipularán las pautas para la selección de los casos que serán directamente atendidos por la Dirección (entre los que podrían establecerse los criterios de: significación económica, institucional, de gestión, de pertinencia y verificabilidad, entre otros) (numeral 4); promover y desarrollar investigaciones de oficio (numeral 5); disponer la apertura de investigaciones respecto de hechos que la PEPCA resulte competente en atención a lo establecido en los puntos 12.3 (Plan Anual de Trabajo) y 12.4 (criterios de significación) de este RI, ya sea a consecuencia de una denuncia o comunicación o bien a raíz de informes elevados por el encargado de investigación (numeral 6); instar la aplicación de medidas disciplinarias ante los organismos que correspondan (numeral 15); disponer la formulación de una acusación ante los Tribunales competentes, cuando de la investigación practicada o la denuncia recibida surja la presunción de ocurrencia de un delito (numeral 16); intervenir en procesos penales (numeral 17); asumir, personalmente o mediante los fiscales en quienes lo delegue, el ejercicio de la acción pública con desplazamiento del fiscal de la causa, cuando existiere mérito para ello (numeral 18); instar acciones civiles de responsabilidad vinculadas con los hechos objeto de investigación (numeral 20)¹⁷; y promover acciones de recuperación de activos vinculadas con los hechos objeto de investigación (numeral 21).

¹⁵ De conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, este Consejo, tiene entre sus funciones, la de aprobar los reglamentos y directrices que permitan implementar dicha Ley.

¹⁶ La PEPCA informó en relación con este Reglamento, que no fue adoptado de manera formal o por medio de una resolución, pero que la PEPCA se rige por el mismo. Este Reglamento esta disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_reglapecapdf

¹⁷ De conformidad con lo previsto en el artículo 50 del Código Procesal Penal , “(...) La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas establecidas por este código, o intentarse

[63]El RI prevé, en su artículo 23, como origen de las actuaciones de la PEPCA, las denuncias presentadas ante la misma, el conocimiento de informes de auditoría y/o denuncias formuladas ante otros organismos estatales, la actuación de oficio, y el conocimiento de un proceso penal. En su artículo 25 establece los criterios para determinar la apertura de una investigación; en su artículo 26 define los criterios para determinar la participación en un proceso penal abierto en otra jurisdicción; y en su artículo 27 establece los criterios bajo los que el Director de la PEPCA podrá asignar el caso a uno a más fiscales de la PEPCA, reasignarlos, o asumir su atención en forma directa en cualquier estado en el que se encuentren.¹⁸

[64]El artículo 10 del RI prevé que la PEPCA esta integrada por: un Director(a), un coordinador(a) de investigación y otro(a) de litigación, por un cuerpo de procuradores generales de corte y procuradores fiscales, por auditores judiciales, por asistentes técnicos que colaborarán con los fiscales de la PEPCA, por una mesa de entradas y por personal administrativo.

[65]En cuanto a la manera como se vincula su personal, la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, establece en su artículo 71 la carrera administrativa del Ministerio Público, disponiendo que el ingreso a la misma se hará a través del cargo de Fiscalizador, mediante concurso, y prevé, en su artículo 72 que el Consejo Superior del Ministerio Público adoptará un reglamento de carrera para el personal técnico y administrativo del Ministerio Público que se regirá por los principios fundamentales de la función pública. El artículo 4 de la Resolución 0003 de 2013, prevé, por su parte, que los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público autorizan al presidente del mismo, que es el Procurador General de la República, a establecer el Organigrama y seleccionar los funcionarios que integran la PEPCA.¹⁹

[66]En cuanto al régimen de su personal y a su capacitación, la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, en sus artículos 73 y 74 consagra sus derechos generales y especiales, previendo entre éstos el de recibir capacitación periódica y especializada en condiciones de igualdad para el

separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal...”. En relación con su ejercicio por parte del Ministerio Público, el artículo 51 del Código Procesal Penal dispone lo siguiente: “Intereses colectivos o difusos. La acción civil puede ser ejercida por el ministerio público o por una organización no gubernamental especializada cuando se trate de infracciones que afecten intereses colectivos o difusos...”. En los artículos 118 a 122 del citado Código se regula la manera para constituirse en parte civil, la oportunidad para hacerlo, los requisitos y el procedimiento a seguir.

¹⁸ Este artículo prevé lo siguiente: “los criterios que se considerarán a la hora de asignar un caso serán: los conocimientos, especialización y carga de trabajo de los fiscales, la gravedad y complejidad del hecho, su vinculación con alguno que esté siendo investigado o haya sido objeto de investigación, así como el interés y la participación que los fiscales (o asistentes) hubiesen tenido en la detección temprana del caso. Los mismos criterios, serán considerados al conformar los equipos de trabajo que colaborarán con los fiscales.”

¹⁹ En el documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA se anota que en virtud de esta autorización el (la) Director(a) de la PEPCA es designado(a) por el Procurador General de la República (página 5) y que “el personal y los recursos humanos técnicos y administrativos son de libre nombramiento, y se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos conforme a la Ley No. 41-08 sobre Función Pública” (página 6). En la visita *in situ* se explicó por parte de la PEPCA, que de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece la carrera del Ministerio Público hay funcionarios de la PEPCA que son de carrera, pero que en virtud de lo previsto en la Resolución No. 003 de febrero 13 de 2013, que elevó a Procuraduría Especializada (PEPCA) la antigua DPCA, el personal administrativo nuevo que entra a la PEPCA (básicamente abogados, auditores y secretarios) es de libre nombramiento del Procurador General (actualmente un 60%).

desempeño de sus funciones;²⁰ en sus artículos 78 a 82 establece sus obligaciones, prohibiciones, inhabilitaciones e incompatibilidades; y en sus artículos 84 a 100 establece su régimen disciplinario, determinando las faltas disciplinarias, el procedimiento para su investigación y sanción, y los órganos competentes para esto. Además, se aplica el Reglamento Disciplinario del Ministerio Público, adoptado por el Consejo Superior del Ministerio Público,²¹ y de conformidad con lo previsto en el artículo 11 (numeral 32), del RI el Director(a) de la PEPCA, tiene entre sus funciones la de ejercer el poder disciplinario sobre todos los integrantes de la PEPCA, sin perjuicio de las atribuciones propias del Procurador General de la República.

[67]En relación con la adopción de decisiones, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, el Procurador General de la República puede dictarle a la PEPCA instrucciones generales sobre la dirección de la investigación de los hechos punibles, el ejercicio de la acción penal y su oportunidad o la protección de víctimas, testigos u otros sujetos (artículo 8) y el Director General de Persecución del Ministerio Público (DGP) puede dictarle instrucciones particulares sobre tales aspectos (artículo 52, numeral 5). Las normas anteriores se complementan con el artículo 11, numeral 2, del RI, que contempla entre las funciones del Director(a) de la PEPCA, la de dictar instrucciones y disposiciones generales obligatorias que deberán ser acatadas por todos aquellos que se desempeñan en la PEPCA, señalando además que en caso de que un fiscal considere que ellas resultan contrarias a la ley, podrá dejar constancia de su opinión fundamentándola, y que cuando ello ocurra, el Director(a) examinará la instrucción cuestionada en un plazo de 10 días, a efectos de modificarla o mantenerla, y que en este último caso, el fiscal estará facultado para hacer llegar su disidencia al DGP a fin de que emita opinión.

[68]En cuanto a la coordinación de sus funciones con otros órganos y para obtener apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía, el artículo 11 del RI, contempla entre las funciones del Director(a) de la PEPCA, las de celebrar convenios de asistencia y cooperación con organismos o entes públicos o privados (numeral 25); llevar adelante las relaciones interinstitucionales que resulten necesarias para el mejor funcionamiento de la PEPCA, con los otros Poderes del Estado, sus organismos y dependencias; con el Ministerio Público; con Organizaciones de la Sociedad Civil; con universidades públicas y/o privadas; con colegios de profesionales y entidades privadas de cualquier tipo (numeral 26); y velar por el establecimiento de mecanismos de coordinación con otras autoridades (como las de la policía judicial u otras agencias oficiales) que puedan brindar auxilio a la PEPCA en el ejercicio de sus funciones, o bien con las instituciones públicas y privadas que puedan colaborar con la institución (numeral 27).

[69]En relación con la descripción de funciones y existencia de manuales o procedimientos documentados para el desarrollo de las mismas, y el uso de tecnología, la PEPCA, además de registrarse por las disposiciones del Código Procesal Penal (Ley 76-02) y de contar con su Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos de Investigación (RI), cuenta con el “Manual de Organización y Funciones”²² en el que se describen las funciones de los diferentes empleos de la Procuraduría General de la República y los requisitos para su desempeño. Se cuenta también, al interior de la

²⁰ Además, el personal de la PEPCA cuenta para su capacitación con la Escuela del Ministerio Público, de acuerdo con lo informado en el documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA (página 17).

²¹ Según su anota en el documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA (página 6) este Reglamento fue aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público en su quinta sesión celebrada el 18 de octubre de 2011.

²² En la visita *in situ* se informó que este Manual esta siendo actualizado al tenor de las nuevas disposiciones de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), de la Contraloría General de la República. Este Manual esta disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_manual.pdf

PEPCA, con un registro informático de gestión de trámites y expedientes, en el cual se encuentran todos los expedientes, trámites, dictámenes y resoluciones del Director de la PEPCA y demás fiscales.²³

[70]En cuanto a sus recursos presupuestales, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, dispone que el Ministerio Público tendrá anualmente una asignación individualizada en el Presupuesto General del Estado, cuyos recursos administrará con total autonomía, sin perjuicio de los controles externos del gasto público establecidos en la Constitución Política. A la PEPCA le es asignada una partida dentro del presupuesto general de la Procuraduría General de la República.²⁴

[71]En cuanto a la manera en que se le suministra información a los ciudadanos y a la rendición de cuentas, a través del enlace de la página “Web” de la PEPCA www.dpca.gob.do los ciudadanos pueden tener acceso a la información sobre la misma, referida a aspectos tales como su misión, objetivos, atribuciones, marco legal y orientación sobre la manera de presentar denuncias. El artículo 20 del RI, correspondiente a “Memoria Anual”, dispone, por su parte, que anualmente la Dirección de la PEPCA elaborará un informe donde se detallen los trabajos realizados, correspondiente al año recién finalizado, el cual contendrá toda aquella información que se considere pertinente y relevante, entre la que podrá incluirse información relativa a: 1) Cantidad de procesos judiciales comunicados a la PEPCA por las demás fiscalías; 2) Tipo de intervención resuelta en cada uno de esos procesos; 3) Resultados de esas intervenciones; 4) Cantidad de denuncias recibidas e investigaciones iniciadas de oficio; 5) Resultados alcanzados en las investigaciones concluidas durante el período, indicando - cuando corresponda- la sede administrativa o judicial donde se hubiesen realizado presentaciones; 6) Los inconvenientes o dificultades experimentados en la realización de las investigaciones y las propuestas de solución que se hubiesen elaborado; 7) Monto de bienes del patrimonio del Estado recuperados; 8) Cantidad de allanamientos, secuestros y otras diligencias probatorias, así como de medidas de coerción solicitadas y concedidas 9) Cantidad de archivos dictados (identificando sus motivos); 10) Cantidad de causas atendidas en otras jurisdicciones territoriales; 11) Cantidad de casos complejos atendidos.

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[72]La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[73]En primer lugar, si bien la PEPCA cuenta con un Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos de Investigación (RI), el Comité, teniendo en cuenta que se ha informado por parte de dicha Procuraduría Especializada del Ministerio Público, que la misma se rige por dicho Reglamento, “el cual no fue adoptado de manera formal o por medio de una Resolución”, le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere formalizar su adopción a través de la norma jurídica que corresponda, emitida por la autoridad del Ministerio Público competente para hacerlo (ver recomendación 2.4.1 del capítulo II de este informe).

[74]El Comité estima que lo anterior contribuiría a fortalecer institucionalmente a la PEPCA, por cuanto el aludido Reglamento, además de contener importantes previsiones para su funcionamiento que sería conveniente sustentar a través de una norma jurídica, prevé en su artículo 6 que transcurridos 365 días desde su entrada en vigencia, la Dirección de la PEPCA deberá elevar al

²³ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA, página 18

²⁴ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA, página 20

Director General de Persecución (DGP) las propuestas de reforma que considere necesarias y pertinentes, y éste a su vez lo elevará al Procurador General de la República. El Comité observa que para hacer operativa la disposición anterior se requiere la certeza que sobre el momento de entrada en vigencia del Reglamento y sobre su contenido confiere la expedición de una norma jurídica de adopción del mismo, expedida por quien tenga competencia para hacerlo.

[75]En segundo lugar, si bien la PEPCA cuenta con el “Manual de Organización y Funciones” de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se describen las funciones de los diferentes empleos y los requisitos para su desempeño, incluyendo los de la PEPCA, el Comité, teniendo en cuenta que según lo informado por la PEPCA en la visita *in situ*, dicho Manual requiere ser actualizado al tenor de las nuevas disposiciones de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), de la Contraloría General de la República, le formulará una recomendación al Estado analizado en ese sentido (ver recomendación 2.4.2 del capítulo II de este informe).

[76]En tercer lugar, el Comité, teniendo en cuenta que de conformidad con el numeral 4 del artículo 11 del Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos de Investigación de la PEPCA, corresponde a su Director(a) definir los Criterios de Significación de la PEPCA, de acuerdo a los cuales se estipularán las pautas para la selección de los casos que serán directamente atendidos por la Dirección (entre los que podrían establecerse los criterios de: significación económica, institucional, de gestión, de pertinencia y verificabilidad, entre otros), y dada la importancia que para la PEPCA tiene el contar con dichos criterios, le formulará una recomendación al Estado analizado en ese sentido (ver recomendación 2.4.3 del capítulo II de este informe).

[77]En cuarto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 53), las procuradurías especializadas, como lo es la PEPCA, son órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y están sujetas a la dirección, coordinación y supervisión directa del Director General de Persecución (DGP), estima necesario que el Estado analizado considere adoptar las medidas o mecanismos pertinentes para garantizar la independencia técnica, administrativa y funcional de la PEPCA (ver recomendación 2.4.4 del capítulo II de este informe).

[78]En quinto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículos 8, 9 y 52, numeral 5), con la Resolución 0003 de 2013 (artículo 2), y con el Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos de Investigación de la PEPCA (artículo 11, numerales 1 y 2), el Procurador General de la República, el Director General de Persecución (DGP) y el Director(a) de la PEPCA, pueden dictarle instrucciones a los fiscales de la PEPCA, estima necesario que el Estado analizado considere adoptar las medidas o mecanismos pertinentes para garantizar la independencia técnica, administrativa y funcional de los fiscales de la PEPCA (ver recomendación 2.4.5 del capítulo II de este informe).

[79]En sexto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que según lo informado por la PEPCA en la visita *in situ*, se requiere contar con un procedimiento más ágil para la recuperación de activos vinculados con hechos de corrupción, y considerando además que esto ayudaría al cumplimiento de la función asignada al Director(a) de la PEPCA en el numeral 21 del artículo 11 del RI de la misma, relativa a “promover acciones de recuperación de activos vinculadas con los hechos objeto de investigación”, le formulará una recomendación al Estado analizado en ese sentido (ver recomendación 2.4.6 del capítulo II de este informe).

[80]En relación con lo anterior, cabe anotar que en la visita *in situ*, se aportó también información por parte de la PEPCA, acerca de la utilización por parte del Ministerio Público del procedimiento previsto para constituirse como parte civil de conformidad a los artículos 50, 51 y 118 a 122 del

Código Procesal Penal, y de la existencia de un proyecto de ley sobre extinción del dominio que incluye casos de corrupción.

[81] En séptimo lugar, el Comité, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, el Consejo Superior del Ministerio Público debe adoptar un reglamento de carrera para el personal técnico y administrativo del Ministerio Público que se regirá por los principios fundamentales de la función pública, y dada la importancia que para la vinculación y permanencia de dicho personal, tiene el contar con tal reglamento, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 2.4.7 del capítulo II de este informe).

[82] En octavo lugar, el Estado analizado informó en su respuesta al cuestionario,²⁵ en relación con la PEPCA, que “el personal y los recursos humanos técnicos y administrativos son de libre nombramiento”, explicándose luego, en la visita *in situ*, por parte de la PEPCA, que de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece la carrera del Ministerio Público hay funcionarios de la PEPCA que son de carrera, pero que en virtud de lo previsto en la Resolución No. 003 de febrero 13 de 2013, el personal administrativo nuevo que entra a la PEPCA (básicamente abogados, auditores y secretarios) es de libre nombramiento del Procurador General de la República (actualmente un 60%).

[83] En relación con lo anterior, el Comité estima que si bien el artículo 4 de la Resolución No. 003 de febrero 13 de 2013, expresa que los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público autorizan al Presidente del mismo, que es el Procurador General de la República, a seleccionar los funcionarios que integran la PEPCA, frente a esta norma prevalecería lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, que considera de carrera al personal técnico y administrativo del Ministerio Público, al encomendarle al Consejo Superior del Ministerio Público adoptar un reglamento de carrera para el mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando además, que sería beneficioso para la PEPCA el poder contar con personal del nivel técnico y administrativo seleccionado a través del sistema de mérito, el Comité le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 2.4.8 del capítulo II de este informe).²⁶

[84] En noveno lugar, teniendo en cuenta que en la respuesta del Estado analizado al cuestionario relativa a la PEPCA,²⁷ en el apartado correspondiente a dificultades para el logro de sus propósitos, se puso de presente “la necesidad de un mayor número de fiscales e investigadores debido al gran volumen de expedientes a los fines de dar respuestas más rápidas a la sociedad”, el Comité le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 2.4.9 del capítulo II de este informe).

[85] Cabe anotar en relación con lo anterior, que en la visita *in situ* la PEPCA informó de la reciente incorporación de 2 fiscales, con lo cual el número total de fiscales de la PEPCA aumentó a 8, pero reiteró la necesidad de contar con un mayor número de fiscales e investigadores puesta de presente en la respuesta al cuestionario.

²⁵ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA, página 6

²⁶ En el presente informe se analizan las citadas normas de selección de personal de la PEPCA, teniendo en cuenta que en la Segunda Ronda, en lo concerniente al régimen de vinculación de servidores públicos, no se analizó esta entidad, que se conformó como Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa mediante Resolución No. 003 de febrero 13 de 2013.

²⁷ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA, página 24

[86] Cabe anotar también en relación con lo anterior, que la organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana”, que fue invitada a participar en la visita *in situ*, manifestó, refiriéndose a la PEPCA, entre otros, que “esta vital institución no cuenta con el apoyo necesario para cumplir con sus funciones y competencias, evidenciado por las partidas presupuestarias asignadas, el escaso personal especializado, el precario equipamiento de las oficinas, todo lo cual refleja una lenta respuesta en la investigación.”

[87] En décimo lugar, teniendo en cuenta que en la respuesta del Estado analizado al cuestionario relativa a la PEPCA,²⁸ en el apartado correspondiente a dificultades para el logro de sus propósitos, se puso de presente que “es pertinente fortalecer los mecanismos de capacitación del personal especializado (fiscales, investigadores y personal técnico y administrativo), por ejemplo, en las áreas como recuperación de activos provenientes de actos de corrupción”, el Comité le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 2.4.10 del capítulo II de este informe).

[88] Cabe anotar en relación con lo anterior, que la organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana”, que fue invitada a participar en la visita *in situ*, manifestó, refiriéndose a la PEPCA, entre otros, que “la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) debe de integrar una capacitación especializada a los miembros de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, ya que sus funcionarios no han recibido en los últimos años una formación actualizada a través de la ENMP; solo han contado con esporádicas capacitaciones con el apoyo de organismos internacionales.”

[89] En undécimo lugar, teniendo en cuenta que en la visita *in situ*, se puso de presente por parte de la PEPCA, como una dificultad, la baja remuneración salarial de los fiscales, el Comité le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 2.4.11 del capítulo II de este informe).

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[90] Se recabó información relativa a los resultados de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), entre la que se destaca la siguiente:

[91] En primer lugar, en la respuesta del Estado analizado al cuestionario,²⁹ se informó acerca de una campaña publicitaria realizada en el año 2009 para promover las denuncias a través de una línea telefónica, al igual que de un Proyecto de Relanzamiento de la Unidad de Educación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). En la visita *in situ* se precisó que las funciones de la PEPCA se enfocan ahora en la persecución, más no así en la prevención, como anteriormente se hacía, pero que actualmente están inmersos en el citado proyecto, el cual consideran muy importante, y con el cual, según se anota en la aludida respuesta, se pretende impulsar el lanzamiento de la nueva PEPCA en consideración a la resolución que la declaró como una Procuraduría Especializada, “dada la atención especial que reviste el tema de la corrupción administrativa frente a toda la sociedad Dominicana, tomando como objetivo poder llegar a las diferentes esferas sociales, especialmente a los empleados públicos del Estado, los estudiantes universitarios y del nivel medio, a través de charlas referentes al tema de la corrupción, y de igual modo, crear un vínculo más fuerte y estrecho con las instituciones visitadas.”

[92] En relación con lo anterior, el Comité estima que dada la importancia que tiene para la PEPCA el que se pueda realizar el aludido proyecto, le formulará una recomendación al Estado analizado

²⁸ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA, página 24

²⁹ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA, páginas 22 y 23

para que considere adoptar las medidas pertinentes para garantizar su implementación (ver recomendación 2.4.12 del capítulo II de este informe).

[93]En segundo lugar, en la respuesta del Estado analizado al cuestionario,³⁰ se suministró la siguiente información, en relación con las funciones de investigación a cargo de la PEPCA:

[94]“Existen noventa (90) procesos que vienen en curso, desde el año 2009 a la fecha. Estos se encuentran en distintas etapas, desde valoración de la admisibilidad de la denuncia hasta la fase final de la investigación. - Del mes de marzo del año 2009 al mes de diciembre del año 2012 cuarenta y ocho (48) investigaciones de esta Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa han sido archivadas, de las cuales quince (15) corresponden a archivos provisionales y treinta y tres (33) archivos definitivos. - Hasta la fecha se ha pronunciado con carácter definitivo la prescripción de dos (2). En la actualidad, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa tiene quince (15) procesos judicializados pendientes de decisión en distintos tribunales de la República Dominicana.- Durante estos años fueron decididos por los Tribunales veinte (20) procesos, de los mismos terminaron diecisiete (17) en imputación de responsabilidad o sanción, una (1) absolución y dos (2) prescripciones.”

[95]En relación con la anterior información, el Comité teniendo en cuenta que en la misma se reportan declaratorias de prescripción, le formulará una recomendación al Estado analizado a fin de que considere efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en tal situación, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver recomendación 2.4.13 del capítulo II de este informe).

[96]En tercer lugar, en la respuesta del Estado analizado al cuestionario,³¹ se informó lo siguiente, en relación con la recuperación de activos vinculados con hechos de corrupción:

[97]“En este tenor, se han obtenido decisiones que contemplan el resarcimiento del daño recibido por el Estado, a través del reclamo de dependencias Estatales como el Banco Central de la República y la Superintendencia de Bancos. Las decisiones en este sentido, han sido dentro del ámbito de la corrupción administrativa privada, en casos de grandes fraudes bancarios. Los montos reconocidos por los tribunales son millonarios, sujetos a liquidación.”

[98]Con respecto a lo anterior, el Comité, teniendo en cuenta que en la visita *in situ* se puso de presente que no se tiene conocimiento por parte de la PEPCA de los montos exactos de lo recuperado y efectivamente ingresado al erario público en relación con la recuperación de activos vinculados con hechos objeto de investigación de la PEPCA, le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere adoptar un mecanismo de seguimiento que le permita conocer dicha información (ver recomendación 2.4.14 del capítulo II de este informe).

[99]En cuarto lugar, en la respuesta del Estado analizado al cuestionario,³² se informó lo siguiente, en relación con la manera en la que se le suministra información a los ciudadanos:

[100] “Es importante destacar que en Agosto del año 2012, se realizó y se puso a circular el “Informe de Gestión denominado Sistematización de casos 2004 - 2012” con el Apoyo del Programa de Facilidad de Cooperación Técnica (TCF) por vía de la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM), este informe está contenido también en nuestra página web, más arriba mencionada, y brinda al ciudadano un contenido con: Marco Jurídico de la Política Anticorrupción

³⁰ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA, páginas 23 y 24

³¹ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA, página 24

³² Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la PEPCA, páginas 18 y 19

en República Dominicana; Principales Acciones Ejecutadas por la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), ahora Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA); Sistematización de casos e investigaciones realizadas; Avances y logros de la DPCA en el Período 2004-2012.”

[101] En relación con lo anterior, el Comité, aunque reconoce el beneficio que para la ciudadanía representa el poder contar con la información contenida en el Informe de Gestión denominado “Sistematización de casos 2004 - 2012”, que se encuentra publicado en la página “Web” de la PEPCA, estima que también sería útil para la difusión de sus actividades y resultados y para la apreciación de los mismos por parte de la ciudadanía, el que se le diera publicidad en dicha página a la “Memoria Anual” donde se detallan los trabajos realizados correspondiente al año recién finalizado, que la Dirección de la PEPCA debe elaborar cada año de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de su Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos de Investigación (RI). Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité le formulará una recomendación en tal sentido al Estado analizado (ver recomendación 2.4.15 del capítulo II de este informe).

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[102] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[103] La República Dominicana ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe.

[104] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 2.4.1 Formalizar la adopción del Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos de Investigación de la PEPCA (RI), a través de una norma jurídica emitida por la autoridad del Ministerio Público competente para tal finalidad (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.2 Actualizar el “Manual de Organización y Funciones” de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se describen las funciones de los diferentes empleos y los requisitos para su desempeño, incluyendo los de la PEPCA, al tenor de las nuevas disposiciones de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), de la Contraloría General de la República (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.3 Definir los “Criterios de Significación de la PEPCA”, de acuerdo a los cuales se estipularán las pautas para la selección de los casos que serán directamente atendidos por la Dirección de la PEPCA, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 11 de su Reglamento Interno (RI) - (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.4 Adoptar las medidas o mecanismos pertinentes para garantizar la independencia técnica, administrativa y funcional de la PEPCA (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).

- 2.4.5 Adoptar las medidas o mecanismos pertinentes para garantizar la independencia técnica, administrativa y funcional de los fiscales de la PEPCA (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.6 Adoptar un procedimiento más ágil para la recuperación de activos vinculados con hechos de corrupción, con el fin de facilitar el cumplimiento de la función prevista para el Director(a) de la PEPCA en el numeral 20 del artículo 11 de su Reglamento Interno (RI), relativa a “promover acciones de recuperación de activos vinculadas con los hechos objeto de investigación” (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.7 Adoptar, por parte del Consejo Superior del Ministerio Público, un reglamento de carrera para el personal técnico y administrativo del Ministerio Público que se registrará por los principios fundamentales de la función pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.8 Seleccionar a través del sistema de mérito al personal técnico y administrativo de la PEPCA (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.9 Adoptar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos presupuestarios para que la PEPCA cuente con suficientes fiscales e investigadores para el desarrollo de sus funciones (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.10 Adoptar las medidas pertinentes para fortalecer los mecanismos de capacitación del personal especializado de la PEPCA (fiscales, investigadores y personal técnico y administrativo), en las áreas propias de sus funciones, tales como recuperación de activos provenientes de actos de corrupción (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.11 Adoptar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, para que los fiscales de la PEPCA puedan percibir una remuneración salarial adecuada (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.12 Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la implementación del Proyecto de Relanzamiento de la Unidad de Educación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) - (ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.13 Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en las declaratorias de prescripción relacionadas con hechos de corrupción investigados por la PEPCA, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.14 Adoptar un sistema de seguimiento que le permita a la PEPCA conocer los montos de lo recuperado y efectivamente ingresado al erario público, como resultado de las acciones de recuperación de activos vinculados con hechos objeto de investigación de la PEPCA. Lo anterior, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).

- 2.4.15 Publicar en la página “Web” de la PEPCA la “Memoria Anual” que la Dirección de la misma debe elaborar cada año de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de su Reglamento Interno (RI) - (ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).

3. EL PODER JUDICIAL(PJ)

3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[105] El Poder Judicial (PJ), cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[106] En cuanto a su objeto, el Poder Judicial (PJ), de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política (CP), administra la justicia en nombre de la República y goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los demás tribunales creados por la Constitución y por las leyes.

[107] La SCJ, de acuerdo con el artículo 152 de la CP, es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales. Estará integrada por no menos de dieciséis jueces y podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum determinado por la ley que establece su organización. Estará dividida en salas, de conformidad con la ley, y para ser juez o jueza de la SCJ se requiere reunir los requisitos establecidos en el artículo 153 de la CP.

[108] De acuerdo con el artículo 179 de la CP, la designación de los jueces de la SCJ le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura,³³ el cual, por disposición del artículo 180 de la CP, al conformar la SCJ deberá seleccionar las tres cuartas partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial, y la cuarta parte restante los escogerá de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.

[109] En cuanto a las funciones de la SCJ, el artículo 154 de la CP, establece las siguientes: 1. Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria; 2) Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley; 3) Conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las Cortes de Apelación y sus equivalentes; 4) Designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las Cortes de Apelación o sus equivalentes, de los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, los jueces de la instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquier otros tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las leyes.

³³ El Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo con el artículo 178 de la CP, esta integrado por: 1) El Presidente de la República, quien lo presidirá y, en su ausencia, por el Vicepresidente de la República; 2) El Presidente del Senado; 3) Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría; 4) El Presidente de la Cámara de Diputados; 5) Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del Presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría; 6) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia; 7) Un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien fungirá de secretario; 8) El Procurador General de la República.

[110] El Consejo del Poder Judicial (CPJ), de acuerdo con el artículo 156 de la CP, es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial, y tiene las siguientes funciones: 1) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley; 2) La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial; 3) El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia; 4) La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial; 5) El traslado de los jueces del Poder Judicial; 6) La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial; 7) El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial; 8) Las demás funciones que le confiera la ley.

[111] El CPJ, de acuerdo con el artículo 155 de la CP, está integrado por: 1) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá; 2) Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno de la misma; 3) Un Juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares; 4) Un Juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por sus pares; 5) Un Juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares.

[112] De acuerdo con el artículo 157 de la CP, habrá las Cortes de Apelación y sus equivalentes que determine la ley, así como el número de jueces que deban componerlas y su competencia territorial, y para ser juez de una Corte de Apelación se requiere reunir los requisitos establecidos en el artículo 158 de la CP. Las atribuciones de las Cortes de Apelación, son, de acuerdo con el artículo 159 de la CP, las siguientes: 1) Conocer de las apelaciones a las sentencias, de conformidad con la ley; 2) Conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios; 3) Conocer de los demás asuntos que determinen las leyes.

[113] De acuerdo con el artículo 160 de la CP, habrá los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, con el número de jueces y la competencia territorial que determine la ley, y para ser juez de primera instancia se requiere reunir los requisitos establecidos en el artículo 161 de la CP. Además, de acuerdo con el artículo 162 de la CP, la ley determinará el número de juzgados de paz o sus equivalentes, sus atribuciones, competencia territorial y la forma como estarán organizados, y para ser juez de paz se requiere reunir los requisitos establecidos en el artículo 163 de la CP.

[114] La SCJ cuenta, en relación con su organización y funcionamiento, con la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia No. 25-91, y el Consejo del Poder Judicial cuenta con la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial No. 28-11, que regula su organización y el ejercicio de las atribuciones que como órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial le confiere el artículo 156 de la CP.

[115] El Poder Judicial, cuenta, en materia penal, con el Código Procesal Penal -CPP (Ley No. 76-02),³⁴ que en su artículo 57 indica que es de la competencia exclusiva y universal de las jurisdicciones penales el conocimiento y fallo de todas las acciones y omisiones punibles previstas en el Código Penal;³⁵ en su artículo 148 dispone que la duración máxima de todo proceso es de tres años

³⁴ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_codpp.pdf

³⁵ En la visita *in situ* se puso de presente por parte del Poder Judicial que no existe una jurisdicción especial para la sanción penal de casos de corrupción, y por lo tanto el juzgamiento de éstos le compete a los jueces y tribunales ordinarios con competencia en materia penal, de acuerdo con lo establecido en el CPP.

contados a partir del inicio de la investigación;³⁶ en su artículo 370 prevé que dicho plazo es de cuatro años en caso de que se trate de un asunto complejo;³⁷ en sus artículos 259 a 353 establece el procedimiento común; en su Libro II contempla los procedimientos especiales, entre los cuales el procedimiento para asuntos complejos (artículos 369 a 373) y el procedimiento a ser utilizado por la SCJ y las Cortes de Apelación para imputados con jurisdicción privilegiada en razón de su cargo (artículos 377 a 380); y en su Libro III establece los recursos, contemplando entre ellos los de apelación de la sentencia (artículos 416 a 424), casación (artículos 425 a 427)³⁸ y revisión (artículos 428 a 435).

[116] En cuanto al a la vinculación de los jueces y empleados del Poder judicial, a su régimen y a la capacitación de los mismos, el artículo 159 de la CP, dispone que para ser designado juez del Poder Judicial, todo aspirante debe someterse a un concurso público de méritos mediante el sistema de ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)³⁹ que al efecto establezca la ley y haber aprobado satisfactoriamente el programa de formación de dicha escuela y sólo estarán exentos de estos requisitos los miembros de la SCJ que sean de libre elección. Esta norma dispone además que las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes y que no podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley. Establece también, que el servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente, y que sus integrantes no podrán optar por ningún cargo electivo público, ni participar en actividad político partidista.

³⁶ En la visita *in situ* se puso de presente que la Resolución 2802-2009 de la SCJ prevé que la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado. Esta Resolución esta disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_res2802.pdf

³⁷ El artículo 369 del CPP establece que cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada, a solicitud del ministerio público titular, antes de la presentación de cualquier requerimiento conclusivo, el juez puede autorizar, por resolución motivada, la aplicación de las normas especiales previstas en el título IV, relativas al procedimiento para asuntos complejos.

³⁸ El artículo 425 del CPP establece que la casación es admisible contra las sentencias de la Corte de Apelación, las decisiones que ponen fin al procedimiento, o deniegan la extinción o suspensión de la pena; y el artículo 426 del CPP señala que el recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en los casos que señala de manera expresa.

³⁹ En la visita *in situ*, se manifestó por parte de de la ENJ que no se ha impartido capacitación específica relativa a casos de corrupción (entendiéndose por éstos los atinentes a los delitos tipificados en el Código Penal Dominicano en sus artículos 166, 167, 169 a 172 y 405), pero si en aspectos tales como la agilización de procesos, lo cual tiene incidencia en los procesos de casos de corrupción, y en materia penal se diseñó un Curso Penal Especial, que incluye temas tales como extorsión, chantaje, lavado de activos, ley monetaria y financiera, delitos fiscales y arancelarios, entre otros delitos que directa o indirectamente abordan el tema de la corrupción. Aportaron luego información relativa a dicha capacitación, que puede consultarse a través de los siguientes enlaces:

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_dis.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_esta.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_libro.pdf
http://www.oas.org/juridico/xls/mesicic4_repdom_rep12.xls
http://www.oas.org/juridico/xls/mesicic4_repdom_rep13.xls

[117] En relación con los jueces de la SCJ, el artículo 83 de la CP establece que por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, la Cámara de Diputados podrá acusar al juez de que se trate ante la Cámara del Senado, a fin de realizarle un juicio político, y el artículo 154 de la CP dispone que le corresponde a la misma SCJ conocer en única instancia de las causas penales contra dichos jueces. El artículo 156 de la CP, atribuye al Consejo del Poder Judicial el control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, con excepción de los integrantes de la SCJ.

[118] La Ley de Carrera Judicial No.327-98 regula lo concerniente al ingreso a la carrera y al régimen disciplinario de los jueces del Poder Judicial, y el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa Judicial, aprobado por Resolución No. 3471-2008 de la SCJ, regula lo concerniente al ingreso a la carrera y al régimen disciplinario del personal administrativo del Poder Judicial. Se cuenta además con el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, adoptado por la SCJ.

[119] En relación con la adopción de decisiones, de acuerdo con el párrafo III del artículo 150 de la CP, las decisiones de cada uno de los tribunales son independientes y soberanas y se emiten a través de sentencias. Existe una jerarquía entre los tribunales estando en la cúspide la SCJ, seguido por las Cortes de Apelación y equivalentes, luego los Juzgados de Primera Instancia y equivalentes y los Juzgados de Paz y equivalentes. Los tribunales son colegiados y unipersonales. Son colegiados: La SCJ, las Cortes de Apelación y equivalentes, y los tribunales colegiados del Juzgado de Primera Instancia en materia penal. Son unipersonales: Los Juzgados de Primera Instancia y equivalentes; y los Juzgados de Paz y equivalentes.⁴⁰ De acuerdo con el artículo 1, párrafo I de la Ley 25-91, modificado por la Ley 242-11, cuando la SCJ sesione en pleno, el quórum será de un mínimo de doce (12) jueces y las decisiones se tomarán por mayoría de votos.

[120] En cuanto a la coordinación de sus funciones con otros órganos y para obtener apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía, el Poder Judicial cuenta con convenios tales como el Convenio Interinstitucional entre el Consejo Nacional de Drogas, el Consejo del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y la Defensoría Pública; y el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y la Oficina de la Defensa Pública.⁴¹ Además, se han realizado “jornadas de acercamiento”, donde interactúan jueces y organizaciones de la sociedad civil, y la ciudadanía en general, pudiéndose citar al respecto el proyecto “Justicia y Sociedad”, que tiene los siguientes objetivos: fortalecer el vínculo Poder Judicial - ciudadanía; informar a la ciudadanía lo que es el Poder Judicial y lo que hace; estrechar los vínculos funcionario judicial-ciudadanía; propiciar espacios de intercambio, comunicación, información y educación entre la ciudadanía y el Poder Judicial; y mejorar la atención a las personas usuarias del servicio de justicia.⁴²

[121] En relación con la descripción de funciones y existencia de manuales o procedimientos documentados para el desarrollo de las mismas, y el uso de tecnología, el Poder Judicial, cuenta con 28 manuales de procedimientos organizados en 8 áreas de gestión que abarcan: Capital Humano, Gestión Administrativa-Financiera, Control Interno, Planificación y Desarrollo, Información y Comunicaciones, Servicios Generales y Mantenimiento, Gestión Administrativa-Judicial y Tecnología. Se cuenta además con

⁴⁰ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo al Poder Judicial, página 5

⁴¹ Estos convenios están disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_repdom.htm (apartado correspondiente al Poder Judicial)

⁴² Documento de la respuesta de República Dominicana relativo al Poder Judicial, página 17

un Manual de Puesto, que sirve de soporte para los procesos de reclutamiento y selección de personal, en la elaboración de pruebas técnicas, en las promociones, traslados, inducción de personal, entre otros. Se cuenta también con sistemas tecnológicos de gestión, entre los cuales: “Supremo Plus”, que es un sistema de gestión de expedientes que permite el ingreso de expedientes y cada una de sus actuaciones, obteniendo con ello la gestión electrónica de los procesos de los casos en los tribunales penales; “Exactus”, que es un sistema de planificación de recursos empresariales utilizado para el manejo de la parte administrativa financiera y recursos humanos; “Dominium”, que es un sistema para controlar el flujo de los diferentes documentos que se generan en el Poder Judicial; y “Automatiza civil”, que es un sistema de gestión de expedientes que permite el ingreso de expedientes y cada una de sus actuaciones, obteniendo con ello la gestión electrónica de los procesos de los casos en los tribunales civiles.⁴³

[122] En cuanto a sus recursos presupuestales, de conformidad el artículo 149 de la CP, el Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria, y de conformidad con la Ley No. 46-97, modificada por la Ley No. 194-04, el presupuesto del Poder Judicial, conjuntamente con el Ministerio Público, será de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuye de la manera siguiente: un 65% del 4.10 corresponderá a la SCJ y un 35% corresponderá al Ministerio Público.

[123] En cuanto a fortalecimiento institucional, el Poder Judicial cuenta con un Plan Estratégico 2009 - 2013, entre cuyas líneas de acción se prevén las siguientes: 3.1 capacitación continua de jueces; 6.1 expansión territorial y jurisdiccional del modelo de gestión del despacho judicial penal (MGDP); 6.2. Incremento de la eficiencia de los procesos y procedimientos de gestión de los tribunales; 6.4 Elaboración, propuesta de leyes, aprobación de reglamentos y derogación de normativa obsoleta; 6.5 Sistematización, creación y difusión de jurisprudencia y documentación judicial; 7.4. Mejora del sistema de estadísticas judiciales. Se cuenta también con un proyecto denominado “Captura de Audio de las Audiencias”, que se describe en el apartado de la página “Web” del Poder Judicial correspondiente a “Proyectos de Modernización.”

[124] En cuanto a la manera en que se le suministra información a los ciudadanos y a la rendición de cuentas, el Poder Judicial cuenta con diversos canales para difundir sus procedimientos, funciones y servicios, entre los cuales, su página “Web”, a la que se puede acceder a través del enlace <http://www.poderjudicial.gob.do>; la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI); los Centros de Información y Orientación Ciudadana (CIOCI); el Centro de Documentación e Información Judicial Dominicana (CENDIJD); y el Correo electrónico: jurisleg-cendiid@suprema.gov.do. Además, la Dirección General de la Carrera Judicial tiene contacto directo por vía telefónica, presencial o electrónica (dcj@suprema.gov.do y usc@suprema.gov.do), y a través del portal de la página “Web” www.poderjudicial.gob.do con los usuarios que requieren sus servicios.⁴⁴ Cada 7 de enero, día del Poder Judicial, el Presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial, en una asamblea solemne, dirige un mensaje a la Nación donde da cuenta de la labor desarrollada en el año transcurrido, el cual viene acompañado de una publicación donde se resumen las actividades y proyectos desarrollados y los logros alcanzados en el ámbito jurisdiccional y administrativo.⁴⁵ Las memorias del Poder

⁴³ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo al Poder Judicial, página 17

⁴⁴ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo al Poder Judicial, páginas 14 y 15

⁴⁵ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo al Poder Judicial, páginas 17 y 18

Judicial, sus boletines estadísticos, y las principales sentencias y resoluciones de la SCJ, son publicadas en la página “Web” del Poder Judicial antes citada.

3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[125] El Poder Judicial (PJ), cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[126] En primer lugar, el Comité, teniendo en cuenta que según lo informado por el Poder Judicial en la visita *in situ*, al mismo sólo se le esta asignando como presupuesto para su funcionamiento aproximadamente la mitad de lo que se le debería asignar de conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 46-97, modificada por la Ley No. 194-04, y que según lo anotado en la respuesta del Estado analizado al cuestionario⁴⁶ esto constituye una dificultad para su funcionamiento, le formulará al mismo una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.1 del capítulo II de este informe).

[127] En segundo lugar, el Comité, teniendo en cuenta que según lo anotado en la respuesta del Estado analizado al cuestionario⁴⁷, “en el Poder Judicial, por la limitación presupuestaria, le ha sido imposible poner en funcionamiento los tribunales y estructuras establecidas en la Ley; en especial en el ámbito penal, las cuales han sido creadas para detectar y sancionar las practicas corruptas”, le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.2 del capítulo II de este informe).

[128] En relación con lo anterior, cabe anotar que en atención a lo solicitado en la visita *in situ*, el Poder Judicial aportó un listado de los tribunales y juzgados en materia penal que han sido creados por Ley, pero que por la limitación presupuestaria no ha sido posible poner en funcionamiento. Este listado puede consultarse a través del siguiente enlace: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_tribu.pdf

[129] En tercer lugar, el Comité, teniendo en cuenta la importancia que para la modernización de la jurisdicción penal del Poder Judicial tiene el proyecto denominado “Captura de Audio de las Audiencias”, el cual, según lo informado en la visita *in situ* se encuentra con un 15% de avance debido a limitaciones presupuestales, le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere adoptar las medidas pertinentes para garantizar su implementación (ver recomendación 3.4.3 del capítulo II de este informe).

[130] Con respecto a lo anterior, cabe anotar que atención a lo solicitado en la visita *in situ*, el Poder Judicial aportó una relación de las salas penales que cuentan con sistemas de captura de audio, que son 23, y de las que aún esta pendiente la instalación de dichos sistemas, que son 132. Esta relación puede consultarse en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_rela.pdf

[131] En cuarto lugar, el Comité, teniendo en cuenta la importancia que para la jurisdicción penal del Poder Judicial tiene la expansión territorial del denominado “Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal (MGDP)”, el cual esta previsto como una de las líneas de acción del “Plan Estratégico 2009 - 2013”, y que según lo informado en la visita *in situ* se encuentra con un 31% de avance a nivel geográfico debido a limitaciones presupuestales, le formulará una recomendación al Estado

⁴⁶ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo al Poder Judicial, página 25

⁴⁷ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo al Poder Judicial, página 25

analizado para que considere adoptar las medidas pertinentes para garantizar su implementación (ver recomendación 3.4.4 del capítulo II de este informe).

[132] Con respecto a lo anterior, cabe anotar que en atención a lo solicitado en la visita *in situ*, el Poder Judicial aportó información detallada en relación con la implementación del MGDGP en los diferentes distritos judiciales del país, la cual puede consultarse a través del siguiente enlace: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_por.pdf

[133] En quinto lugar, el Comité, teniendo en cuenta la importancia que para la jurisdicción penal del Poder Judicial, tiene la “sistematización, creación y difusión de jurisprudencia y documentación judicial”, que esta prevista como una de las líneas de acción del “Plan Estratégico 2009 - 2013”, y que según lo informado en la visita *in situ*, aunque se está avanzando en lo anterior en materia civil, aún no se ha empezado con la rama penal, le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere implementar dicha línea de acción en lo referente a la jurisdicción penal, y particularmente en lo concerniente a casos de corrupción (ver recomendación 3.4.5 del capítulo II de este informe).

[134] En sexto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que según lo informado en la visita *in situ*, si bien la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) ha impartido capacitación a los jueces en aspectos tales como la agilización de procesos, lo cual tiene incidencia en los procesos de casos de corrupción, y en materia penal se diseñó un Curso Penal Especial, que incluye temas como extorsión, chantaje, lavado de activos, ley monetaria y financiera, delitos fiscales y arancelarios, entre otros delitos que directa o indirectamente abordan el tema de la corrupción, no se ha impartido capacitación específica relativa a casos de corrupción, entendiéndose por éstos los delitos tipificados en los artículos 166, 167, 169 a 172 y 405 del Código Penal, razón por la cual le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 3.4.6 del capítulo II de este informe).

[135] En séptimo lugar, teniendo en cuenta que en la visita *in situ*, se puso de presente por parte del Poder Judicial, como una dificultad, la baja remuneración salarial de los jueces, el Comité le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 3.4.7 del capítulo II de este informe).

3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[136] Se recabó información relativa a los resultados del Poder Judicial (PJ), entre la que se destaca la siguiente:

[137] En primer lugar, en relación con la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en atención a lo solicitado en la visita *in situ*, se suministró la siguiente información sobre casos tramitados en única instancia en los últimos cinco años, correspondientes a las causas penales seguidas a los altos funcionarios mencionados en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución Política (CP):

Años	Jurisdicción Privilegiada	
	Entrados	Decididos
2007	12	9
2008	19	16
2009	6	3
2010	23	0

2011	13	2
2012	10	1
Total	83	31

[138] En relación con la anterior información, el Comité estima que si bien sirve para determinar que por parte de la SCJ se han tramitado y decidido casos en única instancia contra los altos funcionarios mencionados en el artículo 154, numeral 1 de la CP, la misma no se encuentra desagregada de tal manera que permita establecer cuántos casos se encuentran en curso; suspendidos; prescritos; archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos; listos para adoptar una decisión de fondo; y en relación con los que se haya adoptado una decisión de fondo, el sentido absolutorio o condenatorio de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 3.4.8 del capítulo II de este informe).

[139] En segundo lugar, en atención a lo solicitado en la visita *in situ*, el Poder Judicial suministró información sobre “casos de corrupción pública - procesos recurridos en Casación ante la SCJ” referente a “hechos previstos y sancionados por los artículos 166, 167, 169, 170 a 172 y 405 del Código Penal, y 102 de la Constitución Dominicana”, en la que se relacionan 10 casos, en 9 de los cuales se declara inadmisibile el recurso de casación y en el restante se declara con lugar el citado recurso, “casando en parte la decisión impugnada y ordenando un nuevo examen del caso en lo referente a la prescripción de la acción.”⁴⁸

[140] En relación con la anterior información, el Comité estima que sirve para determinar que por parte de la SCJ se ha ejercitado la atribución prevista en el artículo 154, numeral 2 de la CP, relativa a conocer de los recursos de casación, con los resultados anotados.

[141] En tercer lugar, el Comité, teniendo en cuenta que no se suministró información en relación con los casos de corrupción que han llegado a conocimiento de la SCJ en los últimos cinco años en relación con la función que le atribuye el artículo 154, numeral 3 de la CP, relativa a “conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes”, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 3.4.9 del capítulo II de este informe).

[142] En cuarto lugar, en atención a lo solicitado en la visita *in situ*, el Poder Judicial suministró información relativa a los casos de “Jurisdicción Privilegiada” conocidos por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, correspondientes a sus tres salas y al período del 2008 a octubre de 2013, en la que se relacionan 23 casos, sin indicar el sentido de la decisión adoptada,⁴⁹ al igual que de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, correspondiente al período del 2007 a octubre de 2013, en la que se relacionan 30 casos, con respecto a los cuales se señala el sentido de la decisión adoptada.⁵⁰

⁴⁸ Esta información puede consultarse en su integridad a través del siguiente enlace:

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_casos1.pdf

⁴⁹ Esta información puede consultarse en su integridad a través del siguiente enlace:

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_casos2.pdf

⁵⁰ Esta información puede consultarse en su integridad a través del siguiente enlace:

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_casos4.pdf

[143] En relación con la anterior información, el Comité estima que si bien sirve para determinar que por parte de las dos Cámaras Penales de las Cortes de Apelación a las que corresponden, se han tramitado y decidido casos de “Jurisdicción Privilegiada,” la misma no se encuentra desagregada de tal manera que permita establecer cuántos casos se encuentran en curso; suspendidos; prescritos; archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos; listos para adoptar una decisión de fondo; y en relación con los que se haya adoptado una decisión de fondo, no se indica, con respecto a una de dichas Cámaras, el sentido absolutorio o condenatorio de la misma, al igual que no se cuenta con información sobre las demás Cámaras Penales de las Cortes de Apelación del país. Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 3.4.10 del capítulo II de este informe).

[144] En quinto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que no se suministró información en relación con los casos de corrupción de conocimiento de las instancias judiciales diferentes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a las Cámaras de Apelación distintas a las antes mencionadas, tales como los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 3.4.11 del capítulo II de este informe).

[145] En sexto lugar, en relación con los resultados del Consejo del Poder Judicial, se informó en la respuesta del Estado analizado al cuestionario,⁵¹ entre otros, lo siguiente:

[146] “El Poder Judicial ha estado sumergido en la divulgación del Sistema de Integridad Institucional con el objetivo de sensibilizar a los integrantes del Poder Judicial, sobre la importancia de mantener un comportamiento ético y, como este debe manifestarse en el servicio que ofrece la institución a la sociedad: Hemos sensibilizado un total de 5,508 servidores administrativos y 614 jueces en los diferentes departamentos judiciales del país; se distribuyeron 5,000 ejemplares del documento de Código de Comportamiento Ético a los servidores judiciales a nivel nacional; se distribuyeron un total de 5,000 ejemplares de un cuadernillo con los valores y principios establecidos en el Código de Comportamiento Ético.- En interés de continuar fomentando un comportamiento profesional que garantice un servicio de calidad a través de conductas que expresen los valores y principios éticos institucionales, se diseñó un taller sobre el Código de Comportamiento Ético, el cual se impartió a un total de 4,993 servidores judiciales distribuidos a nivel nacional.”

[147] “El Consejo del Poder Judicial durante el pasado año recibió un total de 117 denuncias de usuarios del sistema, de las cuales 70 fueron archivadas de manera definitiva, 22 fueron apoderadas a la Inspectoría General, 4 fueron remitidas a la Unidad de Seguimientos de Casos, 6 fueron enviadas a Contraloría General y 15 a la Comisión Disciplinaria Administrativa. El Consejo del Poder Judicial en sus atribuciones disciplinarias produjo 249 decisiones, detalladas de la siguiente manera: (46) amonestaciones; Inspectoría General (7); no aplica medidas disciplinarias (22); suspensiones (6); apoderar a la Comisión Disciplinaria Administrativa (67); desvinculación recomendadas (12); archivar definitivamente (28); reintegrar en labores (2); felicitación de jueces por inspección ordinaria (29) y Otros (30). - Asimismo, el Consejo del Poder Judicial durante el 2012, realizó 12 procesos disciplinarios a jueces y juezas, de los cuales 4 fueron desvinculados, seis descargados y, 1 suspendido por 30 días.”

[148] En relación con la anterior información, el Comité estima que sirve para determinar que por parte del Consejo del Poder Judicial, órgano este que comenzó a operar en marzo de

⁵¹ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo al Poder Judicial, páginas 21 y 22

2011, se han ejercitado sus funciones relativas al control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, que le atribuye el artículo 156 de la Constitución Política, con los resultados anotados.

3.4. Conclusiones y recomendaciones

[149] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Poder Judicial (PJ), en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[150] La República Dominicana ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al Poder Judicial (PJ), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe.

[151] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 3.4.1 Adoptar las medidas pertinentes para asignar al Poder Judicial la partida presupuestal que le corresponde de acuerdo con lo dispuesto por la Ley No. 46-97, modificada por la Ley No. 194-04 (ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.2 Adoptar las medidas pertinentes en materia presupuestal para poner en funcionamiento los tribunales y juzgados de la jurisdicción penal del Poder Judicial que han sido creados por la Ley y que aún no se encuentran operando (ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.3 Adoptar las medidas pertinentes en materia presupuestal para garantizar la implementación del proyecto de modernización denominado “Captura de Audio de las Audiencias” en la jurisdicción penal del Poder Judicial (ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.4 Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la expansión territorial del “Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal (MGDP)” - (ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.5 Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la implementación de la “sistematización, creación y difusión de jurisprudencia y documentación judicial”, que esta prevista como una de las líneas de acción del “Plan Estratégico 2009 - 2013”, en la jurisdicción penal del Poder Judicial, particularmente en lo concerniente a casos de corrupción (ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.6 Adoptar las medidas pertinentes para que, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), se imparta a los jueces de la jurisdicción penal del Poder Judicial capacitación específicamente relacionada con el juzgamiento de los actos de corrupción tipificados como delitos en los artículos 166, 167, 169 a 172 y 405 del Código Penal (ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.7 Adoptar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, para que los jueces puedan tener una remuneración salarial adecuada (ver sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.8 Elaborar información estadística relativa a los casos tramitados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) correspondientes a las causas penales por actos de corrupción

seguidas a los altos funcionarios mencionados en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución Política (CP), que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido absolutorio o sancionatorio de dicha decisión. Lo anterior, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).

- 3.4.9 Elaborar información estadística relativa a los recursos tramitados por la SCJ correspondientes a actos de corrupción, en ejercicio la función que le atribuye el artículo 154, numeral 3 de la CP, relativa a “conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes”, que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido de dicha decisión. Lo anterior, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.10 Elaborar información estadística relativa a los casos de “Jurisdicción Privilegiada” tramitados por las Cámaras Penales de las Cortes de Apelación, correspondientes a actos de corrupción, que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido absolutorio o sancionatorio de dicha decisión. Lo anterior, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.11 Elaborar información estadística relativa a los casos de corrupción tramitados por instancias judiciales diferentes a la SCJ y a las Cortes de Apelación, tales como los juzgados de primera instancia, que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido absolutorio o sancionatorio de dicha decisión. Lo anterior, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).

4. LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (CCRD)

4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[152] La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[153] En cuanto a su objeto, la CCRD, de conformidad con el artículo 248 de la Constitución Política (CP), es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurídica, carácter técnico y goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria. Estará compuesta de cinco miembros, elegidos por el Senado de la República de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos.

[154] El artículo 249 de la CP establece los requisitos para ser miembro de la CCRD y la instancia competente para exigirles responsabilidad por sus actuaciones es el Senado, a partir de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados, según se prevé en los artículos 80, numeral 1 y 83, numeral 1 de la CP. Los artículos 12, 14, 15 y 16 de la Ley 10-04 regulan, por su parte, lo referente a las prohibiciones para su designación, a la separación del cargo, a la incompatibilidad con todo otro cargo público o privado remunerado con excepción de la docencia, y a su responsabilidad.

[155] En cuanto a sus atribuciones, el artículo 250 de la CP establece que serán, además de las que le confiere la ley: 1) Examinar las cuentas generales y particulares de la República; 2) Presentar al Congreso Nacional los informes sobre la fiscalización del patrimonio del Estado; 3) Auditar y analizar la ejecución del Presupuesto General del Estado que cada año apruebe el Congreso Nacional, tomando como base el estado de recaudación e inversión de las rentas presentado por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la Constitución y las leyes, y someter el informe correspondiente a éste a más tardar el 30 de abril del año siguiente, para su conocimiento y decisión; 4) Emitir normas con carácter obligatorio para la coordinación interinstitucional de los órganos y organismos responsables del control y auditoría de los recursos públicos; 5) Realizar investigaciones especiales a requerimiento de una o ambas cámaras legislativas.

[156] La Ley 10-04 contempla, en su artículo 10, entre las atribuciones de la CCRD, las siguientes: Practicar auditoría externa financiera, de gestión, estudios e investigaciones especiales a los organismos, entidades, personas físicas y jurídicas, públicos o privados, sujetos a esta ley (numeral 1); Formular disposiciones y recomendaciones de cumplimiento obligatorio por parte de los servidores públicos que son legal o reglamentariamente responsables de su aplicación (numeral 4); Identificar y señalar en los informes los hechos relativos a la violación de normas establecidas que originan responsabilidad administrativa, civil o indicios de responsabilidad penal (numeral 5); Emitir resoluciones, con fuerza ejecutoria, en el ámbito de la responsabilidad administrativa y civil (numeral 6); Requerir a las autoridades nominadoras la aplicación de sanciones a quien o quienes corresponda, en base a los resultados de sus actividades de control externo (numeral 7); Elevar los casos no atendidos, señalados en el literal anterior, a las máximas autoridades nacionales, con el objeto de que se apliquen las sanciones correspondientes a los involucrados en los hechos de que se trate (numeral 8); Investigar las denuncias o sospechas fundamentadas de hechos ilícitos contra el patrimonio público, o apoyar, si es el caso, las labores de los organismos especializados en la materia (numeral 10); Participar por iniciativa propia, o apoyando a otros organismos, en actividades que prevengan o combatan la corrupción (numeral 17).

[157] En cuanto a la competencia de la CCRD para establecer responsabilidades, la Ley 10-04, en su artículo 46 dispone que es competente para establecer las responsabilidades de carácter administrativo y civil, así como para señalar los hechos que constituyan indicios de responsabilidad penal; en su artículo 47 expresa que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de las entidades y organismos sujetos a esta ley se establecerá por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y por el incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les compete; en su artículo 48⁵² prevé que la responsabilidad civil

⁵² El párrafo I de este artículo prevé que cuando la CCRD compruebe el perjuicio patrimonial e identifique los responsables, sin que sea menester esperar la finalización del examen, procurará la restitución de los bienes o valores, ordenando a la autoridad superior de la entidad adoptar las acciones que correspondan para este fin, y que si en el plazo de treinta días posteriores a la notificación formal del hecho la autoridad no procede a dar cumplimiento a las disposiciones emitidas, la CCRD procederá a someter el hecho a la acción de la justicia, mediante resolución aprobada por el pleno, de acuerdo con lo que disponga el reglamento elaborado por dicha institución. El párrafo II del mismo artículo agrega que en los casos de los artículos 47 y 48 las conclusiones contenidas en las resoluciones emitidas en base a los informes de

de dichos servidores se determinará en correlación con el perjuicio económico demostrado en la disminución del patrimonio sufrido por dichas entidades u organismo respectivo, debido a su acción u omisión culposa; y en su artículo 49 establece que cuando de los resultados de auditorías, estudios e investigaciones practicados por los auditores de la Cámara de Cuentas se establezcan indicios de responsabilidad penal, se informará al Ministerio Público, a los organismos especializados de la prevención e investigación de la corrupción, a las autoridades administrativas y judiciales competentes y a la autoridad nominadora de los funcionarios o empleados involucrados en los hechos punibles, así como de todos aquellos que causen perjuicio al patrimonio público, por acción u omisión del funcionario, empleado público o de terceros que actúen en calidad de contratistas o receptores de subsidios o reciban asignaciones de fondos públicos, acompañando su denuncia con las evidencias recopiladas que respaldan sus observaciones, disposiciones, conclusiones y recomendaciones, a los fines de que las precitadas autoridades pongan en movimiento la acción pública contra las personas en relación con las cuales hayan surgido indicios de responsabilidad penal.

[158] En cuanto a la manera en la que se adoptan las decisiones y los recursos que proceden contra las mismas, la Ley 10-04 establece en el párrafo de su artículo 19 que la CCRD no podrá adoptar ninguna decisión sino con la presencia del presidente o del vicepresidente y un número de miembros que, sumados a aquellos, constituyan más de la mitad de sus miembros y las decisiones se tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate el voto del presidente será decisivo; y señala, en el párrafo V de su artículo 48, que las resoluciones atinentes a la responsabilidad administrativa o civil, prevista en los artículos 47 y 48 de esta ley, podrán ser recurridas ante el Tribunal Superior Administrativo.

[159] En cuanto al ámbito de sus funciones, la Ley 10-04 prevé en su artículo 2 que la misma rige para: 1. Los poderes públicos, órganos constitucionales y sus dependencias; 2. Los órganos que conforman la administración pública central; 3. Las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y sus dependencias; 4. Las entidades de derecho público creadas por ley o decreto; 5. Los ayuntamientos municipales, sus dependencias y otras corporaciones edilicias, así como el organismo regulador de los mismos;⁵³ 6. Las sociedades o empresas cuyo capital esté integrado, aunque sea parcialmente, por aportes del Estado, los municipios o las instituciones autónomas; 7. Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que recauden, reciban o administren, a cualquier título, recursos públicos, o que estén vinculados contractualmente con el Estado, los municipios o las instituciones autónomas.

[160] En cuanto a la coordinación de sus funciones con otros órganos y para obtener apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía, el Reglamento 06-04 de la Ley 10-04, dispone en su artículo 56 que para el desarrollo armónico y operativo de los controles interno y externo en el marco del Sistema

auditoría, estudios e investigaciones especiales de la CCRD, quedan constituidas en títulos ejecutorios y como tales servirán de fundamento para que las autoridades competentes, mediante el procedimiento de apremio establecido en el Código Tributario, ejerzan las acciones conducentes a recuperar los valores y efectos que correspondan al Estado Dominicano y sus instituciones, cuyo patrimonio fuera disminuido por los hechos ilícitos que dieron origen al daño causado, sin perjuicio de las indemnizaciones que sean acordadas por los órganos jurisdiccionales competentes.

⁵³ El artículo 106 de la Ley 176-07 (Ley Municipal) señala entre las funciones de la Liga Municipal, la de “a) Promover por todos los medios a su alcance las mejores relaciones y el más eficaz espíritu de cooperación entre los municipios de la República Dominicana, con el gobierno central, con el fin de que puedan prestarse la mayor ayuda mutua que sea posible en la realización de las funciones que les corresponden, en la solución de sus problemas, en el desarrollo de sus planes de progreso, y en todo cuanto propenda al mayor bienestar de sus localidades respectivas.”

Nacional de Control y Auditoria se crea un Comité de Coordinación, ad-honorem,⁵⁴ integrado por el Presidente de la Cámara de Cuentas, quien lo presidirá, y el Contralor General de la República, con las funciones de convenir por consenso, acuerdos sobre: 1) Coordinación de los controles interno y externo para asegurar la efectividad e inter-relación de los mismos, con los mayores niveles posibles de economía. 2) Potencialización de los resultados de los controles internos y externos en función de los objetivos institucionales que se pretenden alcanzar. 3) Todos aquellos aspectos que, en general, conduzcan al fortalecimiento, eficacia y eficiencia de los controles internos y externos. El artículo 62 de dicho Reglamento, dispone por su parte, que todas las personas físicas u organizaciones sociales podrán canalizar sugerencias y observaciones por escrito ante la CCRD, como órgano Superior del Sistema Nacional de Control y Auditoria, a los fines de que sean investigadas las actuaciones o los hechos realizados por las personas sujetas a la Ley 10-04 y a su Reglamento. Además, el artículo 10, numeral 9 de la Ley 10-04, faculta a la CCRD para requerir a la autoridad competente la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos que no colaboren con su personal para el adecuado cumplimiento de sus funciones, o que de alguna manera obstruyan el buen desenvolvimiento de las mismas.

[161] Respecto a sus recursos humanos, a su capacitación y al régimen de los mismos, la CCRD se rige por la Ley 41-08 de la Función Pública que regula, entre otros, la carrera administrativa y la vinculación por concurso (artículo 37) al igual que el régimen ético y disciplinario del servidor público (artículos 77 a 89), y por su Reglamento de Aplicación 523-09, de Relaciones Laborales, en el cual se prevé como derecho de los funcionarios públicos el de recibir la inducción, formación y capacitación adecuada (artículos 48 a 54) y se regulan sus deberes (artículos 97 a 100), la gradación de las faltas y sanciones disciplinarias (artículos 101 a 109) y el procedimiento disciplinario (artículos 110 a 125). Cuenta además, en virtud de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 10-04, con un Reglamento de Recursos Humanos.⁵⁵

[162] En cuanto a sus recursos presupuestales, el artículo 27 de la Ley 10-04 establece que el presupuesto de la CCRD, por su condición de órgano superior de control y auditoría, y con el fin de garantizar su plena independencia, será elaborado por una comisión especializada, integrada por representantes de la propia Cámara, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, e incorporado por el Poder Ejecutivo cada año en el presupuesto de ingresos y ley de Gastos Públicos.

[163] En relación con la existencia de manuales o procedimientos documentados y al uso de tecnología para el desarrollo de las tareas, la CCRD cuenta con los Manuales Operativos de Auditoria Gubernamental, la Guía para el Sujeto de Fiscalización, y el Reglamento Operativo de las Comisiones de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Departamental de la Cámara de Cuentas; y se han implementado procesos de automatización para la tramitación y

⁵⁴ Lo anotado en relación con este Comité también es pertinente en relación con el acápite del presente informe correspondiente a “existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas” de la Contraloría General de la República (CGR).

⁵⁵ El artículo 25 de la Ley 10-04 prevé que el pleno la CCRD adoptará un Reglamento de Recursos Humanos que incluirá los deberes, derechos y atribuciones, escalafón, valoración de puestos y un plan de carrera que será efectivo gradualmente para permanencia y promoción de sus servidores. En la visita *in situ* se informó que no obstante este Reglamento, la CCRD se acogió al régimen general de la función pública previsto en la Ley de Función Pública 41-08 y sus reglamentos, y que se está trabajando en un proyecto de un nuevo Reglamento de Recursos Humanos. Se aportó luego copia del Reglamento que esta siendo revisado, disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_reglaCCRD.pdf

creación de documentos, tales como el Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB) y el Sistema de Trámites Regulares Estructurados (TRE).⁵⁶

[164] Con respecto a la rendición de cuentas, la Ley 10-04 dispone en su artículo 43, que la CCRD presentará al Congreso Nacional, en la primera legislatura ordinaria de cada año, el informe de los resultados del análisis y evaluación de la ejecución del presupuesto de ingresos y ley de Gastos Públicos aprobado en el año anterior, así como del presupuesto de los ayuntamientos y entidades descentralizadas y autónomas, y que este informe estará acompañado de los resultados de las auditorías, estudios e investigaciones especiales practicados durante el mismo período, debiendo poner en conocimiento de la sociedad, por medios electrónicos o cualesquiera otros contemplados en su presupuesto, dichos resultados. El “Párrafo” de dicho artículo, agrega que el informe de que se trata contendrá, además, los resultados de la auditoría practicada a la CCRD, así como la forma en que ésta ha cumplido sus objetivos y metas institucionales a través de los indicadores de gestión, y el Artículo 44 de la citada Ley señala que independientemente del informe citado, la CCRD está facultada para hacer de conocimiento del Congreso Nacional, extensivo a la sociedad en general, los resultados específicos de cualquier auditoría, estudio o investigación realizados conforme a lo preceptuado por esta ley.

[165] En cuanto a la manera en que se le suministra información a los ciudadanos, a través de la página “Web” de la CCRD www.camaradecuentas.gob.do, en el apartado correspondiente a “Auditoría” se puede obtener información sobre el registro de firmas auditoras, el plan anual de auditorías y la guía para el sujeto de fiscalización. En el apartado correspondiente a “Contraloría Social”, información sobre denuncias en línea, preguntas frecuentes y jornadas de control social, en el apartado correspondiente a “Transparencia”, información sobre la Oficina de Acceso a la Información de la CCRD y la normativa relativa a los derechos de los ciudadanos a acceder a la información gubernamental. Además, se encuentran publicados en dicha página, los informes anuales presentados al Congreso en virtud de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 10-04.

[166] En cuanto a fortalecimiento institucional, la CCRD cuenta con un “Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional 2010 - 2016, (PEDSI)”⁵⁷, cuyos objetivos son, en síntesis, los siguientes: 1. Corresponder a los requerimientos de la ciudadanía canalizados a la CCRD a través de las organizaciones de la sociedad civil organizada y los individuos, en cumplimiento con las disposiciones de la ley que establecen el Control Social; 2. Fortalecer la orientación proactiva a los ciudadanos sobre los servicios de la CCRD, así como de los derechos y deberes del servidor de la función pública respecto a los procesos de Control Externo; 3. Promover niveles de interrelación con las entidades vinculadas al control; 4. Fortalecer la capacidad de gestión a través de la redefinición de los procesos internos de todas las estructuras orgánicas de la CCRD, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, la Ley y las potestades que le han sido otorgadas, para un mejor desempeño, adoptando los instrumentos y guías necesarias; 5. Diseñar e implementar el Sistema Integral de Control Externo de Entidades Públicas (SICEEP) que basado en tecnología de punta, soporte los diferentes servicios profesionales que forman parte de la Misión de la CCRD; 6. Adecuar la estructura organizacional de la CCRD a las mejores prácticas vigentes para aumentar los niveles de calidad, efectividad, alcance y productividad del servicio al país, en consonancia con el marco legal de la Función Pública; 7. Establecer programas integrales y sostenibles que garanticen la gestión del talento humano para impulsar un servicio de calidad a la nación dominicana, basado en la integridad de sus servidores; 8. Desarrollar al 2011, capacidad institucional para practicar los diferentes tipos de auditorías; 9. Promover el aumento de los niveles

⁵⁶ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CCRD, página 4

⁵⁷ En la visita *in situ*, la CCRD efectuó una presentación sobre el estado de implementación de este Plan, la cual puede consultarse en: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_repdom_plan.ppt

presupuestarios de la CCRD, a efectos de responder a las transformaciones necesarias que se han planteado para servir con eficacia, eficiencia y economía a la Nación, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 194-04 y la Ley 10-04.

4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[167] La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[168] En primer lugar, el Comité, teniendo en cuenta que según lo informado por la CCRD en la visita *in situ*, se requiere contar con un procedimiento más ágil para la recuperación por la vía civil de activos vinculados con la declaratoria de la responsabilidad civil prevista en el artículo 48 de la Ley 10-04, y considerando además que esto ayudaría al cumplimiento de las funciones asignadas a la CCRD en párrafo I del citado artículo y en el numeral 6 del artículo 10 de dicha Ley, relativas, en su orden, a procurar la restitución de los bienes o valores cuando compruebe el perjuicio patrimonial e identifique los responsables, y a emitir resoluciones con fuerza ejecutoria en materia de responsabilidad civil, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 4.4.1 del capítulo II de este informe).

[169] En segundo lugar, el Comité, teniendo en cuenta que la CCRD puso de presente en la visita *in situ*, como una de sus dificultades, que a pesar de la expedición de la Ley 176 - 07 (Ley Municipal) no se ha creado un sistema que permita una fiscalización efectiva en las municipalidades y falta capacitación de quienes tienen a su cargo la aplicación de la misma, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 4.4.2 del capítulo II de este informe).

[170] En tercer lugar, el Comité, en consideración a que la CCRD puso de presente en la visita *in situ*, que la “Liga Municipal Dominicana”, que tiene funciones que inciden en el control fiscal, no es efectiva en el cumplimiento de las mismas, y teniendo en cuenta que una de las funciones atribuidas por el artículo 106 de la Ley 176-07 a dicha Liga, es la de “promover por todos los medios a su alcance las mejores relaciones y el más eficaz espíritu de cooperación entre los municipios de la República Dominicana, con el gobierno central, con el fin de que puedan prestarse la mayor ayuda mutua que sea posible en la realización de las funciones que les corresponden, en la solución de sus problemas, en el desarrollo de sus planes de progreso, y en todo cuanto propenda al mayor bienestar de sus localidades respectivas”, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 4.4.3 del capítulo II de este informe).

[171] Por otra parte, cabe anotar también que en relación con la “Liga Municipal Dominicana”, el “Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)”, que fue invitado a participar en la visita *in situ*, manifestó que la CCRD se ve muy debilitada a nivel local debido, entre otros, a que los municipios no le envían sus estados financieros a través de la “Liga Municipal Dominicana” que esta contemplada en la Ley 176-07 y que no cumple con sus funciones.

[172] En cuarto lugar, el Comité, el Comité observa que, de acuerdo con lo informado por la CCRD en la visita *in situ*, en relación con la implementación del “Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional 2010 - 2016” - PEDSI, aunque se cuenta con un buen nivel de avance en la ejecución de 5 de sus 9 objetivos, los 4 restantes, correspondientes, en síntesis, al fortalecimiento de la capacidad de gestión de la CCRD (objetivo 4); al diseño e implementación del Sistema Integral de Control Externo de Entidades Públicas (SICEP) (objetivo 5); al establecimiento de programas integrales y sostenibles que garanticen la gestión del talento humano (objetivo 7); y a promover el aumento de los niveles presupuestarios de la CCRD (objetivo 9), se encuentran pendientes de

ejecución en un 57%; 75%; 67%; y 90%, respectivamente. El Comité, teniendo en cuenta la importancia que tienen los citados objetivos para la CCRD, le formulará al Estado analizado una recomendación para que considere adoptar las medidas pertinentes para garantizar su ejecución (ver recomendación 4.4.4 del capítulo II de este informe).

[173] En relación con lo anterior, cabe anotar que en la respuesta del Estado analizado al cuestionario relativa a la CCRD,⁵⁸ en el apartado correspondiente a dificultades para el logro de sus propósitos, se manifestó lo siguiente: “En la actualidad, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, se encuentra en un proceso de fortalecimiento institucional tendente al logro y cumplimiento de sus objetivos y funciones, tenemos limitaciones de carácter económico que nos impiden ampliar el alcance de nuestros trabajos y una capacitación técnica idónea para nuestros servidores.

[174] En quinto lugar, el Comité, en consideración a que, además de lo anotado en el párrafo anterior, en relación con las limitaciones de carácter económico de la CCRD, se manifestó también en la respuesta del Estado analizado al cuestionario,⁵⁹ por parte de la misma, que sus recursos provienen de manera principal de una “Asignación Presupuestaria”, la cual, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 10-04 de la Función Pública, es otorgada por una comisión especializada del Congreso integrada por representantes de la propia CCRD y de la Cámara de Senadores y de Diputados, le formulará una recomendación al Estado analizado para que, teniendo en cuenta la autonomía presupuestaria que el artículo 248 de la CP le confiere a este órgano de control superior de origen Constitucional, adopte las medidas pertinentes para que el mismo pueda ejercitar efectivamente dicha autonomía, pudiendo elaborar su propio presupuesto, a fin de poder cumplir con sus cometidos sin dificultades financieras (ver recomendación 4.4.5 del capítulo II de este informe).

[175] En sexto lugar, el Comité, en consideración a que en la respuesta del Estado analizado al cuestionario,⁶⁰ se manifestó por parte de la CCRD, que “dentro de nuestras necesidades de cooperación técnica necesitamos capacitación especializada, apoyo logístico y equipos de tecnología de la información”, y teniendo en cuenta además que en dicha respuesta se expresa también que tal entidad recibe asistencia económica y técnica proveniente de organismos internacionales, le formulará al Estado analizado una recomendación para que considere adoptar las medidas pertinentes para solicitar ante tales organismos que le brinden a la CCRD la asistencia económica y técnica necesaria para que pueda impartir capacitación especializada a su personal y pueda contar con el apoyo logístico y los equipos de tecnología de la información que requiera (ver recomendación 4.4.6 del capítulo II de este informe).

[176] En séptimo lugar, el Comité, teniendo en cuenta que según lo informado por la CCRD en la visita *in situ*, el Reglamento de Recursos Humanos previsto en el artículo 25 de la Ley 10-04, que autoriza al pleno de la CCRD para su expedición, y el cual incluye, entre otros, los deberes, derechos y atribuciones, escalafón, valoración de puestos y un plan de carrera para sus servidores, requiere ser actualizado, al haberse acogido la CCRD al régimen general de la función pública previsto en la Ley de Función Pública 41-08, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 4.4.7 del capítulo II de este informe).

[177] En octavo lugar, el Comité, en consideración a que no se cuenta con un manual en el que se describan las funciones de los empleos de la CCRD diferentes a los de sus altos cargos, y los requisitos para su desempeño, le formulará una recomendación al Estado analizado para que

⁵⁸ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CCRD, página 12

⁵⁹ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CCRD, página 5

⁶⁰ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CCRD, página 12

considere su expedición por parte de la autoridad competente para hacerlo (ver recomendación 4.4.8 del capítulo II de este informe).

[178] En noveno lugar, teniendo en cuenta que en la visita *in situ*, se puso de presente por parte de la CCRD, como una dificultad, que como el régimen previsto en la Ley de Función Pública le permite a los funcionarios el ejercicio profesional en lo que no entre en conflicto con sus funciones, su dedicación a la CCRD es parcial, y aunque se ha pensado contar con funcionarios de dedicación exclusiva, esto sería posible si se mejoraran los sueldos porque ahora son muy bajos, el Comité le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 4.4.9 del capítulo II de este informe).

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[179] Se recabó información relativa a los resultados de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), entre la que se destaca la siguiente:

[180] En primer lugar, en la respuesta del Estado analizado al cuestionario⁶¹ en relación con su acápite correspondiente a resultados de las funciones de prevención de las prácticas corruptas, se informó que “la Cámara de Cuentas, ha realizado campañas de divulgación, e implementado programas de capacitación dirigidos a diferentes sectores de la sociedad tendentes a su concientización sobre el manejo de los recursos públicos y de cómo realizar sus reclamos, para ello hemos contado con la colaboración de Participación Ciudadana, a través del convenio de cooperación suscrito.”⁶²

[181] En relación con la anterior información, el Comité, en consideración a que no se encuentra detallada de tal manera que permita conocer de manera más específica sobre las actividades desarrolladas por la CCRD en materia de prevención de la corrupción, y en particular, sobre las campañas de divulgación y programas de capacitación aludidos en la misma, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 4.4.10 del capítulo II de este informe).

[182] En segundo lugar, en la respuesta del Estado analizado al cuestionario⁶³ se anota que “en cuanto al aspecto correspondiente a las decisiones adoptadas en los últimos cinco (5) años, y sus consecuencias, informamos lo siguiente” y seguidamente se hace alusión a los “Informes de las auditorías practicadas que están siendo conocidas por los tribunales ordinarios correspondientes”, y se relacionan 7, anotándose con respecto a todas ellas, como “responsabilidades derivadas de las auditorías”, lo siguiente: “Responsabilidades Administrativa y Civil e indicios de responsabilidad penal (artículos 47, 48, 49 y, 54, Ley No.10-04 de fecha 20 de enero del año 2004)”. Se informa además, que como consecuencia de dichas auditorías cursan 6 procesos penales en los tribunales ordinarios correspondientes y se ha proferido una sentencia condenatoria.

[183] En relación con la anterior información, el Comité, estima que la misma sirve para determinar que por parte de la CCRD se han declarado responsabilidades administrativas y civiles y se han establecido indicios de responsabilidad penal, en desarrollo de las funciones que se le atribuyen en los artículos 47, 48, 49 y, 54, de la Ley No.10-04, al igual que para determinar que la CCRD ha efectuado seguimiento en relación con el trámite que se le ha dado a los indicios de

⁶¹ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CCRD, página 6

⁶² La CCRD, en atención a lo solicitado en la visita *in situ*, puso a disposición el convenio de cooperación suscrito con la organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana”, el cual puede consultarse en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_repdom.htm (apartado correspondiente a la CCRD)

⁶³ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CCRD, páginas 8 a 12

responsabilidad penal por parte de la autoridades judiciales competentes, con los resultados anotados, pero en consideración a que no se cuenta con información relativa al seguimiento y a los resultados de las responsabilidades administrativas y civiles que han sido declaradas, el Comité le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 4.4.11 del capítulo II de este informe).

[184] Con respecto a lo anterior, cabe anotar que en la visita *in situ*, se informó también de “la realización de aproximadamente 200 informes de auditorías dentro de los cuales han sido determinadas responsabilidades administrativas, civil e indicios de responsabilidad penal, los cuales han sido remitidos a la Procuraduría General de la República, con atención al Departamento correspondiente a los fines de investigación”, pero sin suministrar información sobre los resultados de dichas auditorías, y se puso de presente que no se hace seguimiento con respecto a la aplicación de sanciones que se deriven de la responsabilidad administrativa, pero si en relación con los casos penales, y que se han obtenido 2 sentencias condenatorias en 9 años.

[185] El Comité, teniendo en cuenta lo informado en la visita *in situ*, con respecto a que se han obtenido 2 sentencias condenatorias en 9 años, le formulará una recomendación al Estado analizado a fin de que considere efectuar un estudio de las causas que podrían estar incidiendo en el escaso número de sentencias condenatorias proferidas por los tribunales judiciales con base en los indicios de responsabilidad penal establecidos por la CCRD (ver recomendación 4.4.12 del capítulo II de este informe).

[186] Además de lo anterior, el Comité, en consideración a que no se cuenta con información estadística compilada sobre los resultados de las auditorías, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 4.4.13 del capítulo II de este informe).

[187] Por último, el Comité, en consideración a que no se cuenta con información relativa al número de investigaciones adelantadas por la CCRD en los últimos 5 años con fundamento en el artículo 10, ordinal 10, de la Ley 10-04, que le atribuye la función de investigar las denuncias o sospechas fundamentadas de hechos ilícitos contra el patrimonio público, ni sobre los resultados de dichas investigaciones, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 4.4.14 del capítulo II de este informe).

[188] Por otra parte, la organización de la sociedad civil “Fundación Institucionalidad y Justicia - FINJUS”, que fue invitada a participar en la visita *in situ*, manifestó, entre otros, en relación con la CCRD, refiriéndose a sus informes sobre la ejecución presupuestaria, en un documento escrito al que dio lectura y aportó en versión electrónica,⁶⁴ lo siguiente: “(...) Nos sorprende que en anteriores informes de este importante órgano del Estado se constaten resultados altamente negativos sin tomar ninguna acción posterior, destacándose en el informe de ejecución presupuestaria del 2012: i) la falta de vínculo entre los procesos de ejecución y formulación del presupuesto con la definición de objetivos estratégicos y el logro de resultados concretos; ii) la deficiente programación presupuestaria e incumplimiento de los principios de sinceridad e integridad del presupuesto debido a la falta de exactitud y acuosidad en los montos requeridos para cumplir con los compromisos del Estado; iii) la violación de los principios de integridad y sinceridad representado en la sobreejecución presupuestaria en la que incurrieron 79.4% de las instituciones auditadas. - El citado informe señala, que se incurrieron en faltas tan graves como la no identificación de beneficiarios en transferencias de fondos públicos; la desviación del tope de déficit establecido en el presupuesto en un 0.53% o RD\$12,660.3 millones; incrementos en los financiamientos, créditos y deudas nacionales e

⁶⁴ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_finjus.pdf

internacionales con relación a lo presupuestado y; el incumplimiento parcial o total de la obligatoria rendición de cuentas por parte de cerca del 50% de las entidades municipales en clara violación al Artículo 70 de la Ley 10-04 del órgano rector del sistema nacional de control.”

4.4. Conclusiones y recomendaciones

[189] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[190] La República Dominicana ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de este informe.

[191] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 4.4.1 Adoptar un procedimiento más ágil para la recuperación por la vía civil de activos vinculados con la declaratoria de la responsabilidad civil prevista en el artículo 48 de la Ley 10-04, con el fin de facilitar el cumplimiento de las funciones asignadas a la CCRD en el párrafo I del citado artículo y en el numeral 6 del artículo 10 de dicha Ley, relativas, en su orden, a procurar la restitución de los bienes o valores cuando compruebe el perjuicio patrimonial e identifique los responsables, y a emitir resoluciones con fuerza ejecutoria en materia de responsabilidad civil (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.2 Adoptar las medidas pertinentes para que la CCDR pueda hacer una fiscalización efectiva a las municipalidades, tales como impartir capacitación a quienes tiene a su cargo la aplicación de la Ley 176-07 (“Ley Municipal”) - (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.3 Asegurar por los medios que se consideren convenientes que la “Liga Municipal Dominicana” le preste la debida colaboración a la CCRD, desarrollando sus funciones que tienen incidencia en el control fiscal (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.4 Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la ejecución de los objetivos del “Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional 2010 - 2016” - PEDSI, que se encuentran con un bajo nivel de ejecución (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.5 Adoptar las medidas pertinentes para que, teniendo en cuenta la autonomía presupuestaria que el artículo 248 de la CP le confiere a la CCRD, este órgano pueda ejercitar efectivamente dicha autonomía, pudiendo elaborar su propio presupuesto, a fin de poder cumplir con sus cometidos sin dificultades financieras (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.6 Adoptar las medidas pertinentes para solicitar a los organismos internacionales que le brinden a la CCRD la asistencia económica y técnica necesaria para que pueda impartir capacitación especializada a su personal y pueda contar con el apoyo logístico y los equipos de tecnología de la información que requiera (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).

- 4.4.7 Actualizar el Reglamento de Recursos Humanos de la CCRD, el cual contiene, entre otros, los deberes, derechos y atribuciones, escalafón, valoración de puestos y un plan de carrera para sus servidores, al tenor del régimen de la función pública previsto en la Ley de Función Pública 41-08 (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.8 Adoptar, por parte de la autoridad competente, un manual o documento en el que se describan las funciones de los empleos de la CCRD diferentes a los de sus altos cargos, y los requisitos como perfiles para su desempeño (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.9 Adoptar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, para que los funcionarios de la CCRD puedan tener una remuneración salarial adecuada a su profesión y funciones, de tal manera que la CCRD pueda vincularlos con dedicación exclusiva al cargo (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.10 Elaborar información estadística compilada más específica sobre las actividades realizadas por la CCRD en materia de prevención de la corrupción, y en particular, sobre las campañas de divulgación y programas de capacitación desarrollados, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.11 Adoptar un sistema de seguimiento que le permita a la CCRD conocer el trámite dado por las instancias competentes a las responsabilidades administrativas y civiles que formule o determine en cumplimiento de los artículos 47 y 48 de la Ley 10-04, al igual que sus resultados, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.12 Efectuar un estudio de las causas que podrían estar incidiendo en el escaso número de sentencias condenatorias proferidas por los tribunales judiciales con base en los indicios de responsabilidad penal establecidos por la CCRD, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.13 Elaborar información estadística compilada sobre los resultados de las auditorías e investigaciones realizadas por la CCRD en cumplimiento del numeral 1 del artículo 10 de la Ley 10-04, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.14 Elaborar información estadística compilada sobre el número de investigaciones adelantadas por la CCRD con fundamento en el artículo 10, ordinal 10, de la Ley 10-04, que le atribuye la función de investigar las denuncias o sospechas fundamentadas de hechos ilícitos contra el patrimonio público, y sobre sus resultados, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 4.3. del capítulo II de este informe).

5. LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

5.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[192] La Contraloría General de la República (CGR), cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[193] En cuanto a su objeto, de conformidad con el artículo 247 de la Constitución Política (CP), la Contraloría General de la República (CGR), es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.

[194] En cuanto al ámbito de su competencia, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 10 - 07, el Sistema Nacional de Control Interno (SINACI), del cual la CGR es el órgano rector, rige para las siguientes entidades y organismos: el Gobierno Central; las Instituciones Descentralizadas y Autónomas; las Instituciones Públicas de la Seguridad Social; las Empresas Públicas con participación Estatal Mayoritaria; y los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional. De conformidad con lo establecido en los párrafos II y III de dicho artículo, las excepciones se refieren a las entidades financieras de participación estatal que estén reguladas por la Superintendencia de Bancos, estando esta última sujeta a la rectoría y fiscalización de la CGR, y a los poderes Legislativo y Judicial, la Cámara de Cuentas y Junta Central Electoral, los cuales deben mantener su propio control interno, tomando como referencia la Ley No. 10-07 y las normas emitidas por la CGR.

[195] En cuanto a sus atribuciones, el artículo 14 de la Ley 10 - 07, le asigna, entre otras, las de Inspeccionar y evaluar de acuerdo con normas de auditoría interna gubernamental que en el marco de estándares internacionales aplicables al sector público emita, y en función de los programas, objetivos, metas y resultados previstos en el Presupuesto, aspectos tales como la efectividad del control interno de las entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley e informar a la respectiva institución y al Poder Ejecutivo sus resultados (numeral 2); asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley para mejorar y fortalecer el control interno, mediante recomendaciones⁶⁵ presentadas en los informes de los resultados de las evaluaciones que efectúe (numeral 3); coordinar, orientar y evaluar el trabajo de las Unidades de Auditoría Interna⁶⁶ (numeral 4); realizar investigaciones administrativas de las desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos detectadas, y en los casos en que, como resultado de la evaluación de la ejecución presupuestaria efectuada por las Unidades de Auditoría Interna, se determine que el avance físico de los programas y proyectos de inversiones públicas no se corresponde con los avances financieros otorgados por la Oficina Nacional de Presupuesto (numeral 7, ordinales a. y b.); y, cuando los resultados de las investigaciones que realice lo justifiquen, remitir los antecedentes de las mismas al Ministerio Público (numeral 8).

⁶⁵ El artículo 19 del Decreto 491-07 dispone que, de conformidad con el artículo 7, Numeral 3, de la Ley 10-07, las entidades y los organismos, bajo el ámbito de la misma, deberán acatar las recomendaciones de control interno formuladas por la CGR y sus Unidades de Auditoría Interna, para lo cual una vez aceptadas o definidas soluciones alternas para la resolución de los hallazgos, con las partes afectadas y los funcionarios competentes, el titular de la entidad deberá proponer a la Contraloría o a la UAI respectivamente, un cronograma para su implantación. Dichas recomendaciones, una vez aceptadas o definidas las soluciones alternas, adquirirán el carácter de obligatorias y su incumplimiento constituirá desacato, en los términos del “párrafo” del mismo artículo.

⁶⁶ De conformidad con el artículo 27 de la Ley 10-07, la Auditoría Interna es parte integral del control interno y será practicada por personal profesional interdisciplinario de una unidad técnica especializada e independiente de las operaciones que audita, que se establecerá en cada entidad u organismo bajo el ámbito de esta ley y bajo la responsabilidad de un director de la unidad. Dicha unidad dependerá normativa, administrativa y financieramente de la CGR y tendrá con relación a las respectivas entidades u organismos de conformidad con las normas emitidas por dicha Contraloría, entre sus funciones, las de seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna de la CGR y externa de la Cámara de Cuentas (numeral 6) y coordinación con el control externo y colaboración con el control social y las actividades anticorrupción (numeral 8).

[196] El artículo 15 de la Ley 10-07, relativo a la competencia de la CGR para establecer responsabilidades, dispone que sin perjuicio de las atribuciones de la Cámara de Cuentas o de cualquier otro organismo sobre la materia, la CGR, de acuerdo con el respectivo reglamento que dicte el Poder Ejecutivo, podrá establecer las responsabilidades de carácter administrativo y civil de los servidores públicos, que detecte en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con base en el respectivo informe de evaluación o Auditoría Interna; y el artículo 18 de dicha Ley, contempla entre las atribuciones del Contralor General de la República, las de emitir los informes de las evaluaciones o inspecciones efectuadas por los auditores y los informes con los resultados de las investigaciones administrativas, para ser remitidos al Poder Ejecutivo y a las entidades y órganos que corresponda (numeral 4); y emitir, con base en los análisis jurídicos de responsabilidad y los informes de las respectivas evaluaciones e investigaciones, las resoluciones estableciendo responsabilidad administrativa, en que incurran los servidores o ex servidores públicos y darles el trámite que corresponda (numeral 5).

[197] El artículo 24 del Decreto 491-07 (Reglamento de Aplicación de la Ley 10-07), dispone por su parte, que la CGR, en un lapso de 90 días a partir de la emisión de dicho Decreto, elaborará y someterá a la consideración del Poder Ejecutivo el Reglamento de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, previsto en el artículo 8, de la Ley 10-07, y que dicho reglamento incluirá, por lo menos: 1. Los procedimientos técnico-jurídicos básicos para: a) Efectuar las investigaciones administrativas a que se refiere el numeral 7, del artículo 14, de la Ley 10-07; b) Establecer y tramitar la responsabilidad administrativa, civil e indicios de responsabilidad penal de los servidores públicos, previstas en los artículos 8 y 15 de la Ley 10-07; y c) Establecer sanción por desacato de los servidores públicos, prevista en el artículo 31, de la Ley 10-07. 2. Los requisitos básicos del análisis jurídico de responsabilidad previstos en el Artículo 18, Numeral 5, de la Ley 10-07 y el trámite de los soportes de los informes de las evaluaciones, investigaciones administrativas o auditorías internas que fundamentan las resoluciones en las que se dictaminen responsabilidades de los servidores públicos y los elementos mínimos de dicho dictamen. 3. Los recursos que puede interponer el servidor público contra las resoluciones de la Contraloría. 4. El Reglamento incluirá la regulación que sea procedente, respecto a la responsabilidad civil y penal de los particulares, prevista en el artículo 32 de la Ley 10-07.

[198] Con respecto a la designación del Contralor General de la República, el artículo 13 de la Ley 10-07 dispone que su nombramiento le corresponderá al Poder ejecutivo, con base en méritos o competencia profesional, y que habrá un Subcontralor General designado por el Presidente de la República de una terna presentada por el Contralor General de la República. El artículo 43 del Decreto 491-07 señala que con fines de la aplicación del artículo 19 de la Ley 10-07, el Poder Ejecutivo podrá destituir al Contralor General de la República cuando éste incurriera en violación de las prohibiciones previstas en el artículo 21 de la Ley 10-07 o por cualquier otra causa justa que determine el Presidente de la República.⁶⁷

⁶⁷ El artículo 21 de la Ley 10-07 establece que el Contralor General, el Subcontralor General, los Directores y los Encargados de las Unidades de Auditoría Interna, y cualesquier otros funcionarios con responsabilidad de dirección o mando en la Contraloría, no podrán: 1. Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo el ejercicio de la docencia; 2. Desempeñar otro cargo público; 3. Intervenir en el trámite o en la resolución de asuntos sometidos a su competencia, en los que directa o indirectamente tengan interés personal, o cuando los interesados sean sus parientes, por consanguinidad o afinidad, en línea directa o colateral, hasta el tercer grado inclusive, y señala en su “Párrafo” que la violación de las prohibiciones anteriores constituirá una falta grave del servidor y dará lugar a su destitución automática por justa causa.

[199] En cuanto a la manera en la que se adoptan las decisiones y los recursos que proceden contra las mismas, la Ley 10-07 establece en el numeral 1 del artículo 18, que le corresponde al Contralor General de la República ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Interno y demás atribuciones de la CGR, y señala en el párrafo II del artículo 15 que los servidores públicos y las personas físicas o representantes legales de personas jurídicas privadas u organizaciones no gubernamentales podrán interponer los recursos de ley respecto a los actos administrativos del Contralor General de la República en que se establezcan responsabilidades administrativas, de acuerdo con el reglamento que dicte el Poder Ejecutivo.

[200] En cuanto a la coordinación de sus funciones con otros órganos y para obtener apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía, además del Comité de Coordinación, ad-honorem,⁶⁸ integrado por el Presidente de la Cámara de Cuentas, quien lo preside, y el Contralor General de la República, previsto en el artículo 56 del Reglamento 06-04 de la Ley 10-04, el artículo 16 del Decreto 491-07 dispone que los respectivos órganos rectores de los sistemas técnicos que componen o se relacionan con el Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado, armonizarán con la CGR, en su calidad de Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI) la inclusión de los puntos de control estrictamente necesarios o claves y de las técnicas o mecanismos de control interno, en el proceso administrativo-técnico de cada sistema, teniendo el cuidado de no diluir la responsabilidad del servidor público en el ejercicio de sus funciones. El artículo 31 de la Ley 10-07, dispone, por su parte, que todo servidor público que se niegue a entregar informaciones o documentos o a prestar su colaboración para que la CGR cumpla con las atribuciones, facultades y funciones previstas en la presente Ley, o que de cualquier manera obstaculice la labor de sus funcionarios y empleados, la de los auditores internos, o se niegue a acatar las disposiciones que en uso de las atribuciones que le confiere esta Ley, dicte la CGR, será sancionado con suspensión temporal del cargo sin goce de sueldo; y el artículo 10 de la Ley 10-07, establece que el control social, como medio de fiscalización y participación ciudadana en defensa del gasto público en programas de impacto social y comunitario y en procura del adecuado manejo de los recursos públicos, se interrelaciona con el SINACI mediante la provisión de información relevante a la CGR.⁶⁹

[201] En relación con sus recursos humanos, a su capacitación y al régimen de los mismos, la CGR se rige por la Ley 41-08 de la Función Pública que regula, entre otros, la carrera administrativa y la vinculación por concurso (artículo 37) al igual que el régimen ético y disciplinario del servidor público (artículos 77 a 89), y por su Reglamento de Aplicación 523-09, de Relaciones Laborales, en el cual se prevé como derecho de los funcionarios públicos el de recibir la inducción, formación y capacitación adecuada (artículos 48 a 54) y se regulan sus deberes (artículos 97 a 100), la gradación de las faltas y sanciones disciplinarias (artículos 101 a 109) y el procedimiento disciplinario

⁶⁸ El párrafo I de este artículo dispone que este Comité se reunirá ordinariamente cada tres meses o en las ocasiones que resulten necesarias, debiendo ser convocados por el órgano rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría, que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 10-04 es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). Las funciones de este Comité se describen en el apartado de este informe correspondiente a “existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas” de la CCRD.

⁶⁹ En el documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CGR, (página 14) se anota en relación con esta norma que haciendo acopio del Compromiso No. 14, de Gobierno Abierto, que se refiere a la “Implementación de un Sistema de Contraloría Social”, “en fecha 28 de agosto 2012, se convocaron diversas organizaciones sociales de las cuales solo asistieron ADOCO y Justicia y Transparencia, esta actividad fue la apertura pública a dichas entidades pues siempre a existido una colaboración por parte de la Contraloría General. En ese sentido, corresponde ahora la elaboración de un plan de acción para continuar con el ya citado compromiso.”

(artículos 110 a 125). Se ha adoptado además un Código de Ética, y para la capacitación de su personal cuenta con la Fundación Escuela Nacional de Control FENC.⁷⁰

[202] En cuanto a sus recursos presupuestales, a la CGR se le asigna su presupuesto teniendo en cuenta la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 y los límites institucionales de gastos fijados por la Dirección General de Presupuesto, así como el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo anual.⁷¹

[203] En relación con la descripción de funciones y existencia de manuales o procedimientos documentados para el desarrollo de las mismas, y el uso de tecnología, la CGR cuenta, entre otros, con un Manual de Procedimientos de las diferentes áreas de la entidad,⁷² un Manual de Cargos,⁷³ en el que se describen las funciones de los empleos y se establecen los requisitos para su desempeño; y con la implementación de distintos sistemas tecnológicos, tales como los de Contratos, Ruteo de Expediente, Nómina, Unidad Auditoría Interna (SUAI), Certificaciones de Cargos, Suministros y Gestión Financiera.⁷⁴

[204] Con respecto a la rendición de cuentas y a la manera en la que se le suministra información a los ciudadanos, la CGR elabora anualmente una Memoria Institucional, relativa a las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones, la cual se publica en su página “Web” www.contraloria.gob.do/sitecontraloria, en la que los ciudadanos pueden encontrar también información sobre la CGR, referida entre otros, a sus atribuciones, las normas que la rigen, sus programas y proyectos, su Plan Estratégico Institucional, el derecho a obtener información pública, y además pueden acceder al Portal Oficial para la Realización de Quejas, Reclamaciones, Sugerencias y Denuncias www.311.gob.do.

[205] En cuanto a fortalecimiento institucional, la CGR cuenta con un “Plan Estratégico Institucional 2010-2012”⁷⁵, cuyos objetivos son: 1. “fortalecimiento institucional”, con metas tales como ajustar el marco legal de la CGR al mandato constitucional y desarrollar capacidad para practicar auditorías especializadas e investigaciones forenses; 2. “Implementación del Sistema de Control Interno (SINACI)”;

y 3. “Desarrollo de Operaciones”, con metas tales como practicar auditorías especializadas e investigaciones forenses y capacitar al sector público en prevención del fraude.

5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[206] La Contraloría General de la República (CGR), cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 5.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[207] En primer lugar, el Comité, teniendo en cuenta lo informado por la CGR en la visita *in situ*, en el sentido de que se requiere modificar la Ley 10-07 de 2007, que instituye el Sistema Nacional de

⁷⁰ Información relativa a la capacitación impartida por la FENC, puede consultarse a través del siguiente enlace: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_reptom_funda.pdf

⁷¹ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CGR, página 13

⁷² Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_reptom_proc.pdf

⁷³ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_reptom_levan.pdf

⁷⁴ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CGR, páginas 9 y 10

⁷⁵ El numeral 6 del artículo 18 de la Ley 10-07, le encomienda al Contralor General de la República establecer un plan estratégico de mediano y largo plazo para la ejecución de las atribuciones y funciones de la CGR. El estado de ejecución del “Plan Estratégico Institucional 2010-2012” puede consultarse en: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_reptom_plan.ppt

Control Interno y la Contraloría General de la República (CGR) para adecuarla a las disposiciones de la Constitución Política de 2010 relativas a la CGR y al control interno, al igual que a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 5.4.1 del capítulo II de este informe).

[208] En relación con lo anterior, cabe anotar que en la visita *in situ*, la CGR puso de presente que existe un anteproyecto de ley para modificar la Ley 10-07, el cual aportaron.⁷⁶

[209] En segundo lugar, el Comité, en consideración a que aún no se ha expedido el Reglamento de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, previsto en el artículo 8 de la Ley 10-07, y teniendo en cuenta la importancia del mismo para la efectividad de dicha responsabilidad, debido a las materias que le corresponde regular al respecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto 491-07 (Reglamento de Aplicación de la Ley 10-07), le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere su expedición (ver recomendación 5.4.2 del capítulo II de este informe).

[210] En tercer lugar, el Comité, teniendo en cuenta que según lo informado por la CGR en la visita *in situ* el Comité de Coordinación, ad-honorem, integrado por el Presidente de la Cámara de Cuentas, quien lo preside, y el Contralor General de la República, previsto en el párrafo I del artículo 56 del Reglamento 06-04 de la Ley 10-04, no se ha venido reuniendo ordinariamente con la periodicidad de 3 meses establecida en el párrafo I de dicho artículo, y en consideración a la importancia que para la coordinación interinstitucional entre la CCRD y la CGR tiene dicho Comité, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 5.4.3 del capítulo II de este informe).

[211] En relación con lo anterior, cabe anotar que en la visita *in situ*, se informó por parte de la CGR que el Comité de Coordinación aludido en el párrafo anterior no se ha reunido en los 9 meses que lleva la actual administración de la CGR y que ésta entidad le comunicó a la CCRD la conformación de su delegación ante dicho Comité y están a la espera de que la CCRD los convoque. Además, aportaron un resumen de las reuniones de dicho Comité, en el que se observa que la última reunión del mismo se llevó a cabo el 30 de julio de 2012.⁷⁷

[212] En cuarto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que de conformidad con lo anotado en la respuesta de Estado analizado al cuestionario relativa a la CGR,⁷⁸ en relación con el desarrollo del artículo 10 de la Ley 10-07 que establece el control social, en el sentido de que haciendo acopio del “Compromiso No. 14, de Gobierno Abierto”, que se refiere a la “Implementación de un Sistema de Contraloría Social”, corresponde ahora la elaboración de un plan de acción para continuar con dicho compromiso, el cual, de acuerdo con lo informado por la CGR en la visita *in situ* se encuentra pendiente de elaboración, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 5.4.4 del capítulo II de este informe).

[213] En relación con lo anterior, cabe anotar que en la visita *in situ*, se manifestó por parte de la CGR que la principal dificultad para el plan de acción aludido en el párrafo anterior ha sido que se han encontrado con cierta apatía por parte de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales no

⁷⁶ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_antley10.pdf

⁷⁷ Este resumen, puede consultarse en :http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_resCGR.pdf

⁷⁸ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CCRD, página 14

han atendido las convocatorias efectuadas para tal efecto, pero que van a seguir insistiendo en convocarlas.

[214] En quinto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que de conformidad con lo anotado en la “Memoria Institucional - Año 2012”⁷⁹, de la CGR, esta entidad no dispuso de los recursos financieros necesarios para adecuar su plataforma tecnológica a los requerimientos de la estructura operacional y se diseñó un Plan Estratégico de Tecnología de la información, pendiente de ejecutar por razones presupuestarias, le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere adoptar las medidas pertinentes para asignar a la CGR, dentro de la disponibilidad de recursos, las partidas presupuestales necesarias para llevar a cabo lo anterior (ver recomendación 5.4.5 del capítulo II de este informe).

[215] En relación con lo anterior, cabe anotar que en la visita *in situ*, se reiteró por parte de la CGR que la falta de recursos financieros ha sido la principal dificultad y que a pesar de eso han podido tener algunos avances en aspectos tecnológicos con la ayuda de un préstamo del BID.

[216] En sexto lugar, el Comité, teniendo en cuenta que importantes metas del “Plan Estratégico Institucional 2010-2012”, relacionadas con los objetivos estratégicos de “Fortalecimiento Institucional” y de “Desarrollo de Operaciones”, tales como ajustar el marco legal de la CGR al mandato constitucional, desarrollar capacidad para practicar auditorías especializadas e investigaciones forenses y practicarlas, y capacitar al sector público en prevención del fraude, se encuentran con actividades pendientes de ser ejecutadas o han sido pospuestas para el próximo Plan, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 5.4.6 del capítulo II de este informe).

[217] En relación con lo anterior, cabe tener presente que en la última página del citado Plan Estratégico Institucional, se anotó con respecto a las metas que fueron pospuestas para el próximo Plan Estratégico Institucional (PEI), que esto se debió a limitaciones presupuestarias, principalmente por un recorte al presupuesto que ascendió a la cantidad de RD\$57,880, realizado en el año 2012, lo cual se reiteró en la visita *in situ*.

[218] En séptimo lugar, el Comité, teniendo en cuenta lo informado por la CGR en la visita *in situ* en el sentido de que el Plan Estratégico Institucional 2013-2016 aún se encuentra en proceso de elaboración, y en consideración a que el numeral 6 del artículo 18 de la Ley 10-07 le encomienda al Contralor General de la República establecer un plan estratégico de mediano y largo plazo para la ejecución de las atribuciones y funciones de la CGR, le formulará una recomendación al Estado analizado en el sentido de que agilice su elaboración (ver recomendación 5.4.7 del capítulo II de este informe).

[219] En octavo lugar, el Comité, teniendo en cuenta lo informado por la CGR en la visita *in situ* en el sentido de que requieren más recursos para el cumplimiento de sus responsabilidades, en particular para el control del sector descentralizado y de los municipios, al igual que para capacitación de su personal y para contar con personal especializado y con una mejor infraestructura física, debido a que la misma es pequeña en relación con el número de sus empleados, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado (ver recomendación 5.4.8 del capítulo II de este informe).

[220] En relación con lo anterior, cabe anotar que el “Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)”, que fue invitado a participar en la visita *in situ*, manifestó

⁷⁹ Páginas 8 y 88 de esta Memoria Institucional, que puede consultarse a través del siguiente enlace: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_repdom_memo.pdf

en relación con la CGR, que el Sistema Nacional de Control Interno esta desarrollado apenas entre un 50% y un 60% y que si bien en el nivel central de la administración se cuenta con auditores internos en el sector descentralizado y en los municipios hay carencia de éstos.

5.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[221] En primer lugar, en cuanto a los resultados de Contraloría General de la República (CGR), en la respuesta del Estado analizado al cuestionario correspondiente a resultados de las funciones de prevención,⁸⁰ se informó acerca de la elaboración por parte de la misma de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), las cuales, según se anota en dicha respuesta, “fueron remitidas a todas las instituciones del Estado bajo el ámbito de aplicación de la Ley 10-07”, al igual que de la elaboración de su Código de Ética Institucional, el cual, según se anota en dicha respuesta, “ha sido socializado con todo el personal, entidades y sus suplidores.”

[222] En segundo lugar, en consideración a que en la respuesta del Estado analizado al cuestionario correspondiente a la CGR no se suministró información distinta a la antes anotada en relación con sus resultados, en la visita *in situ* se le solicitó a la misma información compilada sobre resultados de los últimos 5 años correspondientes al desarrollo de sus funciones, particularmente sobre lo siguiente:

[223] a) Acciones realizadas para “apoyar los planes y programas de prevención de la corrupción”, en desarrollo de esta función atribuida al Contralor General de la República en el artículo 18, ordinal 15 de la Ley 10-07.

[224] En relación con lo anterior, en la visita *in situ* se manifestó que los informes de las auditorías que realiza la CGR sirven para la prevención de la corrupción y que a petición de las entidades les prestan apoyo a los planes y programas adoptados por éstas con tal fin, pero no se suministró la información solicitada, razón por la cual el Comité le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto (ver recomendación 5.4.9 del capítulo II de este informe).

[225] b) Investigaciones administrativas adelantadas por la CCR con fundamento en el artículo 14, numeral 7, ordinales a y b, de la Ley 10-07, que le atribuye la función de realizar investigaciones administrativas de las desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos y en los casos en que el avance físico de los programas y proyectos de inversiones públicas no se corresponda con los avances financieros otorgados por la Oficina Nacional de Presupuesto, al igual que sobre los resultados de dichas investigaciones.

[226] En relación con lo anterior, el Comité, teniendo en cuenta que no se suministró la información solicitada, le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto (ver recomendación 5.4.10 del capítulo II de este informe).

[227] c) Remisiones de antecedentes al Ministerio Público de las investigaciones realizadas por la CCR, cuando los resultados de las mismas lo hayan justificado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 10-07, al igual que sobre el seguimiento que ha hecho con respecto a la tramitación de los mismos, y sus resultados.

[228] En relación con lo anterior, el Comité, teniendo en cuenta que en la visita *in situ* se informó que no se han enviado informes de auditoría al Ministerio Público le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto (ver recomendación 5.4.11 del capítulo II de este informe).

⁸⁰ Documento de la respuesta de República Dominicana relativo a la CCRD, página 6

[229] d) Resoluciones estableciendo responsabilidad administrativa emitidas por el Contralor General de la República, con fundamento en el artículo 18, ordinal 5 de la Ley 10-07, que le atribuye la función de “emitir, con base en los análisis jurídicos de responsabilidad y los informes de las respectivas evaluaciones e investigaciones, las resoluciones estableciendo responsabilidad administrativa, en que incurran los servidores o ex-servidores públicos y darles el trámite que corresponda”, al igual que sobre los resultados del trámite que se les haya dado.

[230] En relación con lo anterior, el Comité, teniendo en cuenta que no se suministró la información solicitada, le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto (ver recomendación 5.4.12 del capítulo II de este informe).

[231] e) Inspecciones o evaluaciones realizadas por la CCR con fundamento en el artículo 14, ordinal 2, de la Ley 10-07, al igual que sobre las recomendaciones formuladas a las entidades para mejorar el control interno presentadas en los informes de los resultados de tales evaluaciones, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 3 de dicho artículo, y el seguimiento que se le ha hecho al acatamiento de tales recomendaciones, para los efectos previstos en artículo 19 del Decreto 491-07.

[232] En relación con lo anterior, el Comité, teniendo en cuenta que no se suministró la información solicitada, le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto (ver recomendación 5.4.13 del capítulo II de este informe).

[233] f) Sanciones impuestas con fundamento en el artículo 31 de la Ley 10-07, que dispone que “todo servidor público que se niegue a entregar informaciones o documentos o a prestar su colaboración para que la Contraloría General de la República cumpla con las atribuciones, facultades y funciones previstas en la presente ley; o que de cualquier manera obstaculice la labor de sus funcionarios y empleados, la de los auditores internos; o se niegue a acatar las disposiciones que en uso de las atribuciones que le confiere esta ley, dicte la Contraloría General de la República; será sancionado con suspensión temporal del cargo sin goce de sueldo.”

[234] En relación con lo anterior, en la visita *in situ* se informó que la CGR no ha tenido necesidad de aplicar la norma aludida en el párrafo anterior.

5.4. Conclusiones y recomendaciones

[235] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Contraloría General de la República (CGR) en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[236] **La República Dominicana ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Contraloría General de la República (CGR), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 5 del capítulo II de este informe.**

[237] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

5.4.1 Considerar modificar la Ley 10-07 de 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría General de la República (CGR), para adecuarla a las disposiciones de la Constitución Política de 2010 relativas a la CGR y al control interno, al igual que a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) - (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe).

5.4.2 Expedir el Reglamento de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, previsto en el artículo 8 de la Ley 10-07 (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe).

- 5.4.3 Adoptar las medidas pertinentes para que el Comité de Coordinación, ad-honorem, integrado por el Presidente de la Cámara de Cuentas y el Contralor General de la República, previsto en el párrafo I del artículo 56 del Reglamento 06-04 de la Ley 10-04, se reúna con la periodicidad establecida en el párrafo I de dicho artículo (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.4 Adoptar las medidas pertinentes para que, en desarrollo del artículo 10 de la Ley 10-07, que establece el “control social”, se elabore el plan de acción para continuar con el “Compromiso No. 14, de Gobierno Abierto”, que se refiere a la “Implementación de un Sistema de Contraloría Social”, continuando con los esfuerzos tendentes a la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil para tal efecto (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.5 Adoptar las medidas pertinentes para asignar a la CGR, dentro de la disponibilidad de recursos, las partidas presupuestales necesarias para adecuar su plataforma tecnológica a los requerimientos de la estructura operacional, y para la ejecución de su Plan Estratégico de Tecnología de la Información (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.6 Adoptar las medidas pertinentes para asignar a la CGR, dentro de la disponibilidad de recursos, las partidas presupuestales necesarias para desarrollar las actividades relacionadas con las metas del “Plan Estratégico Institucional 2010 - 2012”, correspondientes a los objetivos estratégicos de “Fortalecimiento Institucional” y de “Desarrollo de Operaciones”, que se encuentran pendientes de ser ejecutadas o han sido pospuestas para el próximo Plan (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.7 Adoptar las medidas pertinentes para agilizar la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2013-2016 (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.8 Adoptar las medidas pertinentes para asignar a la CGR, dentro de la disponibilidad de recursos, las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades, y en particular, para el control del sector descentralizado y de los municipios, al igual que para capacitación de su personal y para contar con personal especializado y con una mejor infraestructura física (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.9 Elaborar información estadística compilada sobre las acciones realizadas para “apoyar los planes y programas de prevención de la corrupción”, en desarrollo de esta función atribuida al Contralor General de la República en el artículo 18, ordinal 15 de la Ley 10-07, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 5.3. del capítulo II de este informe).
- 5.4.10 Elaborar información estadística compilada sobre el número de investigaciones administrativas adelantadas por la CCR con fundamento en el artículo 11, ordinales a y b, de la Ley 10-07, al igual que sobre los resultados de dichas investigaciones, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 5.3. del capítulo II de este informe).
- 5.4.11 Efectuar un estudio de las causas que podrían estar incidiendo en que no se hayan remitido antecedentes al Ministerio Público de las investigaciones realizadas por la CGR, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 10-07, en orden a

identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 5.3. del capítulo II de este informe).

5.4.12 Elaborar información estadística compilada sobre el número de resoluciones estableciendo responsabilidad administrativa emitidas por el Contralor General de la República, con fundamento en el artículo 18, ordinal 5 de la Ley 10-07, al igual que sobre los resultados del trámite que se les haya dado a las mismas, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 5.3. del capítulo II de este informe).

5.4.13 Elaborar información estadística compilada sobre el número de inspecciones o evaluaciones realizadas por la CGR con fundamento en el artículo 14, ordinal 2, de la Ley 10-07, al igual que sobre las recomendaciones formuladas a las entidades para mejorar el control interno presentadas en los informes de los resultados de tales evaluaciones, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 3 de dicho artículo, y el seguimiento que se le ha hecho al acatamiento de tales recomendaciones, para los efectos previstos en artículo 19 del Decreto 491-07. Lo anterior, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 5.3. del capítulo II de este informe).

III. BUENAS PRÁCTICAS

[238] De conformidad con lo previsto en el apartado V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda* y en la *Estructura* adoptada por el Comité para los informes de dicha Ronda, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado en su respuesta, las cuales ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por considerar que pueden ser de beneficio para los mismos:

[239] **1. En relación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG):**

[240] - “Estandarización Portales Web: En todo portal debe existir un enlace de Transparencia que sea accesible y amigable al ciudadano, de manera que la información pública este actualizada y el ciudadano en general pueda verificar como el gobierno usa los fondos públicos. Por lo tanto que cada institución tenga su enlace activo asegurará el acceso a la información y garantizará el derecho fundamental a la información y el cumplimiento de la ley 200-04.”⁸¹

[241] **2. En relación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA):**

[242] - “Creación de la Unidad de Auditoría Forense: Es una unidad especializada, adscrita al Departamento de Investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que brinda auxilio en la investigación para los análisis financieros y el peritaje.”⁸²

[243] **3. En relación con el Poder Judicial (PJ):**

⁸¹ En las páginas 7 y 8 del documento de la respuesta de la República Dominicana al cuestionario, relativa a la DIGEIG, se puede obtener mayor información al respecto.

⁸² En las páginas 25 y 26 del documento de la respuesta de la República Dominicana al cuestionario, relativa a la PEPCA, se puede obtener mayor información al respecto.

[244] - “La Carrera Judicial: El Sistema de Carrera Judicial establecido en la Constitución de la República Dominicana y en la Ley de Carrera Judicial regula el Estatuto Jurídico de la Carrera Judicial, el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro del juez, con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad. - Para ser juez del Poder Judicial todo aspirante debe someterse a un concurso público de méritos mediante el sistema de ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura que al efecto establezca la Ley y, haber aprobado satisfactoriamente el programa de formación de dicha Escuela, por un período de dos años. Solo están exentos los miembros de la Suprema Corte de Justicia que son de libre elección.”⁸³

[245] **4. En relación con la Contraloría General de la República (CGR):**

[246] - “Implementación y Seguimiento del Sistema Nacional de Control Interno: La implementación y seguimiento del Sistema Nacional de Control Interno a través de la emisión de las Normas Básicas de Control Interno, tiene el objetivo fundamental de estandarizar los procesos y controles en las entidades estatales. Las NOBACI constituyen el marco de referencia en materia de control interno, para que el sector público prepare los procedimientos y reglamentos específicos del funcionamiento de sus sistemas de administración y control.”⁸⁴

IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS⁸⁵

[247] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por la República Dominicana en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas⁸⁶, y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional por el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[248] El Comité también tomará nota en este apartado del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación 1.1.1:

⁸³ En las páginas 25 a 27 del documento de la respuesta de la República Dominicana al cuestionario, relativa al Poder Judicial (PJ), se puede obtener mayor información al respecto.

⁸⁴ En las páginas 19 a 23 del documento de la respuesta de la República Dominicana al cuestionario, relativa a la CGR, se puede obtener mayor información al respecto.

⁸⁵ El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido replanteadas se encuentra incluido en el Anexo I de este Informe.

⁸⁶ Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/reptom.htm>

Considerar fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Fortalecer el régimen de incompatibilidades e inhabilidades vigente tomando en cuenta, de acuerdo con los alcances que determine la ley y en relación con los cargos que ésta determine, el siguiente aspecto: -Desarrollar otros mecanismos que identifiquen o detecten causas sobrevinientes que pudieran ocurrir en el transcurso del ejercicio de la función pública y originar un conflicto de interés.⁸⁷

[249] En su respuesta,⁸⁸ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[250] - “La Constitución Política de la República Dominicana establece una serie de incompatibilidades con los cargos públicos. Como el artículo 135: “Los Ministros y Viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar Conflictos de Intereses”. También los artículos 77, 140 y 144 establecen una serie de incompatibilidades para los cargos públicos.”

[251] - “Si bien no existe en el ordenamiento jurídico dominicano una normativa específica sobre conflicto de intereses, si existen disposiciones dispersas como el Régimen Ético y Disciplinario del Servidor Público (artículo 80 de la ley de 41-08 sobre Función Pública) que establecen prohibiciones a los servidores públicos con la finalidad de evitar que estos incurran en situaciones de conflicto de intereses.”

⁸⁷ En la Tercera Ronda, con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “En la actualidad un equipo multi-institucional trabaja en la elaboración de un anteproyecto sobre conflicto de interés en que incurren funcionarios públicos, para posteriormente someterlo al Congreso Nacional, esto con el fin de cumplir con las disposiciones de[Convención]. La Constitución Política de la República Dominicana establece una serie de incompatibilidades con los cargos públicos. Como el artículo 135: “Los Ministros y Viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar Conflictos de Intereses”. También los artículos 77, 140 y 144 establecen una serie de incompatibilidades para los cargos públicos. Provisionalmente la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, y la Ley 41-08 sobre función pública son las únicas que tratan el tema de las inhabilidades y prohibiciones que tienen los funcionarios públicos. Por ejemplo la Ley 340-06 que en su artículo 14 dice que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado un grupo de altos funcionarios entre los que menciona al Presidente y Vicepresidente de la República, Los Ministros y Viceministros, los Legisladores, los jueces del Poder Judicial, Alcaldes, y otros altos funcionarios e incumbentes de instituciones públicas. Por otro lado, la ley 41-08 sobre Función Pública en su artículo 80 establece una serie de actos prohibidos para los servidores.” Esta información no se analizó en el informe de la Tercera Ronda por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis en esa ronda (ver el apartado I de dicho informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tiene en cuenta para el presente informe.

⁸⁸ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 8

[252] - “El artículo 14 de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas establece expresamente los cargos a los cuales les está prohibido contratar con el Estado y otras inhabilitaciones.”

[253] - “El Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le otorga la atribución de órgano rector en materia de conflicto de intereses. Actualmente se está trabajando en un Anteproyecto de Ley de Conflicto de Intereses que aglutine todas las disposiciones dispersas que rigen la materia.”

[254] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida a) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Considerar la ampliación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades a lo servidores públicos de todas las ramas del poder público, incluyendo miembros del poder legislativo, del poder judicial, el poder ejecutivo y de los miembros de los órganos superiores de control.⁸⁹

[255] En su respuesta,⁹⁰ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[256] - “Entre los funcionarios a los cuales la ley 340-06 les prohíbe contratar ni ser proveedores del Estado se encuentran el Presidente y Vicepresidente de la República, Los Senadores y Diputados del Congreso de la República, Jueces del Poder Judicial, Miembros de la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Alcaldes y Regidores Municipales, Procurador General de la República, entre otros. (Ley 340-06, artículo 14, numeral 1).”

[257] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que los avances reportados en relación con la ampliación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades se refieren a un sólo tema específico, como lo es el de contratación pública, y como ya se anotó, aún no se ha expedido la normativa integral para fortalecer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ya que de acuerdo con lo informado por el Estado analizado, actualmente lo que existe es un anteproyecto de ley al respecto (ver medida b) de la sección 1.1 del anexo I de este informe).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Considerar la eliminación de la disposición del Código de Ética que permite la participación laboral en una institución pública de familiares del titular de la misma.⁹¹

⁸⁹ En la Tercera Ronda, con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó: “Ver artículo 14, no. 1 de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.” Esta información no se analizó en el informe de la Tercera Ronda, por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis en esa ronda (ver el apartado I de dicho informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tiene en cuenta para el presente informe.

⁹⁰ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 9

[258] En su respuesta ⁹² el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso que le permite estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, el siguiente:

[259] - “La ley 120-01 que creaba el Código de Ética del Servidor Público fue derogada por la Ley 41-08 sobre Función Pública, la cual prohíbe expresamente en su artículo 74 que laboren en una misma institución conyugues y familiares hasta el tercer grado.”

[260] En relación con lo anterior, el Comité observa que en efecto, la Ley 41-08 sobre Función Pública, en su artículo 104, derogó expresamente la Ley 120-01 que establecía el Código de Ética del Servidor Público, y en el numeral 15 de su artículo 80, contempló expresamente la prohibición para los servidores públicos de prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía.

[261] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida c) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Implementar las medidas que considere pertinentes para hacer efectivo el tribunal disciplinario al que se refiere el párrafo III del Código de Ética⁹³.

[262] En su respuesta ⁹⁴ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, que le permiten al Comité considerar que la misma ya no tiene vigencia, lo siguiente:

[263] - “La ley 120-01 fue derogada por la ley 41-08 sobre Función Pública. La ley 41-08 de Función Pública en su capítulo III (art. 81) establece el régimen disciplinario y su procedimiento.

⁹¹ En la Tercera Ronda, con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “La ley 120-01 del Código de Ética del Servidor Público fue derogada por la ley 41-08 de Función Pública. Lo relativo al deber ético de los funcionarios esta regulado por el Régimen Ético y Disciplinario (artículo 77 y siguientes) de la Ley de Función Pública.” Esta información no se analizó en el informe de la Tercera Ronda, por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis en esa ronda (ver el apartado I de dicho informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tiene en cuenta para el presente informe.

⁹² Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 10

⁹³ En la Tercera Ronda, con respecto a esta recomendación, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “La ley 41-08 de Función Pública en su capítulo III (art. 81) establece el régimen disciplinario y su procedimiento. Describe las faltas y establece 3 grados de gravedad para estas, y también determina sanciones aplicables a los funcionarios públicos que cometen estas faltas.” Esta información no se analizó en el informe de la Tercera Ronda, por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis en esa ronda (ver el apartado I de dicho informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tiene en cuenta para el presente informe.

⁹⁴ Documento de la respuesta de República al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 12

Describe las faltas y establece 3 grados de gravedad para estas, y también determina sanciones aplicables a los funcionarios públicos que cometen estas faltas. No se establece un tribunal disciplinario, sino que es potestad de los superiores jerárquicos la aplicación de estas sanciones a través de procedimientos que involucran a los departamentos Jurídicos y de Recursos Humanos de cada institución.”

[264] En relación con lo anterior, el Comité observa que en efecto, la Ley 41-08 sobre Función Pública, en su artículo 104, derogó expresamente la Ley 120-01 que establecía el Código de Ética del Servidor Público y contemplaba el Tribunal Disciplinario, y que dicha nueva Ley sobre Función Pública, en sus artículos 85 y 86, le atribuye la potestad disciplinaria sobre los servidores públicos a sus supervisores, a los titulares de las entidades y al Presidente de la República, de acuerdo con la sanción a imponer, con lo cual ha dejado de tener vigencia la aludida medida, que estaba orientada a la efectividad de un tribunal que ya no existe.

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Considerar la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico una normativa que limite la participación de ex servidores públicos, incluyendo los de alto rango, y en general en situaciones que conlleven el aprovechamiento indebido de la condición de ex servidor público, en un plazo determinado, y sin afectar de manera absoluta su derecho constitucional al trabajo.⁹⁵

[265] En su respuesta,⁹⁶ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[266] - “El artículo 14 de la ley de 340-06 sobre Contrataciones Públicas, enumera una lista de funcionarios inhabilitados para contratar con el Estado, entre estos el Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros, Senadores y Diputados del Congreso de la República, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, entre otros. El párrafo I de este artículo establece que para estos funcionarios contemplados en el numeral 1 del artículo 14, la prohibición se extenderá hasta seis meses después de la salida del cargo.”

[267] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida e) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que los avances reportados en relación con las limitaciones para los ex servidores públicos, se refieren a un sólo tema específico, como lo es el de contratación pública, y como ya se anotó, aún no se ha expedido la normativa integral para fortalecer el régimen de inhabilidades

⁹⁵ En la Tercera Ronda, con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “La nueva Constitución Política de la República Dominicana condena en su artículo 135 el conflicto de intereses en que puedan incurrir los Ministros y Viceministros, y además establece otras prohibiciones para los funcionarios públicos. En la actualidad en la República Dominicana un equipo multi-institucional (integrado por la DPCA, Comisión Nacional de Ética, Dirección General de Contrataciones Públicas y Ministerio de Función Pública) está trabajando en la redacción de un proyecto de ley que regula el conflicto de interés en la administración pública.” Esta información no se analizó en el informe de la Tercera Ronda, por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis en esa ronda (ver el apartado I de dicho informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tiene en cuenta para el presente informe.

⁹⁶ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 13

e incompatibilidades, ya que de acuerdo con lo informado por el Estado analizado, actualmente lo que existe es un anteproyecto de ley al respecto (ver medida c) de la sección 1.1 del anexo I de este informe).

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Reunir información respecto a los casos de conflictos de intereses, tendiente a establecer mecanismos de evaluación que permitan verificar los resultados sobre el tema.

[268] En su respuesta,⁹⁷ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[269] - “Si bien el Decreto 486-12 otorga a la DIGEIG atribuciones de Órgano Rector en materia de conflicto de intereses, a la fecha no se ha recopilado información estadística no estandarizada sobre este fenómeno en la administración pública.”

[270] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida f) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que como lo dice el Estado analizado en su respuesta, si bien se expidió el Decreto 486-12, aún no se ha recopilado la información a la que se refiere dicha medida (ver medida d) de la sección 1.1 del anexo I de este informe).

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación 1.2.1:

[271] Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

Recomendaciones formuladas por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Recomendación 1.2.2:

- Fortalecer la capacidad operativa de la Contraloría General y del DPCA, a fin de que puedan superar los obstáculos que actualmente dificultan procesar un mayor número de inspecciones contables y cumplir cabalmente con las facultades que al respecto confieren los artículos 22 al 24 de la Ley de Contabilidad No. 3894.

[272] En su respuesta,⁹⁸ el Estado analizado manifiesta, en relación con la recomendación anterior, que tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (anterior DPCA) son órganos de control superior evaluados individualmente en el cuestionario para la Cuarta Ronda, por lo que se referirán a los avances institucionales en el capítulo de dicho cuestionario correspondiente a tales órganos.

⁹⁷ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 14

⁹⁸ Documento de la respuesta de República al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 15

[273] El Comité, en consideración a que en el capítulo II del presente informe se efectuó un análisis actualizado y detallado en relación con los órganos de control superior objeto de la recomendación antes aludida, se acoge a lo indicado en dicho capítulo en relación con cada uno de ellos, y estima, por lo tanto, que la recomendación 1.2.2 de la sección 1.2 del capítulo IV de este informe, arriba transcrita, ha dejado de tener vigencia.

Recomendación 1.2.3:

- Fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General de Bienes Nacionales a fin de que pueda desarrollar cabalmente las responsabilidades que la ley le otorga relacionadas con la creación y mantenimiento de un inventario de los bienes muebles e inmuebles del Estado. Impulsando medidas que, entre otros aspectos, eviten que el desarrollo de estas funciones dependa de la discrecionalidad del Director de esta Dirección o de cualquier otro funcionario.

[274] En su respuesta,⁹⁹ el Estado analizado manifiesta, en relación con la recomendación anterior, que la Dirección General de Bienes Nacionales es una institución pública creada mediante Ley No.1832, la cual estará a cargo de un Director General, y sus funciones son las de llevar y mantener al día el catastro de los bienes muebles e inmuebles del Estado, y remite para más información a la página “Web” de la misma: <http://www.bn.gov.do/>

[275] El Comité, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la recomendación 1.2.3 de la sección 1.2 del capítulo IV de este informe, teniendo en cuenta que no pudo contar con información que le permita establecer si la capacidad operativa de la Dirección General de Bienes Nacionales ha sido fortalecida de acuerdo con lo previsto en dicha recomendación (ver recomendación 1.2.1 de la sección 1.2 del anexo I de este informe).

[276] En relación con lo anterior, cabe anotar que en la visita *in situ*, no se contó con la presencia de un representante de la Dirección General de Bienes Nacionales, a pesar de que se previó un panel para tal efecto en la agenda de dicha visita.

[277] Por otra parte, cabe anotar también, que el “Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)”, que fue invitado a participar en la visita *in situ*, manifestó en relación con la Dirección General de Bienes Nacionales, que esta entidad no tiene el sistema nacional de catastro actualizado y por eso no están registrados en el mismo todos los bienes del Estado, algunos de los cuales se encuentran a nombre de particulares porque a pesar de existir sentencias que ordenan su traspaso al Estado no se ha procedido a hacer el correspondiente registro. Indicó además que falta implementar en un 60% el sistema digital de registro y que se ha avanzado en el nivel central de la administración pero no con respecto a las entidades autónomas y los municipios.

Recomendación 1.2.4:

- Continuar y perfeccionar la labor que realiza la Dirección General de Contabilidad en la organización de la contabilidad de Estado, asegurando que ésta cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para desempeñar sus labores.

[278] En su respuesta,¹⁰⁰ el Estado analizado manifiesta, en relación con la recomendación anterior, que la Dirección General de Contabilidad Gubernamental tiene como misión administrar un sistema

⁹⁹ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 16

¹⁰⁰ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 17

único de contabilidad para todo el Sector Público Gubernamental, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, y remite para más información a la página “Web” de la misma: <http://www.digecog.gov.do/>

[279] En la visita *in situ*, por parte del Director General de Contabilidad, se puso de presente que en la actualidad están en condiciones de desarrollar sus labores con los recursos con los que cuentan, pero que se están adelantando gestiones para su incremento, debido a que van a empezar a implementar el sistema de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y el catalogo de cuentas va abarcar más instituciones, con lo cual van a necesitarse mayores recursos a partir del año 2014.

[280] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 1.2.4 de la sección 1.2 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que aún no están asegurados los mayores recursos que va a necesitar la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, como consecuencia de la implementación del sistema de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) - (ver recomendación 1.2.2 de la sección 1.2 del anexo I de este informe).

[281] Por otra parte, cabe anotar, que el “Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)”, que fue invitado a participar en la visita *in situ*, manifestó en relación con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que esta entidad que fue creada por la Ley 126-01 cuenta con poco presupuesto.

Recomendación 1.2.5:

- Continuar efectuando gestiones a fin de recuperar, preservar y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, tales como las que impulsa el Instituto Agrario Dominicano, DPCA, la Secretaría de Estado de Educación, y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre.

[282] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la recomendación anotada. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a dicha recomendación, al mismo tiempo que estima del caso replantearla, en lo que respecta a la DPCA, teniendo en cuenta que en la sección 2 del capítulo II del presente informe hizo un análisis integral de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa - PEPCA (que se denominaba DPCA con anterioridad a la expedición de la Resolución No. 003 de febrero 13 de 2013), al cual se acoge. En consecuencia, el Comité replantea la recomendación 1.2.5 de la sección 1.2 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera (ver recomendación 1.2.3 de la sección 1.2 del anexo I de este informe):

[283] *Continuar efectuando gestiones a fin de recuperar, preservar y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, tales como las que impulsa el Instituto Agrario Dominicano, la Secretaría de Estado de Educación, y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre.*

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación 1.3.1:

Considerar la posibilidad de fortalecer los mecanismos con los que cuenta para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Única medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Analizar la posibilidad de implementar disposiciones y medidas que permitan y faciliten al funcionario público la presentación, en sede administrativa, de denuncias, ya sea creando una instancia en cada institución pública o bien a través de una instancia u órgano que a nivel nacional desempeñe esta labor. Abarcando, además, la posibilidad de que las mismas se refieran no solo a las conductas que se encuentran penalmente tipificadas, sino también a aquellas que constituyen una infracción a las normas y disposiciones administrativas dirigidas a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios y en la gestión pública.¹⁰¹

[284] En su respuesta ¹⁰² el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso que le permite estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, el siguiente:

[285] - “El Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, le otorga entre otras, la función de recepción de denuncias sobre posibles acciones de funcionarios públicos contrarias a disposiciones administrativas, sobre todo al régimen disciplinario e incompatibilidades con sus funciones. En este sentido, la DIGEIG tiene a disposición del ciudadano un formulario para la recepción de denuncias que puede ser descargado de la página web <http://digeig.gob.do/trans/file/InstrumentodeRecepciondeDenuncias.docx>. - Para más detalle sobre este servicio visite <http://digeig.gob.do/trans/p/u/servicios-al-publico-1/>.”

[286] En relación con lo anterior, el Comité observa que en efecto, el Decreto 486-12 que crea la DIGEIG, en sus artículo 6, numerales 19 y 20, le asignan al mismo competencias en materia de recepción e investigación de denuncias sobre supuestas violaciones al régimen ético y disciplinario, y que además cuenta con los medios antes referidos para facilitar la presentación de dichas denuncias.

[287] Por otra parte, en relación con lo informado por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario de la Tercera Ronda, en el sentido de que en el Congreso existe un proyecto de Ley de Protección de Denunciantes de Actos de Corrupción, el Comité considera que por haber sido analizada esta materia en la Segunda Ronda, en la cual se le formularon al Estado analizado recomendaciones concretas en relación con la protección de denunciantes, no le corresponde pronunciarse al respecto en el presente informe.

¹⁰¹ En la Tercera Ronda, con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “Desde el año 2006 existe un proyecto de Ley de Protección de Denunciantes de Actos de Corrupción, que protege a los denunciantes de buena fe y funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción de los cuales tengan conocimiento. Pero lamentablemente esta pieza legal aun no ha sido aprobada ni conocida por el Congreso, a pesar de la insistencia de instituciones como la DPCA y la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.” Esta información no se analizó en el informe de la Tercera Ronda, por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis en esa ronda (ver el apartado I de dicho informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tiene en cuenta para el presente informe.

¹⁰² Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 10

[288] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la única medida de la recomendación 1.3.1 de sección 1.3 del capítulo IV de este informe.

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCION)

Recomendación:

Considerar mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos y regular su publicidad.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Impulsar las decisiones que sean necesarias con el fin de que la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, pasivos y activos, al igual que los mecanismos para su efectivo cumplimiento. Contemplar la posibilidad de establecer en lugar o complementariamente a la nómina expresa de cargos, criterios generales que permitan su individualización, aún cuando la estructura orgánica de la administración sufra modificaciones.

[289] En su respuesta,¹⁰³ el Estado analizado no presenta información diferente a la que ya fue analizada por el Comité en la Primera Ronda con respecto a la anterior medida, la cual se refiere a la Ley 82 de 1979, y por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma, y en ese sentido, teniendo en cuenta que la “*Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas*”,¹⁰⁴ aprobada por el Comité, contiene en el párrafo final de su artículo 3 una previsión que le

¹⁰³ En el documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda (página 21) se anota que: “*La ley 82 del año 1979 establece la obligación de presentación de la Declaración Jurada de Bienes para un universo de funcionarios ente ellos el Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados, Ministros y Viceministros, Alcaldes, jueces, representantes del Ministerio Público, entre otros funcionarios importantes (Ley 82-79, artículo 2). Dice su artículo 3 que el inventario patrimonial deberá contener los bienes muebles e inmuebles de los declarantes, así como sus activos y pasivos. El procedimiento establecido en el artículo 4 manda al funcionario obligado a depositar su inventario patrimonial en la Tesorería Nacional, y esta a su vez remite una copia a la Procuraduría General de la República. Estas copias estarán a disposición de terceros que las soliciten.*”

¹⁰⁴ Dicha Ley Modelo es el resultado de un amplio proceso de consultas realizado en el marco de un programa de cooperación desarrollado por la Secretaría General de la OEA, a través del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en su condición de Secretaría Técnica del MESICIC, que, con el apoyo de un consultor internacional para la redacción de su primera versión, fue debatida en un taller de trabajo realizado en Buenos Aires, en mayo de 2011, con la participación de funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y México, así como del Banco Mundial, cuyos resultados fueron expuestos en la Segunda Conferencia sobre Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción, celebrada en Cali, Colombia, en junio del mismo año. Posteriormente, fue puesta a consideración de los miembros del Comité de Expertos del MESICIC y de organizaciones de la sociedad civil para sus comentarios y observaciones, los cuales se encuentran incorporados en esta última versión, la cual fue avalada por el Comité de Expertos del MESICIC en la sesión plenaria celebrada el día 22 de marzo de 2013, en el marco de su Vigésima Primera Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 18 al 22 de marzo de 2013. Para más información, ver: http://www.oas.org/juridico/spanish/ley_declaracion.htm

permitiría a la autoridad competente establecer criterios generales de aplicación para determinar el alcance de las categorías de empleo establecidas en relación con los sujetos obligados a presentar la declaración, la cual sería útil para el Estado analizado, estima del caso replantear dicha medida, de la siguiente manera (ver medida a) de la de la sección 2 del anexo I de este informe):

[290] *Considerar la posibilidad de complementar la Ley No. 82 de 1979, en lo atinente al universo de funcionarios obligados a presentar Declaración Jurada de Bienes, previendo que la autoridad competente podrá establecer criterios generales de aplicación para determinar el alcance de las categorías establecidas en la misma, como lo propone el artículo 3 de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas.”*¹⁰⁵

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Perfeccionar los esfuerzos dirigidos a implementar un registro que contenga los datos de los funcionarios públicos obligados a presentar las declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos, previendo mecanismos para su actualización periódica, de manera tal que se facilite la administración y gestión de estas declaraciones.*¹⁰⁶

[291] En su respuesta,¹⁰⁷ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[292] - “La DIGEIG, tiene el mandato de dar seguimiento al cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de hacer su declaración jurada de bienes, por lo que ha preparado un listado de funcionarios obligados para verificar el nivel de cumplimiento. Además del listado que maneja la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que maneja el Sistema Automatizado de Declaración Jurada de Bienes como lo establece el Decreto 287-06.”

[293] En la visita *in situ*, se puso de presente que por parte del la DIGEIG la necesidad de contar con un listado integral de funcionarios obligados a presentar declaración juradas de ingresos, activos y pasivos, y se señaló que la Tesorería General de la República sería la entidad a la que correspondería su elaboración, teniendo en cuenta sus competencias en la materia.

[294] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación 2.1 de la sección 2 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a que aún no se cuenta con un registro o listado integral de funcionarios obligados

¹⁰⁵ Texto disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_declaracion.pdf

¹⁰⁶ En la Tercera Ronda, con respecto a esta medida el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “El actual sistema automatizado para la recepción de Declaración Jurada de Bienes cuenta con un listado de cargos y funciones de los funcionarios obligados por la actual ley 82-79.” Esta información no se analizó en el informe de la Tercera Ronda, por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis en esa ronda (ver el apartado I de dicho informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tiene en cuenta para el presente informe.

¹⁰⁷ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 22

a presentar declaración juradas de ingresos, activos y pasivos (ver medida b) de la sección 2 del anexo I de este informe).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Complementar las normas sobre el contenido de las declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos de los servidores públicos, de tal manera que se incluya una descripción de la naturaleza o características de los bienes que el funcionario debe individualizar, así como los criterios que deben emplearse para su valoración económica.

[295] En su respuesta,¹⁰⁸ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[296] “El formulario virtual a través del cual los funcionarios públicos obligados por la ley 82-79 realizan su declaración jurada de bienes establece los campos donde los funcionarios deben la información relativa a su patrimonio. Estos campos incluyen, entre otros: • Bienes muebles e inmuebles; • Dinero y títulos en bancos; • Acciones y participación en sociedades comerciales; • Producciones agrícolas y ganado; • Participación en sucesiones indivisas; • Datos de su conyugue. Este Sistema Automatizado de Declaración Jurada de Bienes fue creado por Decreto 287-06, es administrado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). A través de este sistema virtual, el funcionario solicita una clave de acceso a los administradores del sistema, accede a la página Web y llena el formulario de la declaración jurada, lo imprime, lo legaliza ante notario público y deposita el original en la Tesorería Nacional, como señala la ley 82-79.”

[297] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación 2.1 de la sección 2 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a que aún no se cuenta con normas complementarias relativas al contenido de la Declaración, que incluyan una descripción suficientemente detallada de la naturaleza o características de los bienes a declarar, ni de los criterios que deben emplearse para su valoración económica, y en ese sentido, teniendo en cuenta que la “*Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas*”, aprobada por el Comité, contiene en sus artículos 5 y 6 una descripción detallada de los ingresos, activos y pasivos a ser declarados por parte de los sujetos obligados y de su grupo familiar, estima del caso replantear dicha medida, de la siguiente manera (ver medida c) de la sección 2 del anexo I de este informe):

[298] *Complementar las normas sobre el contenido de las declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos de los servidores públicos, de tal manera que se incluya una descripción de la naturaleza o características de los bienes que el funcionario debe individualizar, teniendo en cuenta los artículos 5 y 6 de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas”, así como los criterios que deben emplearse para su valoración económica.*

[299] Por otra parte, cabe anotar, que la organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana”, que fue invitada a participar en la visita *in situ*, manifestó lo siguiente: “las declaraciones juradas de

¹⁰⁸ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 23

bienes no cuentan con la información descriptiva de los bienes de los declarantes, registrando datos imprecisos de los mismos, muy alejados de la transparencia que se desea impregnar a tales declaraciones juradas.”

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Implementar un sistema de declaración de bienes patrimoniales, activos y pasivos, orientado a detectar, evitar y sancionar conflictos de intereses, así como casos de enriquecimiento ilícito u otros actos lícitos, señalando expresamente el objetivo que persigue la normativa que regule esta materia.

[300] En su respuesta,¹⁰⁹ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[301] - “Como complemento a la declaración jurada de bienes, el Decreto 486-12 que crea la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, en sus artículos 7 y 8 establece la presentación de un informe financiero anual para los funcionarios obligados (del Poder Ejecutivo).”

[302] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida d) de la recomendación 2.1 de la sección 2 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración al ámbito de cubrimiento limitado a los funcionarios obligados del Poder Ejecutivo al que se circunscribe la presentación del informe financiero anual previsto en los artículos 7 y 8 del Decreto 486-12, y a que la normativa relativa a la declaración de ingresos, activos y pasivos, aún no señala expresamente que esta orientada a los objetivos a los que se alude en dicha medida, y en ese sentido, teniendo en cuenta que la “*Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas*”, aprobada por el Comité de Expertos del MESICIC, se refiere en su artículo 1º a las finalidades de detectar e identificar variaciones significativas e injustificadas de patrimonio, y de detectar y prevenir conflictos de intereses, el Comité estima del caso replantear la medida d) de la citada recomendación, de la siguiente manera (ver medida d) de la sección 2 del anexo I de este informe):

[303] *Implementar un sistema de declaración de ingresos, activos y pasivos, orientado a detectar e identificar variaciones significativas e injustificadas de patrimonio, y a detectar y prevenir conflictos de intereses, señalando expresamente en la normativa que regule esta materia tales objetivos, teniendo en cuenta el artículo 1º de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas”.*

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Considerar la conveniencia de exigir la declaración jurada de bienes, ingresos, activos y pasivos, incluyendo una descripción detallada de los ingresos, activos y pasivos que corresponden al cónyuge, a la sociedad conyugal constituida con el cónyuge o conviviente, y a los dependientes en momentos distintos a los ya previstos, estableciendo plazos razonables para su actualización o las circunstancias ante las que se aconseje exigirla.

¹⁰⁹ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 24

[304] En su respuesta,¹¹⁰ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[305] - “El formulario actual para la declaración jurada de bienes incluye información sobre datos patrimoniales del conyugue. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa es el organismo encargado de tener disponible a terceros la declaración jurada de bienes de los funcionarios obligados.”

[306] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida e) de la recomendación 2.1 de la sección 2 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, circunscribiéndose para esto a lo que se refiere a los momentos para la presentación y actualización de la Declaración, teniendo en cuenta que en lo que se refiere a la inclusión de una descripción detallada de los ingresos, activos y pasivos que correspondan a quienes se mencionan en dicha medida, el Comité, al replantear en el presente informe la medida c) de la citada recomendación, hizo remisión a los artículos 5 y 6 de la “*Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas*”, aprobada por el mismo, los cuales contienen una descripción detallada de los ingresos, activos y pasivos a ser declarados por parte de los sujetos obligados y de su grupo familiar. El Comité, teniendo en cuenta además, que dicha ley modelo, en su artículo 4, contiene también previsiones relativas a los momentos para la presentación y actualización de la Declaración, estima del caso replantear la medida d) de la citada recomendación, de la siguiente manera (ver medida d) de la recomendación 2.1 de la sección 2 del anexo I de este informe):

[307] *Considerar la posibilidad de adecuar el contenido de las previsiones de la Ley No. 82 de 1979, relativas a los momentos para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes, teniendo en cuenta el artículo 4 de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas”.*

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Determinar, dentro de su marco jurídico expresamente la oficina, órgano o entidad que se encargará de la gestión de estas declaraciones, asegurándose que cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para desarrollar las labores relacionadas con la eficiente administración de este sistema.

[308] En su respuesta¹¹¹ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[309] - “La ley 82-79 designa a la Tesorería Nacional como el órgano encargado de recibir los originales de la declaración jurada de bienes, y la Procuraduría General de la República como depositaria de las copias de estas declaraciones para hacerla disponible a terceros. En apoyo a esta

¹¹⁰ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 25

¹¹¹ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, páginas 26 y 27

ley, el Poder Ejecutivo creó el Sistema Automatizado para la Declaración Jurada de Bienes, y a través del Decreto 287-06 delegó en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa la administración de este sistema, a través del cual, los funcionarios obligados tendrán acceso a un formulario virtual que les indicará la información patrimonial que deben incluir en su declaración, imprimirlo, hacerlo legalizar ante notario y finalmente depositarlo en la Tesorería Nacional como ordena la ley 82-79. De esta manera queda registrada copia de esta declaración en el sistema de la PGR para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley.”

[310] En relación con lo anterior, cabe anotar, que además, el Decreto 486-12 le asignó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en su artículo 6, numerales 31 y 32, las funciones de realizar el seguimiento y coordinar el envío a la Tesorería Nacional de la República o a la institución que corresponda, por parte de los funcionarios gubernamentales obligados por ley a presentar Declaración Jurada de Bienes (DJB), a través de sus respectivas instituciones; y exigir la presentación de la Declaración Jurada de Bienes a quienes estén obligados que no respondieran al mandato de la ley, y recomendar las sanciones correspondientes.

[311] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida f) de la recomendación 2.1 de la sección 2 del capítulo IV de este informe.

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Establecer sistemas para hacer efectiva y eficiente la verificación del contenido de la declaración jurada de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, fijando plazos y ocasiones para ello; fortalecer la facultad que tenga la oficina, entidad u órgano encargado de su gestión de programar fiscalizaciones, asegurar que esa fiscalización se aplique a un número representativo de declaraciones; establecer acciones que permitan superar obstáculos para acceder a las fuentes de información que se requieran; y adoptar las decisiones que sean necesarias a fin de que exista una colaboración entre esa entidad y otros sectores tales como el financiero y tributario que facilite el intercambio de información dirigido a verificar el contenido de las mismas.

[312] En su respuesta¹¹² y en la visita *in situ*, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[313] - “La PEPCA ha firmado convenios con varias instituciones como la Cámara de Cuentas, Dirección General de Impuestos Internos y el Catastro Nacional, con la finalidad de establecer protocolos de cooperación con la finalidad de comprobar la veracidad de la declaración jurada de bienes de los funcionarios ante una eventual investigación. También, como complemento a esta verificación, la DIEIG esta trabajando en la implementación de un informe financiero que deberán completar los funcionarios obligados anualmente, como una actualización de su declaración jurada de bienes (Artículos 7 y 8 del Decreto 486-12).”

[314] En la visita *in situ*, se informó, por parte de la DIGEIG, que ya se elaboró un formulario de informe financiero anual, el cual se aportó en versión electrónica¹¹³ y se manifestó además que se están adelantando consultas sobre el levantamiento de la reserva bancaria para los efectos de la

¹¹² Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 28

¹¹³ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_form.pdf

verificación del contenido de dicho informe financiero. Se aportó también la Resolución DIGEIG 2-13 sobre dicho informe financiero.¹¹⁴

[315] En la visita *in situ*, se informó además, por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que actualmente dicha entidad tiene un papel de “banco de datos” en relación con el sistema de Declaración Jurada de Bienes y de seguimiento del contenido de las mismas, y que no tienen actualmente una estructura para ello, pero que con base en los informes financieros anuales se van a poder determinar los incrementos patrimoniales, lo cual puede ser utilizado como medio de prueba en los procesos correspondientes, y que no es obligatorio por ley verificar la veracidad del contenido de las declaraciones.”

[316] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida g) de la recomendación 2.1 de la sección 2 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a que aún se no se ha implementado un sistema que permita verificar el contenido de la Declaración Jurada de Bienes, y efectuar el análisis de dicho contenido, con la finalidad de detectar e identificar variaciones significativas e injustificadas de patrimonio y de detectar y prevenir conflictos de intereses, y en ese sentido, teniendo en cuenta que la “*Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas*”, aprobada por el Comité, contiene en sus capítulos IV y V previsiones relativas a los procedimientos para la verificación de la información suministrada en la Declaración, y para la detección de variaciones de patrimonio y de conflictos de intereses, estima del caso replantear la medida g) de la citada recomendación, de la siguiente manera (ver medida f) de la sección 2 del anexo I de este informe):

[317] *Establecer sistemas para verificar el contenido de la Declaración Jurada de Bienes, y para efectuar el análisis de dicho contenido, con la finalidad de detectar e identificar variaciones significativas e injustificadas de patrimonio y de detectar y prevenir conflictos de intereses, teniendo en cuenta los capítulos IV y V de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas.”*

[318] Por otra parte, cabe anotar, que el “Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)”, que fue invitado a participar en la visita *in situ*, manifestó que la Declaración Jurada de Bienes esta regulada por un ley vieja que requiere reformas, y que no existe garantía de la veracidad del contenido de dicha Declaración porque el notario público ante quien se autentica no puede verificar dicho contenido y por esto el ICPARD considera que la ley debe incluir que dicho contenido sea certificado por un Contador Público.

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Ampliar el régimen vigente de sanciones e infracciones aplicadas a funcionarios públicos infractores, incluyendo los supuestos que den origen a su aplicación, incluyendo hipótesis tales como la presentación tardía u omisión de información; y contemplando sanciones distintas a las ya previstas que aseguren el efectivo cumplimiento de la presentación de las declaraciones, incluyendo penas o sanciones pecuniarias, así como la prohibición de reingreso a la función pública, cuando se trate de ex-funcionarios que luego de cesar en sus funciones no cumplan con las obligaciones que se establezcan al respecto.*

¹¹⁴ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_res2.pdf

[319] En su respuesta,¹¹⁵ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[320] - “La Ley 82-79 que rige el tema de Declaración Jurada de Bienes establece sanciones blandas de tipo administrativo (retención de salario) que en la práctica no han tenido mucho éxito en su implementación. En este sentido se elaboró un proyecto de ley que establece sanciones penales y tipifica el delito de enriquecimiento ilícito, el cual a la fecha no ha sido aprobado por el Congreso Nacional.”

[321] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida g) de la recomendación 2.1 de la sección 2 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a que dicho paso se refiere a un proyecto de ley no aprobado aún por el Congreso para convertirse en norma jurídica que establezca las sanciones aludidas, y teniendo en cuenta además que la “*Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas*”, aprobada por el Comité, contiene en su capítulo VIII previsiones relativas a las sanciones administrativas y penales que acarrea el incumplimiento de las obligaciones atinentes a la Declaración Jurada de Bienes, estima del caso replantear la medida h) de la citada recomendación, de la siguiente manera (ver medida g) de la sección 2 del anexo I de este informe):

[322] *Ampliar el régimen vigente de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones relativas a la Declaración Jurada de Bienes, teniendo en cuenta el capítulo VIII de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas.”*

[323] Por otra parte, cabe anotar, que la organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana”, que fue invitada a participar en la visita *in situ*, manifestó lo siguiente: “se ha observado que por sexta vez se somete al Congreso el anteproyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito, que el Senado ha aprobado en 5 ocasiones, pero que no ha recibido el respaldo correspondiente en la Cámara de Diputados, lo que manifiesta una falta grave de estos legisladores. Este proyecto de ley contiene detalles sobre los bienes inmuebles y demás elementos constitutivos del patrimonio inventariado que deben ser incluidos en la declaración jurada, así como la descripción física de estos, datos que permitan su correcta identificación, ubicación, la fecha de su adquisición, los datos del vendedor y el precio pagado por los mismos. En estos momentos el anteproyecto de ley fue enviado a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.”

Medida i) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales de ingresos, activos y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico.

[324] En su respuesta¹¹⁶ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

¹¹⁵ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, páginas 28 y 29

[325] - “Tanto la Declaración Jurada de Bienes como el informe financiero, son de carácter público, y así lo reconocen tanto la ley 82-79, como los decretos 287-06 y 486-12 que versan sobre la materia. La ley 200-04 de libre acceso a la información pública, en su artículo 3, literal d, establece la declaración jurada de bienes, cuando corresponda, entre la información que debe estar disponible de manera obligatoria por parte de las instituciones sujetas a esta ley general. La página web de la Procuraduría General de la República www.pgr.gob.do, en el enlace “Transparencia” tiene disponible para el público copia de la Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios obligados.”

[326] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida i) de la recomendación 2.1 de la sección 2 del capítulo IV de este informe.

Medida j) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*- Implementar programas de capacitación a servidores públicos sobre normas y previsiones relativas a la aplicación del sistema de declaración de bienes, activos y pasivos, así como diseñar e implantar mecanismos de difusión entre los servidores públicos obligados a su cumplimiento, a fin de asegurar el cabal conocimiento de la normativa vigente.*¹¹⁷

[327] En su respuesta,¹¹⁸ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[328] - “Durante el año 2010 y 2011, el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), a través del programa Observatorio de Leyes, impartió una serie de cursos y talleres informativos para servidores públicos sobre la Declaración Jurada de Bienes y los procedimientos para cumplir con sus disposiciones.”

[329] En relación con lo anterior, cabe anotar, que el Comité no pudo contar con información más detallada sobre los cursos aludidos, debido a que en la visita *in situ* se informó acerca de la disolución del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE).

¹¹⁶ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 30

¹¹⁷ En la Tercera Ronda, con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “*En la República Dominicana existe la Ley 82 de 1979 que obliga a un grupo de funcionarios de alta jerarquía de todos los Poderes del Estado a realizar una declaración jurada de bienes al momento de tomar posesión y a la salida del cargo. Como complemento a esta Ley, el poder ejecutivo emitió el Decreto 287-06 que establece el Sistema Automatizado de Declaración Jurada de Bienes a través del cual los funcionarios pueden hacer su declaración jurada de bienes vía una pagina web (www.declaracionjurada.gov.do) El sistema automatizado para la recepción de Declaración Jurada de Bienes cuenta con un listado de cargos y funciones de los funcionarios obligados por la actual ley 82-79. Entre los bienes a declarar el formulario contiene renglones para efectivo en cuenta bancaria, bienes inmuebles, muebles, vehículos de motor, inmuebles rurales, productos agrícolas, cabezas de ganado, cuentas por cobrar, ingresos y créditos. También obliga al declarante a dar los datos patrimoniales de su conyugue.*” Esta información no se analizó en el informe de la Tercera Ronda, por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis en esa ronda (ver el apartado I de dicho informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tiene en cuenta para el presente informe.

¹¹⁸ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 31

[330] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida j) de la recomendación 2.1 de la sección 2 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a que la capacitación impartida por CONARE, instancia esta que además ya se disolvió, se llevó a cabo en los años 2010 y 2011, y con posterioridad se han adoptado importantes disposiciones en materia de Declaración Jurada de Bienes, como lo son las previstas en el artículo 7 del Decreto 486-12, relativa a la obligación de presentar un informe financiero anual, y en la resolución DIGEIG 2-2013 que regula dicha obligación (ver medida h) de la sección 2 del anexo I de este informe).

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Fortalecer la Contraloría General de la República y la Fiscalía General como órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las cuestiones abordadas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control; dotándolos de los recursos necesarios para el cabal desempeño de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo; y estableciendo mecanismos que permitan la efectiva coordinación institucional de sus acciones, cuando corresponda, y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Designar al Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta la importancia de las prerrogativas e independencia que la Ley No. 19-01 otorga a éste funcionario en la salvaguardia de los derechos de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de la administración pública.

[331] En su respuesta,¹¹⁹ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[332] - “En mayo de este año 2013 el Senado de la República escogió a Zoila Martínez Guante como Defensor del Pueblo, según el procedimiento establecido en la Constitución. A la fecha, la entidad no ha fijado domicilio, estructura orgánica ni reglamento.”

[333] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación 3 de la sección 3 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a lo manifestado por el Estado analizado, transcrito en el párrafo anterior, con respecto a que la Defensoría del Pueblo “no ha fijado domicilio, estructura orgánica ni reglamento”, y en este sentido, el Comité estima del caso replantear dicha medida, de la siguiente manera (ver única medida de la recomendación de la sección 3 del anexo I de este informe):

[334] Adoptar las medidas pertinentes para que la Defensoría del Pueblo pueda contar con la estructura orgánica, la normativa reglamentaria y los recursos necesarios para desarrollar

¹¹⁹ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 32

cabalmente las funciones que la Ley No. 19-01 le otorga, en la salvaguardia de los derechos de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de la administración pública.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Impulsar las medidas que se consideren pertinentes tendientes a fomentar una mayor eficacia en las funciones que desempeña la Fiscalía General relacionadas con la recepción y el seguimiento de las denuncias que afectan el efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención.

[335] En su respuesta,¹²⁰ el Estado analizado manifiesta, en relación con la recomendación anterior, que “no comprendemos la recomendación ya que no existe una Fiscalía General en el Estado Dominicano. Las fiscalías, como instancias del Ministerio Publico, son las encargadas del ejercicio de la acción pública ante los tribunales penales de primera instancia. Entendemos que debe revisarse esta recomendación.”

[336] El Comité, teniendo en cuenta lo manifestado por el Estado analizado, transcrito en el párrafo anterior, y en consideración a que, en efecto, no existe una Fiscalía General en el Estado Dominicano, estima que la medida b) de la recomendación 3 de la sección 3 del capítulo IV de este informe no tiene vigencia.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Promover una mayor independencia en el desempeño de las funciones que desarrollan la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. Considerar, entre otras medidas, aquellas que garanticen un sistema de designación con poca o ninguna ingerencia del Poder Ejecutivo, como garantía de una mayor imparcialidad en el desempeño de las labores de fiscalización y control de los fondos públicos que realizan.

[337] En su respuesta,¹²¹ el Estado analizado manifiesta, en relación con la recomendación anterior, lo siguiente:

[338] “La Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República son órganos de control superior que serán analizados individualmente en este informe. Cabe hacer la salvedad de que al ser la Contraloría General de la República el órgano de control interno del Poder Ejecutivo, por mandato Constitucional, su naturaleza implica que sea designada por el mismo Poder Ejecutivo (El Presidente de la República). En ese mismo sentido, la Constitución establece que los miembros de la Cámara de Cuentas serán escogidos por el Senado de la República, de ternas presentadas por la Cámara de Diputados. Entendemos que debe ser revisada la redacción de esta recomendación por no estar armonizada a los principios Constitucionales dominicanos.”

[339] El Comité, en consideración a lo manifestado por el Estado analizado en el párrafo anterior y teniendo en cuenta además que en la Constitución Política de 2010, que es posterior a la recomendación antes aludida, se concibe a la Contraloría General de la República como el órgano de

¹²⁰ Documento de la respuesta de República al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 33

¹²¹ Documento de la respuesta de República al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 34

control interno del Poder Ejecutivo (artículo 247) y a la Cámara de Cuentas como el órgano superior externo de control fiscal (artículo 248), estima que la medida c) de la recomendación 3 de la sección 3 del capítulo IV de este informe, arriba transcrita, no tiene vigencia, y se acoge al análisis actualizado y detallado que se efectuó en el capítulo II del presente informe con respecto a cada uno de dichos órganos.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Impulsar medidas pertinentes para la creación del Órgano competente para la prevención e investigación de la corrupción.

[340] En su respuesta,¹²² el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[341] - “La investigación de infracciones penales sobre actos de corrupción es competencia de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, creada mediante resolución 03-2013 del Consejo del Ministerio Público (anteriormente esta era la Dirección de Persecución de la Corrupción, creada mediante los decretos 324-07 y 322-97). El órgano competente para manejar el ámbito de prevención de la corrupción y la elaboración de políticas de transparencia y recepción de denuncias es la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que asume las funciones de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.”

[342] En relación con lo anterior, el Comité observa que en efecto, el Decreto 486-12 que crea la DIGEIG, en sus artículo 6, numerales 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 18, entre otros, le asignan al mismo competencias en materia de prevención de la corrupción, tal como ha quedado reseñado en la sección 1 del capítulo II del presente informe

[343] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida d) de la recomendación 3 de la sección 3 del capítulo IV de este informe.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)

4.1. Mecanismos de participación en general

[344] El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

4.2. Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación 4.2.1:

Considerar la posibilidad de avanzar en la implementación de la Ley General de Libre Acceso a Información Pública.

¹²² Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 35

Única medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- *Asignar fondos públicos que garanticen adecuadamente la aplicación de la Ley No. 200-04 y que permitan, entre otros aspectos: i) crear las instancias previstas en la misma, asegurándoles los recursos humanos, técnicos y financieros, necesarios para su adecuado funcionamiento; ii) divulgar los sistemas y los servicios que se ofrecen, a través de la creación y utilización de la una organización interna hasta ahora no prevista; iii) cumplir con la obligación que tienen todos los organismos públicos centralizados y descentralizados del Estados de instrumentar la publicación de sus páginas Web a fin de difundir de una manera amplia el quehacer de la Administración; y iv) crear y poner en operación los centros de intercambio de información y atención al cliente o usuario previstos en esta normativa.*

[345] En su respuesta¹²³ y en la visita *in situ*, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[346] - “El Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, le otorga atribuciones de órgano rector de aplicación de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y su reglamento. En este sentido la institución cuenta con un Departamento de Acceso a la Información que se encarga de dar seguimiento a la apertura de nuevas Oficinas de Acceso a la Información, capacitación a los Responsable de Acceso a la Información, así como manejar las estadísticas sobre este tema. A través de la Resolución 1/2013, la DIGEIG estableció el tipo de información estandarizada que deben publicar las instituciones del gobierno central en sus portales web.”

[347] - “A la fecha se han abierto 136 oficinas de acceso a la información en todo el territorio nacional. La DIGEIG, además, orienta y capacita a los Responsables de Acceso a la Información (RAI) de las diferentes instituciones, así como consultas sobre requerimientos de información que reciben las instituciones públicas sujetas a la ley 200-04.”

[348] En la visita *in situ*, se suministró por parte del la DIGEIG información más reciente sobre lo anterior, indicando que actualmente se han abierto 195 Oficinas de Acceso a la Información Pública y que se debe llegar a 209. Se mencionó también que se tiene previsto para el 2014 concentrar a través de un solo canal el seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública para poder controlar por medio de un sistema el cumplimiento de los plazos previstos en las normas, y se aportó la Resolución DIGEIG 2-12,¹²⁴ que instruye a las instituciones públicas del gobierno central y descentralizado a constituir dichas Oficinas de conformidad con la estructura organizativa homogénea para todo el Sector Público delineada por el Ministerio de Administración Pública, al igual que de la Resolución DIGEIG 1-13,¹²⁵ relativa a la estandarización de la información mínima que debe ser provista por la administración, centralizada y descentralizada, en la prestación de un servicio permanente y actualizado de acceso a la información, de conformidad con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 200-04 y el 21 de su reglamento de aplicación (Decreto 130-05), y se informó al

¹²³ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, páginas 36 y 37

¹²⁴ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_res22012.pdf

¹²⁵ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_reptom_res1.pdf

respecto que de 183 instituciones, 85 han estandarizado la información de sus portales “Web”, de acuerdo con lo establecido en dicha resolución.

[349] El Comité, observa además, que el artículo 6 del Decreto 486-12, contempla entre las funciones de la DIGEIG, las siguientes que se relacionan con su condición de órgano rector en materia de acceso a la información pública que le atribuye el artículo 5 del citado Decreto: llevar un registro de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI) y desarrollar un plan de asesoría para la implementación de las que aún no están creadas o en funcionamiento (ordinal 14); vigilar que los funcionarios ofrezcan la información requerida por los (as) ciudadanos (as) en los plazos establecidos (ordinal 33); asegurar que las instituciones visibilicen la información de libre acceso basado en la cultura de la transparencia y en lo establecido en las leyes (ordinal 34); conocer los recursos jerárquicos que se interpongan ante la negativa de las instituciones a presentar las solicitudes de información solicitadas y evitar, cuando sea posible, recurrir a la vía judicial, que conlleva la inversión de recursos, tiempo y conocimiento técnico especializado (ordinal 35); coordinar la implementación y desarrollo de los temas vinculados al acceso a la información, así como la supervisión y control de las entidades sujetas a ofrecer este servicio (ordinal 40); y contribuir a garantizar la estandarización de las informaciones en los portales electrónicos de las instituciones gubernamentales en los tiempos previstos (ordinal 41).

[350] En relación con los numerales *i.* y *ii.* de la única medida de la recomendación 4.2.1 de la sección 4.2 del capítulo IV de este informe, el Comité estima del caso tener presente que en la sección 1 del capítulo II del presente informe, se hizo un análisis integral de la DIGEIG, que incluyó los aspectos previstos en tales numerales, y por lo tanto se acoge a lo indicado en dicho capítulo en relación con dichos aspectos.

[351] En relación con los numerales *iii.* y *iv.* de la única medida de la recomendación 4.2.1 de la sección 4.2 del capítulo IV de este informe, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en su implementación, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a aún no todos los organismos públicos centralizados y descentralizados del Estado obligados a abrir Oficinas de Acceso a la Información Pública y a estandarizar la información de sus portales “Web” lo han hecho, y en ese sentido, el Comité estima del caso replantear dicha medida, de la siguiente manera (ver única medida de la recomendación 4.2.1 de la sección 4.2 del anexo I de este informe):

[352] *Asegurar que los organismos públicos obligados a abrir Oficinas de Acceso a la Información Pública y a estandarizar la información de sus portales “Web” lo hagan, en cumplimiento de las obligaciones previstas al respecto en la normativa que regula el libre acceso a la información pública.*

[353] Por otra parte, cabe anotar, que la organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana”, que fue invitada a participar en la visita *in situ*, manifestó lo siguiente: “aunque se reconoce la importancia de la adopción de la Ley General de Acceso a la Información Pública y su reglamento de aplicación, lo que ha permitido iniciar un proceso de constitución de las estructuras formales que garanticen el acceso a la información. Este proceso ha servido como una herramienta que puede impulsar un mayor nivel de participación de la ciudadanía en el monitoreo de la gestión pública, sin embargo, los informes del nivel de cumplimiento elaborados por Participación Ciudadana registran todavía un bajo nivel de implementación de parte de los sujetos obligados.”

Recomendación 4.2.2:

*Considerar el diseño de un mecanismo que permita hacer un seguimiento de los resultados objetivos que traigan consigo la aplicación de la Ley No. 200-04 y su reglamento y que garantice su difusión.*¹²⁶

[354] En su respuesta¹²⁷ y en la visita *in situ*, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[355] - “La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental recoge información estadística sobre los avances en la implementación de la ley 200-04.”

[356] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación anotada, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a que si bien, tanto en la respuesta del Estado analizado al cuestionario, como en la visita *in situ*, se suministró información por parte de la DIGEIG, relativa al cumplimiento por parte de los organismos públicos de las obligaciones previstas en la normativa que regula el libre acceso a la información pública, en lo referente a la apertura de Oficinas de Acceso a la Información Pública y a la estandarización de la información de sus portales “Web”, aún no se cuenta con un mecanismo que permita hacer un seguimiento de los resultados objetivos de otras importantes materias contempladas en dicha normativa, tales como los que se deriven de la tramitación, de acuerdo con el Decreto 486-12, artículo 6, numeral 35, de los recursos jerárquicos que se interpongan ante la negativa de las instituciones a presentar la información que se les solicite (ver recomendación 4.2.2 de la sección 4.2 del anexo I de este informe)

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendación:

*Complementar los mecanismos de consulta vigentes, estableciendo, cuando corresponda, procedimientos que otorguen mayores oportunidades de realizar consultas a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales.*¹²⁸

¹²⁶ En la Tercera Ronda, con respecto a esta recomendación, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “A la fecha el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) ha instalado 110 oficinas de Acceso a la Información (OAI) en diferentes instituciones de la administración pública. Si bien aun no se ha creado el organismo regulador en materia de Acceso a la Información en la República Dominicana, el ejercicio de este derecho ciudadano se ejerce sin ningún tipo de trabas. La nueva Constitución Política de la República Dominicana no contempla restricciones al libre acceso a la información.” Esta información no se analizó en el informe de la Tercera Ronda, por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis en esa ronda (ver el apartado I de dicho informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tiene en cuenta para el presente informe.

¹²⁷ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 38

¹²⁸ En la Tercera Ronda, con respecto a esta recomendación, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó lo anotado en la página 39 de su documento de respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda, relativo al seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, información ésta que no se analizó en el informe de la Tercera Ronda, por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis en esa ronda (ver el apartado I

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Promover espacios, en el marco del Congreso Nacional, que brinden a la sociedad civil mayores oportunidades de expresar su opinión durante el proceso de discusión y aprobación normativa; contemplando la obligatoriedad de brindarlos cuando se discutan materias cuya importancia o sensibilidad aconseje esa participación.

[357] En su respuesta¹²⁹ y en la visita *in situ*, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[358] “La Constitución Política de la República aprobada en el 2010 introduce nuevas formas de participación ciudadana como la iniciativa legislativa popular, el referendo aprobatorio y el plebiscito. El artículo 22, cuando se refiere a los Derechos de Ciudadanía, establece en su numeral 2 “Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”, y el numeral 3 “Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. El artículo 97 establece la Iniciativa legislativa popular “mediante la cual un número de ciudadanos y no menor del (SIC) hace falta que se apruebe una ley especial que establezca el procedimiento y restricciones para el ejercicio de esta iniciativa. El artículo 203 establece los mecanismos directos de participación local y ordena a una futura ley Orgánica de Participación Local a establecer los ámbitos y requisitos para ejercer la iniciativa normativa, el referendo y el plebiscito a nivel local y municipal. El artículo 210 establece que las consultas populares mediante referendo estarán sujetas a dos condiciones: 1. No podrá tratarse sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada. 2. Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara. Y en cuanto a la reforma constitucional, el artículo 272 establece que “cuando la reforma verse sobre derechos garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo aprobatorio.”

[359] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación anotada, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a que si bien, en la Constitución Política de la República aprobada en el año 2010 se introducen nuevas formas de participación ciudadana como la iniciativa legislativa popular, el referendo aprobatorio y el plebiscito, aún hace falta que se adopte la normativa legal para su desarrollo, a la que se refiere el Estado analizado en el acápite de su respuesta transcrito en el párrafo anterior. Cabe anotar al respecto, que en la visita *in situ* se informó por parte de la DIGEIG, de la cesación de la tramitación en el Poder Legislativo de un proyecto de ley sobre las materias aludidas en dicho párrafo, que tendría que ser introducido nuevamente para su consideración (ver medida a) de la sección 4.3 del anexo I de este informe)

de dicho informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero que se tiene en cuenta para el presente informe.

¹²⁹ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 39

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Promover, fomentar y generalizar la experiencia de algunos gobiernos locales que han promovido e institucionalizado espacios de participación de la sociedad civil en el combate la corrupción.

[360] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la medida b) de la recomendación de la sección 4.3 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver medida b) de la sección 4.3 del anexo I de este informe).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Considerar la aplicación de instrumentos de consulta a nivel nacional, similares a los contemplados en el Régimen Municipal con facultades para conocer y proponer determinadas políticas públicas, incluyendo, la posibilidad de que éstos puedan ser convocados, tanto a nivel local como nacional, por iniciativa popular, en las materias que República Dominicana considere puedan ser útiles.

[361] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la medida c) de la recomendación de la sección 4.3 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver medida c) de la sección 4.3 del anexo I de este informe).

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de consulta en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los funcionarios públicos para utilizar tales mecanismos.

[362] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la medida d) de la recomendación de la sección 4.3 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver medida d) de la sección 4.3 del anexo I de este informe).

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Avanzar en la implementación y en el perfeccionamiento de los espacios de participación ya existentes, asegurando que los mismos operen de manera efectiva, garanticen la participación activa de la sociedad civil en la gestión pública en los esfuerzos dirigidos a prevenir la corrupción, y definan expresamente el valor que se dará a las mismas.

[363] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la medida e) de la recomendación de la sección 4.3 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver medida e) de la sección 4.3 del anexo I de este informe).

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Establecer mecanismos, adicionales a los ya vigentes, que fortalezcan la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión pública, especialmente en los esfuerzos para prevenir la corrupción y lograr avances en su institucionalización y regulación, en forma integral y con carácter permanente.

[364] En su respuesta¹³⁰ y en la visita *in situ*, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[365] - “En Junio de 2010 se creó la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción como a instancia de la Presidencia de de la República para contrarrestar la percepción de falta de transparencia ligada a corrupción dentro de la administración pública. - La iniciativa prevé; (a) recopilar información disponible sobre experiencias exitosas de promoción de transparencia; (b) identificar carencias de información en el tema y cómo suplirlas; (c) compilar y analizar la información, y (d) recomendar acciones concretas a la Presidencia de la República. - IPAC fue conformada por un Comité de Organización, compuesto por dos representantes de cada sector (gobierno nacional, sociedad civil y empresa privada) designados por la Presidencia. Este comité contará con un equipo de apoyo de agencias internacionales (coordinado por Banco Mundial y USAID) así como con un equipo de consultores. Sus principales integrantes son: A) Ministerio de la Presidencia; B) Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; C) USAID; D) AECID; E) Banco Mundial; F) FINJUS; G) Participación Ciudadana; Se organizaron 10 mesas de trabajo en el siguiente orden: A) Contrataciones; B) Servicio Civil; C) Gestión Financiera; D) Acceso a la Información; E) Infraestructura; F) Salud; G) Educación; H) Energía; I) Agua; J) Organismos de Control; Para más información visitar la página Web <http://www.ipacrd.org> . Actualmente se está elaborando un proyecto de ley para que la IPAC funcione como un mecanismo permanente.”

[366] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 4.4 del capítulo IV de este informe, al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a que si bien, en junio de 2010 se creó la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC), como a instancia de la Presidencia de de la República para contrarrestar la percepción de falta de transparencia ligada a corrupción dentro de la administración pública, aún hace falta que se adopte la normativa legal para que funcione como un mecanismo permanente, a la que se refiere el Estado analizado en el acápite de su respuesta transcrito en el párrafo anterior. Cabe anotar al respecto que en la visita *in situ* se puso de presente, por parte del Director de la DIGEIG, la importancia de dicho mecanismo, que involucra actores de la sociedad civil (ver medida a) de la sección 4.4 del anexo I de este informe)

¹³⁰ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, páginas 44 y 45

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Determinar que el resultado que se derive del ejercicio de esos mecanismos, sea considerado en el proceso de toma de decisiones.

[367] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la medida b) de la recomendación de la sección 4.4 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver medida b) de la sección 4.4 del anexo I de este informe).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos y estimular la participación en la gestión pública como instrumentos en la lucha contra la corrupción y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.

[368] En su respuesta,¹³¹ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[369] - “La DIGEIG, a través de su departamento de Transparencia, se encarga de la continuación del las actividades del IPAC y las iniciativas de Gobierno Abierto.”

[370] El Comité toma nota del pasos dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 4.4 del capítulo IV de este informe, concernientes al igual que de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, en consideración a que no se suministró información sobre los programas de difusión y capacitación a los que alude la misma (ver medida c) de la sección 4.4 del anexo I de este informe).

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Promover, cuando sea apropiado, formas adicionales de participación que permitan, faciliten y asistan a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de actividades para el seguimiento de la gestión pública y alcanzar avances en su institucionalización y regulación, asegurando el carácter permanente de algunas de estas instancias.

¹³¹ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 47

[371] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la medida a) de la recomendación de la sección 4.5 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver medida a) de la sección 4.5 del anexo I de este informe).

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- Considerar la implementación de programas de difusión y capacitación dirigidos a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales. Asimismo, el Comité considera que la República Dominicana podría beneficiarse a través de la presentación de informes periódicos que presente el gobierno para crear conciencia sobre su labor.

[372] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la medida b) de la recomendación de la sección 4.5 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver medida b) de la sección 4.5 del anexo I de este informe).

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 5.1.

Contemplar la posibilidad de profundizar y ampliar aún más las relaciones, obligaciones y acciones derivadas de los compromisos internacionales suscritos en las materias que analiza el Comité y que son objeto de esta primera ronda de análisis, a fin de impulsar una mayor asistencia mutua para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción.

[373] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la recomendación 5.1 de la sección 5 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver recomendación 5.1 de la sección 5 del anexo I de este informe).

Recomendación 5.2.

Continuar determinando aquellas áreas específicas en las cuales República Dominicana considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Así también, la República Dominicana podrá continuar determinando y priorizando las solicitudes de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción.

[374] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la recomendación 5.2 de la sección 5 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver recomendación 5.2 de la sección 5 del anexo I de este informe).

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Asegurar que el DPCA como autoridad central designada por el Estado analizado para los propósitos de la CICC cuente con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

[375] En su respuesta,¹³² el Estado analizado manifiesta en relación con la recomendación anotada lo siguiente: “El Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en su artículo 6, numerales 12, 13 y 17, ordena a la institución dar seguimiento y representar al Estado ante los Organismos Internacionales y sus diferentes mecanismos de evaluación a la implementación de las convenciones y demás compromisos internacionales en materia de corrupción y transparencia.”

[376] El Comité, teniendo en cuenta lo manifestado por el Estado analizado en el acápite de su respuesta al cuestionario transcrito en el párrafo anterior, y que además, en relación con la PEPCA (antigua DPCA) y con la DIGEIG, ya hizo un análisis integral en el capítulo II del presente informe, al cual se acoge, estima del caso replantear la recomendación de la sección 6 del capítulo IV de este informe, de la siguiente manera (ver recomendación de la sección 6 del anexo I de este informe):

[377] *Precisar si la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) es la autoridad central para los efectos de la asistencia y cooperación internacional previstos en la Convención, y en ese caso, informar a la Secretaría General de la OEA acerca de su designación como tal, de acuerdo con las formalidades previstas para ello.*

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 7.1.

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de asegurar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

[378] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la recomendación 7.1 de la sección 7 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver recomendación 7.1 de la sección 7 del anexo I de este informe).

Recomendación 7.2.

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.

¹³² Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 51

[379] En su respuesta,¹³³ el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, el siguiente:

[380] – “La DIGEIG, a través de su Departamento de Transparencia, ha elaborado una matriz de monitoreo a los compromisos y recomendaciones que emanadas del MESICIC. Trimestralmente se actualiza la matriz y se comunica a las instancias responsables del cumplimiento de las recomendaciones sobre ese compromiso.”

[381] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 7.2 de la sección 7 del capítulo IV de este informe y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que aún no se han seleccionado y desarrollado los procedimientos e indicadores a los que se alude en dicha recomendación (ver recomendación 7.2 de la sección 7 del anexo I de este informe).

Recomendación 7.3.

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

[382] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información en relación con la recomendación 7.3 de la sección 7 del capítulo IV de este informe. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que éste dé atención adicional a la misma (ver recomendación 7.3 de la sección 7 del anexo I de este informe).

ANEXO I

RECOMENDACIONES VIGENTES Y REPLANTEADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCION)

¹³³ Documento de la respuesta de República Dominicana al cuestionario, relativo a seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda, página 53

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación:

Considerar fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.

Medidas sugeridas:

- a. Considerar la ampliación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los servidores públicos de todas las ramas del poder público, incluyendo miembros del poder legislativo, del poder judicial, el poder ejecutivo y de los miembros de los órganos superiores de control.
- b. Considerar la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico una normativa que limite la participación de ex servidores públicos, incluyendo los de alto rango, y en general en situaciones que conlleven el aprovechamiento indebido de la condición de ex servidor público, en un plazo determinado, y sin afectar de manera absoluta su derecho constitucional al trabajo.
- c. Reunir información respecto a los casos de conflictos de intereses, tendiente a establecer mecanismos de evaluación que permitan verificar los resultados sobre el tema.

1.2. Normas de conducta y mecanismos para la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación 1.2.1:

Fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General de Bienes Nacionales a fin de que pueda desarrollar cabalmente las responsabilidades que la ley le otorga relacionadas con la creación y mantenimiento de un inventario de los bienes muebles e inmuebles del Estado. Impulsando medidas que, entre otros aspectos, eviten que el desarrollo de estas funciones dependa de la discrecionalidad del Director de esta Dirección o de cualquier otro funcionario.

Recomendación 1.2.2:

Continuar y perfeccionar la labor que realiza la Dirección General de Contabilidad en la organización de la contabilidad de Estado, asegurando que ésta cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para desempeñar sus labores.

Recomendación 1.2.3:

Continuar efectuando gestiones a fin de recuperar, preservar y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, tales como las que impulsa el Instituto Agrario Dominicano, la Secretaría de Estado de Educación, y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre.

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCION)

Recomendación:

Considerar mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos.

Medidas sugeridas:

- a. Considerar la posibilidad de complementar la Ley No. 82 de 1979, en lo atinente al universo de funcionarios obligados a presentar Declaración Jurada de Bienes, previendo que la autoridad competente podrá establecer criterios generales de aplicación para determinar el alcance de las categorías establecidas en la misma, como lo propone el artículo 3 de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas.”
- b. Perfeccionar los esfuerzos dirigidos a implementar un registro que contenga los datos de los funcionarios públicos obligados a presentar las declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos, previendo mecanismos para su actualización periódica, de manera tal que se facilite la administración y gestión de estas declaraciones.
- c. Complementar las normas sobre el contenido de las declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos de los servidores públicos, de tal manera que se incluya una descripción de la naturaleza o características de los bienes que el funcionario debe individualizar, teniendo en cuenta los artículos 5 y 6 de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas”, así como los criterios que deben emplearse para su valoración económica.
- d. Implementar un sistema de declaración de ingresos, activos y pasivos, orientado a detectar e identificar variaciones significativas e injustificadas de patrimonio, y a detectar y prevenir conflictos de intereses, señalando expresamente en la normativa que regule esta materia tales objetivos, teniendo en cuenta el artículo 1º de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas.”
- e. Considerar la posibilidad de adecuar el contenido de las previsiones de la Ley No. 82 de 1979, relativas a los momentos para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes, teniendo en cuenta el artículo 4 de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas.”
- f. Establecer sistemas para verificar el contenido de la Declaración Jurada de Bienes, y para efectuar el análisis de dicho contenido, con la finalidad de detectar e identificar variaciones significativas e injustificadas de patrimonio y de detectar y prevenir conflictos de intereses, teniendo en cuenta los capítulos IV y V de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas.”
- g. Ampliar el régimen vigente de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones relativas a la Declaración Jurada de Bienes, teniendo en cuenta el capítulo VIII de la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas.”

- h. Implementar programas de capacitación a servidores públicos sobre normas y previsiones relativas a la aplicación del sistema de declaración de bienes, activos y pasivos, así como diseñar e implantar mecanismos de difusión entre los servidores públicos obligados a su cumplimiento, a fin de asegurar el cabal conocimiento de la normativa vigente.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Adoptar las medidas pertinentes para que la Defensoría del Pueblo pueda contar con la estructura orgánica, la normativa reglamentaria y los recursos necesarios para desarrollar cabalmente las funciones que la Ley No. 19-01 le otorga, en la salvaguardia de los derechos de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de la administración pública.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)

4.1. Mecanismos de participación en general

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

4.2. Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación 4.2.1:

Considerar la posibilidad de avanzar en la implementación de la Ley General de Libre Acceso a Información Pública.

Medida sugerida:

- Asegurar que los organismos públicos obligados a abrir Oficinas de Acceso a la Información Pública y a estandarizar la información de sus portales “Web” lo hagan, en cumplimiento de las obligaciones previstas al respecto en la normativa que regula el libre acceso a la información pública.

Recomendación 4.2.2:

Considerar el diseño de un mecanismo que permita hacer un seguimiento de los resultados objetivos que traigan consigo la aplicación de la Ley No. 200-04 y su reglamento y que garantice su difusión

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendación:

Complementar los mecanismos de consulta vigentes, estableciendo, cuando corresponda, procedimientos que otorguen mayores oportunidades de realizar consultas a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales.

Medidas sugeridas:

- a. Promover espacios, en el marco del Congreso Nacional, que brinden a la sociedad civil mayores oportunidades de expresar su opinión durante el proceso de discusión y aprobación normativa; contemplando la obligatoriedad de brindarlos cuando se discutan materias cuya importancia o sensibilidad aconseje esa participación.
- b. Promover, fomentar y generalizar la experiencia de algunos gobiernos locales que han promovido e institucionalizado espacios de participación de la sociedad civil en el combate la corrupción.
- c. Considerar la aplicación de instrumentos de consulta a nivel nacional, similares a los contemplados en el Régimen Municipal con facultades para conocer y proponer determinadas políticas públicas, incluyendo, la posibilidad de que éstos puedan ser convocados, tanto a nivel local como nacional, por iniciativa popular, en las materias que República Dominicana considere puedan ser útiles.
- d. Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de consulta en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los funcionarios públicos para utilizar tales mecanismos.
- e. Avanzar en la implementación y en el perfeccionamiento de los espacios de participación ya existentes, asegurando que los mismos operen de manera efectiva, garanticen la participación activa de la sociedad civil en la gestión pública en los esfuerzos dirigidos a prevenir la corrupción, y definan expresamente el valor que se dará a las mismas.

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.

Medidas sugeridas:

- a. Establecer mecanismos, adicionales a los ya vigentes, que fortalezcan la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión pública, especialmente en los esfuerzos para prevenir la corrupción y lograr avances en su institucionalización y regulación, en forma integral y con carácter permanente.
- b. Determinar que el resultado que se derive del ejercicio de esos mecanismos, sea considerado en el proceso de toma de decisiones.
- c. Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos y estimular la participación en la gestión pública como instrumentos en la lucha contra la corrupción y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.

Medidas sugeridas:

- a. Promover, cuando sea apropiado, formas adicionales de participación que permitan, faciliten y asistan a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de actividades para el seguimiento de la gestión pública y alcanzar avances en su institucionalización y regulación, asegurando el carácter permanente de algunas de estas instancias.
- b. Considerar la implementación de programas de difusión y capacitación dirigidos a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales. Asimismo, el Comité considera que la República Dominicana podría beneficiarse a través de la presentación de informes periódicos que presente el gobierno para crear conciencia sobre su labor.

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 5.1.

Contemplar la posibilidad de profundizar y ampliar aún más las relaciones, obligaciones y acciones derivadas de los compromisos internacionales suscritos en las materias que analiza el Comité y que son objeto de esta primera ronda de análisis, a fin de impulsar una mayor asistencia mutua para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción.

Recomendación 5.2.

Continuar determinando aquellas áreas específicas en las cuales República Dominicana considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Así también, la República Dominicana podrá continuar determinando y priorizando las solicitudes de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación

Precisar si la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) es la autoridad central para los efectos de la asistencia y cooperación internacional previstos en la Convención, y en ese caso, informar a la Secretaría General de la OEA acerca de su designación como tal, de acuerdo con las formalidades previstas para ello.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 7.1.

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de asegurar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

Recomendación 7.2.

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.

Recomendación 7.3.

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

ANEXO II

**AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* A
REPÚBLICA DOMINICANA***

Lunes 7 de octubre de 2013

* La presente agenda ha sido acordada de conformidad con las disposiciones 13 y 14 de la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ (documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2), disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf

17:00 hrs.- 17:30hrs. <u>Lugar:</u> Hotel Plaza Naco	Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
17:30hrs.- 18:hrs. <u>Lugar:</u> Hotel Plaza Naco	Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica

Martes 8 de octubre de 2013

8:30 hrs.- 10:30 hrs. <u>Lugar:</u> Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)	Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. ¹³⁴
	<p><u>Tema: órganos de control superior:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Los órganos de control superior desde la perspectiva de la sociedad civil
	<p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)</i> Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, <i>Vicepresidente Ejecutivo</i></p> <p><i>Participación Ciudadana</i> Dr. Roberto Álvarez, <i>Coordinador General</i></p> <p><i>Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)</i> Lic. Pedro Matos Vizcaino, <i>Presidente del ICPARD</i></p>
10:30 hrs. – 12:00 hrs. <u>Lugar:</u> DIGEIG	Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (continuación)
	<u>Tema: seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda:</u>

¹³⁴. Se sugiere invitar a participar a las organizaciones y personas que se relacionan, en virtud de lo previsto en la disposición 27 de la Metodología para la Realización de las Visitas *in Situ*, que permite invitar a participar en estas reuniones a organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores”.

	<ul style="list-style-type: none"> • La contabilidad del Estado y la preservación de recursos públicos • Declaraciones juradas • Mecanismos de Participación de la sociedad civil <p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)</i> Lic. Pedro Matos Vizcaino, <i>Presidente del ICPARD</i></p> <p><i>Participación Ciudadana</i> Dr. Roberto Álvarez, <i>Coordinador General</i></p>
12:00 hrs. – 13:30hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 17:30 hrs. Lugar: DIGEIG	Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD)
14:00 hrs. – 17:30 hrs.	<p>Panel 1: La Cámara de Cuentas de la República Dominicana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura • Coordinación de competencias con otros órganos • Régimen de Personal • Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades para el cumplimiento de sus funciones • Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional 2010 – 2016 • Fortalecimiento institucional <p><u>Participantes:</u></p> <p>Dra. Belkys Pérez Diplán, <i>Consultor Jurídico de la CCRD</i></p>
18:00 hrs. <u>Lugar:</u> <i>Hotel Plaza Naco</i>	Reunión informal ¹³⁵ entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

Miércoles 9 de octubre de 2013

¹³⁵. El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas...”

9:00hrs. – 13:00hrs. Lugar: DIGEIG	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
9:00 hrs. – 11:30 hrs.	<p>Panel 2: La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, estructura y funciones • Desarrollo de sus competencias y coordinación con otros órganos • Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades para el cumplimiento de sus funciones • Buena Práctica <p><u>Participantes:</u></p> <p>Dr. Marino Vinicio Castillo Rodríguez, <i>Director General</i> Dr. Miguel Suazo, <i>Director Ejecutivo</i> Lic. Julio Simón Castaños Zouain, <i>Encargado División Jurídica</i> Lic. Beantuk Satil, <i>Encargada Departamento de Recursos Humanos</i> Lic. Mayra Domínguez, <i>Encargada Departamento de Planificación</i> Lic. Luis A.Santiago, <i>Asesor de Informática</i> Lic. Berenice Barinas, <i>Encargada Departamento de Transparencia</i> Lic. Rafael Basona, <i>Encargado Departamento de Ética e Integridad</i></p>
11:30hrs. – 13:00hrs.	<p><u>Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda:</u></p> <p><u>Lugar: DIGEIG</u></p> <p>Panel 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevención de conflictos de intereses <p><u>Participantes:</u></p> <p>Lic. Julio Simón Castaños Zouain, <i>Encargado División Jurídica</i> Lic. Rafael Basona, <i>Encargado Departamento de Ética e Integridad</i></p> <p>Panel 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preservación de recursos públicos <p><u>Participantes:</u></p> <p>Lic. Daniel Omar Caamaño, <i>Director General de Contabilidad</i> Lic. Julio Simón Castaños Zouain, <i>Encargado División Jurídica</i></p> <p>Panel 5:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración Jurada de Bienes <p><u>Participantes:</u> Lic. Julio Simón Castaños Zouain, <i>Encargado División Jurídica</i></p> <p>Panel 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de participación de la sociedad civil <p><u>Participantes:</u> Lic. Julio Simón Castaños Zouain, <i>Encargado División Jurídica</i></p>
13:00hrs. – 14:30 hrs.	Almuerzo
14:30 hrs. – 18:00 hrs. Lugar: DIGEIG	Contraloría General de la República (CGR)
14:30hrs. – 17:00 hrs.	<p>Panel 7: La Contraloría General de la República Dominicana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito y funciones • Coordinación de competencias con otros órganos • Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades para el cumplimiento de sus funciones • Plan Estratégico Institucional • Plan de acción relativo a la “Implementación de un Sistema de Contraloría Social” • Fortalecimiento institucional <p><u>Participantes:</u> Lic. Dhimas Paredes, <i>Director Unidad de Auditoría Interna Gubernamental</i> Lic. Alejandra Mora, <i>Directora de Desarrollo Normativo</i> Lic. Julio Valdez, <i>Director Auditorías Especiales</i> Lic. Carlos del Pozo, <i>Director de Comunicaciones</i> Lic. Arianna Labrada, <i>Responsable de Acceso a la Información</i> Lic. Fredy Montás, <i>Director Tecnología de la Información</i> Lic. Juana Vélez, <i>Consultora Jurídica</i></p>
18:30 hrs. <i>Lugar: Hotel Plaza</i>	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del subgrupo de análisis y la Secretaría Técnica

Naco	
------	--

Jueves 10 de octubre de 2013

8:30 hrs. – 12:00 hrs. <u>Lugar:</u> Suprema Corte de Justicia	Suprema Corte de Justicia / Poder Judicial (SCJ/PJ)
8:30 hrs. – 12:00hrs.	<p>Panel 8: La Suprema Corte de Justicia/Poder Judicial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura relacionadas con la investigación y sanción penal de actos de corrupción • Desarrollo de sus competencias y coordinación con otros órganos • Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades para el cumplimiento de sus funciones • Plan Estratégico 2009 - 2013 • Fortalecimiento institucional <p><u>Participantes:</u></p> <p>Lic. Dalsia Herrera, <i>Directora de Gestión de Capital Humano</i></p> <p>Lic. Carlos Iglesias, <i>Director General de Carrera Judicial</i></p> <p>Lic. Gloria Cuello, <i>Directora de la Dirección General Técnica</i></p> <p>Dra. Gervasia Valenzuela, <i>Directora de la Escuela Nacional de la Judicatura</i></p> <p>Lic. Jacinto Castillo, <i>Subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura</i></p>
12:00hrs. – 13:30 hrs.	Almuerzo
14:00hrs.-17:30hrs. <u>Lugar:</u> PEPCA	Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)

<p>14:00 hrs. – 16:30hrs.</p>	<p>Panel 9: La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura• Desarrollo de sus competencias y coordinación con otros órganos• Régimen de personal• Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades• Dificultades para el cumplimiento de sus funciones• Fortalecimiento institucional <p><u>Participantes:</u></p> <p>Dra. Laura Guerrero, <i>Procuradora</i> Lic. Narciso Escaño, <i>Procurador Fiscal</i> Lic. Bertha Cabrera, <i>Procuradora de Corte</i> Lic. Gedeón Bautista, <i>Procurador de Corte</i> Lic. Elvia Bautista, <i>Procuradora Fiscal</i> Lic. Ramona Nova, <i>Procuradora de Corte</i> Lic. Ysidro Fabian, <i>Procurador de Corte</i> Lic. Julián Rojas, <i>Auditor Judicial</i> Lic. Skinner Ozuna, <i>Abogado</i> Lic. Chanel Ferreira, <i>Paralegal</i></p>
<p>16:30 hrs. – 17:30hrs.</p>	<p><u>Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda:</u></p> <p><u>Lugar: PEPCA</u></p> <p>Panel 10:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preservación de recursos públicos <p><u>Participantes:</u></p> <p>Dra. Laura Guerrero, <i>Procuradora</i> Lic. Narciso Escaño, <i>Procurador Fiscal</i></p> <p>Panel 11:</p> <ul style="list-style-type: none">• Declaración Jurada de Bienes <p><u>Participantes:</u></p> <p>Dra. Laura Guerrero, <i>Procuradora</i> Lic. Narciso Escaño, <i>Procurador Fiscal</i></p>

18:00 hrs. - 18.30hrs. <i>Lugar: Hotel Plaza Naco</i>	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
18:30 hrs. - 19:00 hrs. <i>Lugar: Hotel Plaza Naco</i>	Reunión final ¹³⁶ con los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA LA COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA

ESTADO ANALIZADO:

REPÚBLICA DOMINICANA

Julio Simón Castaños Z.

Experto Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC
Encargado de la División Jurídica de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
DIGEIG

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:

URUGUAY

José Pedro Montero Traibel

Experto Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC
Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública

HONDURAS

Rigoberto Córdova Laitano

Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC
Asistente de Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC

Enrique Martínez Ramón

Oficial Jurídico Principal del Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA

¹³⁶. El tercer párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al final de la visita in situ se realizará una reunión en que participarán los Expertos del Subgrupo, la Secretaría Técnica y el Experto Titular del Estado analizado y/o el funcionario que éste haya designado para apoyarlo de acuerdo con lo previsto en la disposición 10, segundo párrafo, de la presente Metodología. En dicha reunión se precisará, si fuere el caso, la información que excepcionalmente quede aún pendiente de suministrar el Estado analizado por conducto de la Secretaría Técnica y el término en que lo hará y se coordinará cualquier otro tema pendiente que resulte de la visita in situ.”